



América Central frente a sí misma

300

50
AÑOS



NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Plataforma digital: Mariano Schuster, Eugenia Corriés

Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann

NUEVA SOCIEDAD Nº 300

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Jazmín Villagrán

Fotografía de portada: Florian Lavie Badie, Instagram: <flbphoto>

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Ingrid Reca

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 3708-1330

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

 **NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT**

STIFTUNG

Julio-Agosto 2022

Índice

COYUNTURA

- 4792 **Iván Olano Duque.** Tres momentos en el triunfo
de la izquierda colombiana..... 4

TRIBUNA GLOBAL

- 4793 **Riccardo Marchi.** Portugal y la derecha radical:
otra «excepción» que cae 14

TEMA CENTRAL

- 4794 **Gilles Bataillon.** América Central: violencia
y pseudodemocracias (1987-2022)..... 27
- 4795 **Salvador Martí i Puig.** Urgencias en la América Central
del bicentenario 41
- 4796 **Pedro Caldentey del Pozo.** América Central: fin de ciclo,
¿nuevos consensos?..... 51
- 4797 **Elvira Cuadra Lira.** Nicaragua: de proyecto
revolucionario a dinastía autoritaria 65
- 4798 **Nelson Rauda Zablah.** Los apóstoles del bitcoin
que conquistaron El Salvador..... 74
- 4799 **Ricardo Sáenz de Tejada.** Guatemala: ¿del Estado
capturado al Estado plurinacional?..... 88
- 4800 **Álvaro Murillo.** Elites alteradas en Costa Rica 101
- 4801 **Leonardo Aguilar / Jennifer Ávila.** Honduras: entre
la democratización y el poder familiar 113
- 4802 **María José Cascante Matamoros / Jesús Guzmán Castillo.**
Reconfiguraciones políticas en Costa Rica. Del bipartidismo
a la fragmentación 127

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

- 4803 **Camila Sosa Villada / Hinde Pomeranec.** Escribir
y tirar arañazos..... 140

SUMMARIES

Segunda página

A dos siglos de su independencia, América Central viene transitando una combinación de crisis, tres de cuyas dimensiones más visibles son los flujos migratorios, el aumento de la violencia y los retrocesos democráticos. Si los Acuerdos de Esquipulas activaron en los años 80 el optimismo respecto a un devenir de paz en la región, hoy muchos de sus habitantes votan con los pies y buscan probar suerte, sobre todo, en el Norte. Y quienes se quedan deben enfrentar una fuerte erosión de las instituciones, que ha derivado en la expansión del crimen organizado y en la corrupción generalizada. A tratar de entender mejor estas crisis, pero también a visualizar algunas alternativas, se dedica el Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD.

Gilles Bataillon se enfoca en los fenómenos de desdemocratización centroamericanos –incluidas tasas de homicidios que ponen a varios de los países de la región entre los más violentos del mundo– con una mirada de largo plazo: desde la década de 1980 hasta la actualidad. El nuevo auge de la violencia, con características divergentes de los viejos conflictos armados, debe leerse, argumenta el autor, en paralelo al surgimiento de formas de corrupción infinitamente más complejas y sistemáticas que en las décadas de 1980 y 1990. Militares, elites políticas y el sector judicial se han imbricado con el narcotráfico y otros negocios ilegales.

Salvador Martí i Puig estructura su contribución a partir de tres preguntas disparadoras: ¿está hoy la región mejor o peor que hace dos décadas respecto de la salud de la democracia?; ¿hay algo que festejar en estos tiempos de bicentenario? y ¿cuáles son los retos más urgentes que enfrentan los países centroamericanos en los próximos años? Las crisis política, sanitaria, migratoria y ambiental, sin olvidar la de la democracia, que operan de manera superpuesta, dan algunas respuestas a estos interrogantes, en un tiempo en el que, como en el resto del mundo, la pandemia de covid-19 agravó los problemas preexistentes. Por su parte, como nos recuerda Pedro Caldentey del Pozo en su artículo, América Central asiste a un debilitamiento de su sistema de integración regional y se vuelve necesario un nuevo paquete de consensos y principios sobre el que construir un escenario renovado de desarrollo.

Elvira Cuadra Lira aborda el caso de Nicaragua y recorre el camino que llevó de los sueños revolucionarios sandinistas de los años 80 a la dinastía autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes no han dudado en apelar a la fuerza y la violencia, y a un notable pragmatismo ideológico, con la finalidad de mantenerse en el poder y no volver a perderlo como en 1990. Pero Nicaragua no está

sola. En el caso de Guatemala, Ricardo Sáenz de Tejada muestra cómo el país del Triángulo Norte pasó de la «primavera ciudadana» de 2015, que movilizó a enormes multitudes contra la corrupción y llevó a la cárcel a las principales figuras políticas, a la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al giro autoritario de la actualidad. No obstante, advierte el autor, las luchas indígenas vienen acaudillando a una multiplicidad de sectores sociales con la bandera de la Asamblea Constituyente y la plurinacionalidad, lo que abre algunos canales de esperanza hacia el futuro.

El caso de El Salvador es retratado por Nelson Rauda Zablah a partir de una de las facetas más excéntricas del gobierno cada vez más autoritario de Nayib Bukele: la adopción del bitcoin como moneda de curso legal. Pero no es solo eso: Rauda Zablah describe un mundo casi surrealista de apóstoles de la criptomoneda y cómo han conquistado esta nación centroamericana habilitados por el jefe del Estado. Aprobado en pocos minutos por un Congreso de mayoría automática del «presidente *millennial*», hoy el bitcoin no es solo una moneda sino además una especie de proyecto de sociedad –y de negocios privados– con un incierto futuro.

Costa Rica, con su histórica «excepcionalidad», viene mostrando, no obstante, tendencias que la hermanan a sus vecinos, aunque en una escala más moderada. Álvaro Murillo escribe sobre las mutaciones en las elites a partir del encarcelamiento de un magnate local. Por su parte, María José Cascante Matamoros y Jesús Guzmán Castillo describen los procesos de fragmentación del sistema político y sus consecuencias. El triunfo del economista Rodrigo Chaves en las elecciones presidenciales de 2022, según muestran los tres autores, es el resultado de un proceso más largo de atomización del sistema de partidos, crecimiento de la abstención y emergencia de nuevos tipos de liderazgos por fuera de las fuerzas tradicionales.

Finalmente, tenemos el giro político en Honduras. Tras el golpe de Estado de 2009 y más de una década de autoritarismo y corrupción del Partido Nacional (el ex-presidente Juan Orlando Hernández fue recientemente extraditado a Estados Unidos), la izquierda volvió al poder con Xiomara Castro. No obstante, como explican Leonardo Aguilar y Jennifer Ávila, pese a las expectativas que genera la primera mujer a cargo de la Presidencia, los primeros pasos de Castro muestran una tendencia a configurar un gobierno familiar en el cual su esposo, el derrocado Manuel «Mel» Zelaya, ocupa un lugar de primer orden.

De este modo, la región que alguna vez capturó las esperanzas utópicas de gran parte del mundo con sus guerrillas, sus revoluciones y su resistencia al imperialismo estadounidense, y que luego ensayó diversos procesos de paz y transiciones democráticas, se encuentra hoy en una encrucijada. No es casual que gran parte de las luchas sociales de los últimos años fueran contra la captura de los Estados por la ilegalidad. Pero la frustración frente a las elites políticas alimenta también fenómenos como el de El Salvador, donde Bukele tiene un amplio apoyo social con su discurso contra la «vieja política». La pregunta es por dónde empezar a desenredar la madeja.

Tres momentos en el triunfo de la izquierda colombiana

Iván Olano Duque

La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez ha abierto una nueva etapa en Colombia, cuyo eje es la construcción de la paz con justicia social. Tres momentos durante la campaña electoral y los festejos de los resultados permiten capturar las dimensiones de la actual coyuntura política. Más allá de las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno, en el país se siente en el aire un cambio político, ético y estético.

Es el primer gobierno popular y de izquierdas en la historia de Colombia. Eso nadie lo discute. En 200 años de vida republicana ha habido algunos impulsos reformistas, como el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1934 o la Constitución de 1991 –que fue el resultado de un proceso de paz y el esfuerzo de una generación–, pero el poder siempre ha estado en un marco

oligárquico: un puñado de apellidos, hombres ricos y emparentados. Las contadas irrupciones populares en las instituciones no habían logrado derribar ese marco. Hasta ahora.

El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez es una ruptura radical y evidente con esa inercia histórica. Pero no fue un golpe de suerte ni un exitoso producto electoral, sino

Iván Olano Duque: es escritor. Obtuvo el Premio de Ensayo Miguel de Unamuno por su libro *El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo* (Fundación Devenir, Madrid, 2019).

Palabras claves: democracia, izquierda, Francia Márquez, Gustavo Petro, Colombia.

el resultado de un acumulado de luchas, de coincidencias afortunadas, e incluso puede leerse como una curva política que parte del momento de mayor violencia en el último medio siglo en Colombia (el auge del narco-paramilitarismo y la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez en 2002), pasa por la reactivación de muchas organizaciones populares durante el Proceso de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desemboca en movilizaciones y estallidos sociales cada vez más grandes entre 2018 y 2021. El viejo régimen había llegado a un punto de no retorno. Y no es poco el mérito de Gustavo Petro y Francia Márquez, pues palabra tras palabra establecieron otros puntos de referencia que fueron articulando las demandas de cambio: feminismo, antirracismo, pensiones, modelo de salud, cuidado del agua y el medio ambiente, limitaciones al modelo extractivista, justicia fiscal, propiedad de la tierra y soberanía alimentaria. Ellos marcaron la agenda y los términos del debate a los que los demás candidatos y el mismo establishment se vieron arrastrados.

En un país cruzado por violencias e incertidumbres, Francia Márquez habló de «vivir sabroso», un concepto amplio de vida digna, libre y sin miedos. En un país con hambre y una inmensa desigualdad, Gustavo Petro no dejó de hablar de reconciliación y diálogo, de la necesidad de una transición hacia un verdadero proyecto democrático, y de recordar

que la paz, como decía el líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948, no es otra cosa que la justicia social.

Pero la crisis del viejo régimen oligárquico, la definición de los términos del debate y el llamado a la reconciliación no son suficientes para ganar la Presidencia. Detrás de esto hay toda una serie de tensiones culturales, disputas narrativas, movimientos del imaginario colectivo. Y ante la imposibilidad de verlos y describirlos todos, tal vez convenga elegir algunas situaciones que parecerían anecdóticas, pero que ilustran dinámicas y tienen raíces y consecuencias en las relaciones de poder.

Propongo, pues, tres momentos que resumen y explican no solo el discurso disruptivo de Petro y Márquez, sino sobre todo el cambio en el sentido común de la sociedad colombiana que condujo al triunfo.

Una trabajadora barriendo las calles

Sucedió en Medellín, una semana antes de la primera vuelta, en un barrio de clase media alta. Un hombre conducía su camioneta de alta gama con publicidad de Federico Gutiérrez (el principal candidato de la derecha, con el apoyo del uribismo) en el vidrio de atrás, cuando vio que en el carrito de la basura de una trabajadora de una empresa pública de aseo había un pequeño volante de Gustavo Petro y Francia Márquez. El hombre detuvo su camioneta, enfrentó a la mujer que estaba sola

barriendo las calles, y completamente seguro de que su postura estaba justificada, sacó su teléfono móvil y empezó a grabar. Con tono agresivo y aires de superioridad, la increpó:

—¿A usted quién le dijo que tenía que cargar esa publicidad?

La mujer, de uniforme naranja con bandas reflectantes, siguió barriendo la calle.

—Nadie, señor —contestó.

—¿Por convencimiento propio? —preguntó el hombre, displicente.

La mujer asintió varias veces mientras seguía barriendo las hojas secas en el suelo.

—Muy ilegal, vea —dijo el hombre, y fue a enfocar la prueba del supuesto delito, mientras al fondo se seguía escuchando el sonido de la escoba—: esta niña tiene pegado en su carrito de Empresas Varias esta publicidad.

Era tan contrastante que parecía una parodia. Él, un hombre de derecha en su gran vehículo, sentía que tenía toda la legitimidad para manifestar públicamente su inclinación política, pero que ella, una «niña» (el término habitual en Colombia en el cruce del patriarcado y el elitismo), una mujer de clase trabajadora, estaba excediendo su lugar natural de invisibilidad y silencio. Él estaba indignado y agresivo en su barrio de casas grandes y calles arborizadas, y grababa la escena para mostrar a todos el descaro de esa mujer. Ella estaba barriendo las calles, como todos los días, y soportó con dignidad la intimidación y le dijo que sí, que ella misma había pegado con cinta y por convicción esos dos

volantes arrugados en su herramienta de trabajo.

El video se viralizó en las redes sociales. Era el retrato de un país que todavía arrastra el peso de las castas coloniales y en el que nada desespera tanto a ciertos sectores como la irrupción de la voz popular. A una semana de las elecciones, miles de personas vimos la escena como un símbolo de la coyuntura política, y a esa mujer como un reflejo de la dignidad de las mayorías sociales. Incluso el candidato Gustavo Petro replicó el video y comentó sin disimular su emoción: «Este es el pueblo por el que daría hasta mi vida».

Pero ahí no terminó la historia. Al día siguiente fue el último gran acto de campaña antes de la primera vuelta. La plaza de Bolívar de Bogotá estaba llena, se sentía en el aire la inminencia del cambio, y en mitad de su discurso Petro recordó el video del hombre rico tratando de humillar a la trabajadora. Dijo que no la conocía, y agregó:

El día de la posesión del gobierno popular quiero tenerla a mi lado, quiero que nos acompañe como invitada de honor, porque ella representa la dignidad del pueblo trabajador, la dignidad de quien no baja la frente, la dignidad de quien no hinca la rodilla, la ciudadana moderna que se sabe libre, autónoma, sujeta de derechos; mujer poderosa y sabia, trabajadora, como la Policarpa, tan querida, que ayudó a fundar esta nación.

Hasta allí había un potente mensaje político contra un orden elitista, un orden de exclusión y humillación permanente a los de abajo. Pero Petro fue más allá, tal vez por su afinidad con la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres; tal vez porque le pareció un acto mínimo de justicia. Lo último que hizo el sábado 28 de mayo, el día anterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fue ir a cenar con esta mujer trabajadora, Kellyth Garcés, y su hijo Justin. Era un mensaje directo al viejo régimen y a «los nadies», el concepto de Eduardo Galeano que se popularizó tanto en campaña. Y solo se publicó una foto, desde lejos, discreta, conversando, sonrientes.

Las familias y la politización de lo cotidiano

Han sido tantas las transformaciones y los hitos políticos en Colombia en los últimos años, que suele pasarse por alto que Petro devolvió la política a las plazas públicas. Desde hacía tiempo, la disputa política y electoral se había reducido al ámbito de los grandes medios de comunicación. Y en el oligopolio mediático colombiano no había mucho margen para la irrupción de discursos que fueran más allá de la seguridad, el conflicto armado y la corrupción.

Fue en su destitución en 2013 como alcalde de Bogotá —por parte de un funcionario administrativo de extrema derecha y como represalia por la desprivatización parcial de un servicio público— cuando Petro surgió como convocante, orador y líder de multitudes¹. Fueron tres días seguidos con la plaza de Bolívar llena de ciudadanos que exigían el respeto por el voto popular y la restitución del alcalde que estaba impulsando ambiciosas políticas sociales. El nerviosismo del establishment quedó retratado en una portada de la revista *Semana*: una fotografía de Petro dando un discurso desde la sede de la Alcaldía y el titular «¡No más balcón!».

Gracias al descubrimiento accidental de ese potencial comunicativo y popular, la apuesta de Petro y la Colombia Humana —su proyecto político— en 2018 fue empezar a llenar plazas en todo el país. A veces una, dos y hasta tres en un mismo día. Los grandes medios no reproducían las imágenes, pero sí lo hacían las redes sociales, y su discurso de justicia social arraigó con tanta fuerza que más temprano que tarde los demás candidatos se vieron obligados a referirse a él y a moverse en sus márgenes.

En esta campaña de 2022, ya no solo con Colombia Humana sino con el Pacto Histórico —la apuesta por un frente amplio—, la estrategia fue la misma: plazas públicas, multitudes en grandes, medianas y pequeñas

1. Arturo Wallace: «Destituyen e inhabilitan por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro» en *BBC Mundo*, 9/12/2013.

ciudades, discursos largos y pedagógicos. Se decidió además hacer mayor presencia en esos lugares del país en los que hace cuatro años hubo menos apoyo, con el convencimiento de que bastaba que la gente lo escuchara, romper en las plazas el cerco mediático para construir una nueva mayoría y un nuevo sentido común.

Así, en los últimos meses antes de las elecciones, Petro llenó y dio discursos en alrededor de 130 plazas en toda Colombia. Fue una maratón y una logística difícil, pero también una tensión con el oligopolio mediático, porque hubo algunas semanas en las que el candidato dejó de ir a los debates casi cotidianos que estaban organizando los grandes medios. El planteamiento era claro: ya se había debatido y se volvería a debatir en los últimos días antes de las elecciones, pero si Petro dedicaba su último mes a los medios no solo estaría en terreno del adversario —en el que el objetivo único de candidatos y comunicadores era derrotarlo—, sino que además eso impediría hacer presencia en las plazas de muchas ciudades. Fue una decisión acertada: las plazas estaban llenas, y los debates sin Petro estaban sin *rating*.

Así se llegó al triunfo en primera vuelta: ocho millones y medio de votos por Gustavo Petro y Francia Márquez. Y por un giro de las últimas dos semanas su adversario en segunda vuelta sería Rodolfo Hernández, un empresario multimillonario imputado por corrupción, famoso por su despotismo,

su autoritarismo y su ignorancia en casi todos los temas, pero que era un exitoso producto de *marketing* político a fuerza de redes sociales y la repetición incesante de que iba a acabar con la corrupción «dándole juete a los corruptos». ¿Cuál debía ser la estrategia de Petro para las semanas que quedaban antes de la segunda vuelta? Ya las plazas parecían agotadas. Ya se había convocado a las multitudes y se habían dado discursos de muchas horas. La decisión, inteligente y sensible a la vez, es a mi juicio el segundo momento que resume y explica el triunfo.

Se decidió hacer todo lo contrario de las plazas, los discursos y las multitudes: durante dos semanas Petro se dedicó a visitar, a conversar, a compartir la cocina y la mesa de familias de clase trabajadora de todo el país.

Empezó el viernes durmiendo en casa de Arnulfo, un pescador a orillas del Magdalena. A la madrugada siguiente lo acompañó en el río por varias horas y luego conversó con su familia. Esa tarde viajó a Medellín para cenar con una familia de campesinos floricultores. El lunes almorzó con pequeños mineros de Boyacá, todos sentados en una tabla larga y con la olla sobre las piernas, resolvió dudas sobre su plan de transición energética y bajó a la mina. El miércoles fue a la casa de Genoveva y sus hijos en un barrio de Quibdó —la ciudad con mayor índice de pobreza de Colombia—, ayudó a fritar los plátanos de la cena, durmió en una de las habitaciones de la casa y al día siguiente

tuvo que bañarse con un balde porque no funcionó la ducha.

Así continuó varios días, para arriba y para abajo, de una esquina a otra esquina de Colombia. Antes de la primera vuelta, sus jornadas eran de plaza en plaza, ahora eran de mesa en mesa, de familia en familia, dialogando, compartiendo las jornadas de trabajo. La cobertura mediática era mínima y en el aire estaba el resquemor de que renunciar en la recta final a las multitudes podía ser un error. Pero había algo en esas imágenes que le daban un nuevo sentido a toda la campaña.

A diferencia de Iván Duque y Álvaro Uribe, del candidato Hernández y de casi cualquier miembro de la clase dirigente colombiana, Petro iba a los barrios populares no como un turista, y cogía un machete y se ponía las botas de caucho no como un disfraz, sino como herramientas naturales de su ámbito económico y cultural. En otras palabras, a diferencia de todos los demás, Petro hace parte de la clase trabajadora de Colombia y por eso, aunque nadie ignoraba que estaba en campaña y transmitiendo un mensaje, en esos espacios no se veía una actitud falsa o impostada.

Había incluso algo más que el mensaje de pertenecer –y por tanto defender– a la clase trabajadora. Tal vez no fue el propósito, pero sí fue el resultado: se transmitió a toda Colombia, en una coyuntura de vértigo, que la política no está en los grandes discursos multitudinarios, sino en la vida cotidiana, en el aire de cada día, en los

tiempos para conversar, para trabajar, para cocinar y compartir la mesa. Y que era posible dar a este conjunto de particularidades un relato compartido y un horizonte de acción.

La madre de Dilan Cruz

El 21 de noviembre de 2019 se inició el gran Paro Nacional en defensa de la paz, contra el asesinato de líderes sociales y las políticas neoliberales del gobierno de Duque. Fue tal la dimensión de las movilizaciones en todo el país que se volvió común hablar del último gran referente de algo así en Colombia: el Paro Cívico Nacional de 1977. Y así como haría el año siguiente, en las movilizaciones de 2020 contra la brutalidad policial, y el siguiente, en el gran estallido social de 2021 (probablemente el más grande en medio siglo), la respuesta del gobierno de Duque fue militarizar ciudades, aumentar el discurso de criminalización de la protesta social y darle vía libre a la Policía Nacional para reprimir a sangre y fuego a los manifestantes.

El 23 de noviembre de ese 2019, en el centro de Bogotá, un capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó en la cabeza con una escopeta «de letalidad reducida» a Dilan Cruz, un joven de 18 años al que le faltaban dos días para graduarse del bachillerato. Lo mismo estaba sucediendo en todo el país: jóvenes heridos, mutilados, asesinados por la

Policía, pero en esta ocasión sucedió en un punto en el que había por lo menos una docena de cámaras grabando desde distintos ángulos. En una de ellas se ve a los oficiales del ESMAD decir, justo antes de disparar: «¡A quien sea pero ya! ¡Dele, dele!».

Dilan Cruz estuvo dos días en estado crítico: la bolsa de tela con bolitas metálicas (la munición de «letalidad reducida») se le incrustó en el cerebro. Lo vio tanta gente que se convirtió en un símbolo de las movilizaciones, el símbolo de un Estado que no dejaba de asesinar –en la guerra y la protesta– a los más jóvenes. Dilan Cruz protestaba por un país más justo y un sistema educativo para todos, y falleció el día de su graduación.

Por eso fue tan significativo lo que sucedió la noche del 19 de junio de 2022, cuando Gustavo Petro y Francia Márquez estaban celebrando su victoria junto a miles de ciudadanos. Todas las cadenas de televisión estaban transmitiendo en directo. Todos los medios internacionales estaban grabando y enviando los primeros reportes. Todos estábamos atentos a los primeros discursos de la vicepresidenta y el presidente electos, sin todavía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Francia Márquez habló primero, y luego, cuando Petro estaba en la mitad de su discurso, por encima de las cabezas de las decenas de personas que estaban en la tarima empezó a avanzar una fotografía grande en un marco de madera. La portaba Jenny Alejandra Medina, la madre de Dilan Cruz, abriéndose paso. La gente veía la fotografía de su hijo y

poco a poco la dejaba pasar, hasta que llegó al lado de Petro, que estaba dando su discurso de victoria. Él la vio, cortó la frase a la mitad, la abrazó y le dio el micrófono.

Este es a mi juicio el tercer momento que resume y explica el triunfo: la madre de Dilan Cruz no solo habló, dijo lo que le había sucedido y lo que estaba pensando y sintiendo, sino que irrumpió en medio del gran discurso del poder. Esta fue la muestra de un cambio necesario de paradigma en la relación entre el Estado y las víctimas. Y es parte de un nuevo relato que se ha construido desde abajo, en las asociaciones de víctimas, en el movimiento social, en el Proceso de Paz, y que han recogido y replicado Márquez y Petro en todo el país. Ya no es la hora de los negacionistas del conflicto; ya no más gestores de la indolencia heredada de las elites. En uno de los países más desiguales del mundo, después de décadas de conflicto armado en el que 80% de las víctimas fueron civiles y en el que el Estado ha sido un victimario central, por acción y por omisión; ante las millones de personas en situación de desplazamiento forzado, ante la impunidad sistemática, ante el vicio arraigado de silenciar y revictimizar a las víctimas, los futuros gobiernos solo serán legítimos en la medida en que sean capaces de mirar a la barbarie a los ojos y reconocer públicamente el horror de tantas injusticias acumuladas.

Lo que Petro hizo al darle el micrófono a la madre de Dilan Cruz en su gran momento de victoria –cuando todas

las cámaras esperaban escucharlo a él—significa un cambio de prioridades en el uso de la palabra en la esfera pública. Significa que cuando los de abajo hablan, cuando las víctimas hablan, el poder debe callarse y escuchar.

El sancocho nacional

De modo que el nuevo gobierno, popular y de izquierdas, ha sido el resultado no solo de luchas acumuladas y de una crisis del viejo régimen de exclusión, sino de transformaciones importantes en el sentido común. La pregunta natural ahora es cuál va a ser su margen real de acción y hasta dónde van a llegar las transformaciones.

Pues bien, habría que empezar reconociendo que a pesar de que un día militó en una guerrilla revolucionaria y se alzó en armas contra el Estado, es difícil encontrar un líder político en Colombia menos sectario que Petro, más dispuesto a hablar hasta con sus adversarios más acérrimos. O corrijo: esto quizás suceda precisamente porque militó en una guerrilla particular, el M-19, y no solo participó en un proceso de paz que derivaría en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y acompañó de cerca al comandante Carlos Pizarro en su defensa apasionada de la audacia y la imaginación para transformar Colombia, sino que tuvo siempre como referencia la idea del «sancocho nacional».

El concepto es de Jaime Bateman Cayón, cofundador y comandante del M-19 hasta la mañana de 1983 en que

la avioneta en la que viajaba a Panamá se desplomó en la selva del Darién. Era un hombre caribe, festivo, espontáneo, y por eso para resumir la necesidad de un gran diálogo nacional en el que se entendieran viejos adversarios, distintas ideologías y corrientes políticas por el bien del país, apeló al nombre de la más popular de las sopas colombianas.

En esta campaña de 2022, incluso más que en la de 2018, Petro llamó constantemente a todos los actores políticos, incluso de derecha y extrema derecha, a que se sumaran a un gran pacto por la justicia social en Colombia. Por eso el nombre de su coalición es el Pacto Histórico. Y esto se complementa con otra bandera icónica para la reconciliación y modernización de Colombia, la de Álvaro Gómez Hurtado —hijo del ex-presidente, conservador, constituyente en 1991 y asesinado en 1995—: el pacto sobre lo fundamental.

Petro defendió estas ideas en toda la campaña, por eso aceptó a miembros del viejo establishment en su proyecto político y ha dicho que —contrario a lo que siempre ha hecho la derecha— la oposición tendrá las puertas abiertas para conversar en la Casa de Nariño. Y también por eso en sus primeros días de presidente electo se ha reunido no solo con Hernández, el candidato derrotado, sino incluso con el ex-presidente Uribe.

En ello reside una de las grandes potencias del nuevo gobierno (todos son bienvenidos en el sancocho nacional, la concertación es posible, y en medio

de las diferencias podemos suscribir un pacto sobre lo fundamental), pero quizás también una limitación y un reconocimiento tácito de fragilidad. Está bien conversar y que entre aire fresco en las instituciones. Está bien abrir espacio en el gobierno a individuos con capacidad de gestión, aunque vengan de otras ideologías y tradiciones políticas. Está bien, en un país habituado a la guerra, que los distintos actores se escuchen en un marco institucional y no violento. Pero la política —la realidad— es confrontacional. El gran hosanna del abrazo colectivo satisface a la moral conservadora, tal vez neutraliza algunos discursos hostiles, pero plantea el riesgo de reducir radicalmente el margen de acción. Además es un espejismo, porque cambiar cosas implica molestar a mucha gente.

Tarde o temprano, cuando empiecen las reformas, cuando se ponga en cuestión la doctrina neoliberal y los grandes poderes se vean amenazados con medidas concretas, todas las moladuras y la ysería de la conciliación y la unidad se vendrán abajo. Y entonces los pilares de la fuerza real quedarán al descubierto.

Lo revolucionario en Colombia

Gustavo Petro es consciente de la tensión y la fragilidad. Ya lo vivió en la Alcaldía de Bogotá y de allí ha sacado varias lecciones. Él sabe que tiene muchos frentes de lucha, y que cualquiera de ellos puede desencadenar las fuerzas para tumbar su gobierno. Recuerdo

una entrevista de hace muchos años en la que decía —cito de memoria—: «Es suficiente con una acción coordinada de los camioneros para tumbar un gobierno en Colombia». Y estos días se han conocido reuniones organizadas por oficiales retirados invitando a militares activos a desconocer el mando del nuevo presidente, pues dicen que rendirle cuentas a un ex-guerrillero es la mayor humillación en la historia de las Fuerzas Militares.

Los adversarios son muchos y poderosos. La industria financiera, las mafias en todos los sectores, los ejércitos del narcotráfico, el oligopolio mediático, los grandes latifundistas... apenas vean una gran debilidad saltarán a la yugular del nuevo gobierno. Y es por la conciencia de esto, por el análisis concreto de la realidad concreta, que desde algunos meses antes de las elecciones Petro empezó a plantear que lo realmente ambicioso era aspirar a un gobierno de transición, uno que sin ser una revolución abriera un nuevo ciclo en Colombia, dejara por fin atrás la violencia política y asegurara una serie de derechos fundamentales. Es la suscripción de otra de las ideas de Jaime Bateman Cayón: «Lo más revolucionario hoy en Colombia es la democracia».

¿Hasta dónde va a llegar el nuevo gobierno? Me atrevo a decir que los cambios en el sentido común que lo llevaron a la victoria son la mayor garantía de una transformación de largo aliento y que no termina con Gustavo Petro y Francia Márquez, sino que apenas empieza. Ya los marcos se han ampliado,

los mitos funcionales al viejo régimen se han vuelto añicos, la correlación de fuerzas no deja de moverse y el futuro nunca se ha visto tan inmenso. Por eso son tan significativos esos tres momentos de la campaña: el de la dignidad de «los nadies», el de la politización de lo cotidiano y el de la legitimidad y urgencia

de la voz de las víctimas y los de abajo en la esfera pública. Más allá del triunfo histórico, más allá del nuevo ciclo progresista en América Latina, esta reivindicación popular ya es revolucionaria en Colombia. Tenemos esperanza: ya se siente en el aire un cambio político, ético y estético. ☐

RELACIONES INTERNACIONALES

Enero-Junio de 2022

La Plata

Año 31, N° 62

EDITORIAL: **Norberto Consani**. **DIÁLOGOS:** **Roberto Savio**. **ESTUDIOS:** La expansión internacional de las empresas automotrices de China a través de la inversión extranjera directa (2001-2020), **José María Resiale Viano**. Sudamérica en la geopolítica de los hidrocarburos. Una aproximación a los casos de Vaca Muerta y el Prê-Sal, **Jonatan Núñez**. La política del Banco Mundial hacia la política asistencial argentina (2002-2018), **Emiliano Fernández**. Autonomía y valor estratégico de los países periféricos: análisis de la literatura y propuesta teórica, **Lautaro N. Rubbi**. **DOSSIER A 40 AÑOS DE MALVINAS:** México frente a la Guerra de las Malvinas. Una aproximación retrospectiva, **Luz Araceli González Uresti**, **Zidane Zeraoui**. Uruguay y la Guerra de las Malvinas, **José Ramiro Podetti**. Una diplomacia de papel: la posición de la derecha tradicional colombiana frente a la guerra de Malvinas, **David Antonio Pulido García**. La diplomacia boliviana en la cuestión de Malvinas. Remembranza de hitos a favor de la Argentina a 40 años del conflicto, **René Quisbert Aguilar**. Hércules contra Hércules: la historia de uno de los momentos más emblemáticos de la guerra de las Malvinas, **Thayssa Wendling**. A 40 años de un conflicto que cambió la visión de América Latina: la solidaridad persistente de Venezuela con Argentina en la reclamación sobre las Islas del Atlántico Sur, **Claudio Alberto Briceño Monzón**. **REFLEXIONES:** Algunas reflexiones sobre el reordenamiento mundial y la Cooperación Sur-Sur, **Gladys Lechini**. **HISTORIA:** El mundo y Malvinas a través del tiempo, **Patricia Kreibohm**.

Director – Fundador: Dr. Norberto Consani

Relaciones Internacionales es una publicación del Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 e/ 6 y 7 – 5° Piso, 1900, La Plata, Argentina. Tel.: (54-221) 4230628. Página web: <www.iri.edu.ar>. Correo electrónico: <iri@iri.edu.ar>.

Portugal y la derecha radical: otra «excepción» que cae

Riccardo Marchi

La llegada al Parlamento del primer diputado de Chega en 2019 constituyó un paso en la consolidación de una fuerza de derecha de un volumen inexistente desde la caída de la dictadura. En los tres años que siguieron, Chega atravesó un proceso de consolidación organizacional, ideológica y electoral, que lo condujo a ser actualmente la tercera fuerza política en cantidad de representantes en el Parlamento, con vínculos con otras fuerzas radicales en el ámbito europeo e internacional.

La democracia portuguesa contemporánea surgió a partir del golpe de Estado militar que, el 25 de abril de 1974, derrocó al régimen autoritario del Estado Novo, fundado por António de Oliveira Salazar en 1933 y comandado por él mismo hasta 1968, cuando, por razones de enfermedad, fue suplantado

por su sucesor Marcelo Caetano. El carácter marcadamente derechista del régimen de Salazar condicionó el rumbo adoptado por los partidos en formación durante la transición democrática. En el campo no socialista, ninguna fuerza quiso posicionarse oficialmente a la derecha del espectro político. Dentro

Riccardo Marchi: es investigador del Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro de Estudios Internacionales (Lisboa), y profesor invitado de la Universidad Lusófona de Lisboa. Su área de investigación es el radicalismo de derecha en Occidente, con foco en la historia contemporánea de Portugal, entre el autoritarismo y la democracia.

Palabras claves: extrema derecha, Chega, Andrés Ventura, Portugal.

Nota: la investigación que dio origen a este artículo fue apoyada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) de Portugal, bajo el proyecto Grant PTDC/CPO-CPO/28748/2017. Traducción del portugués de Cristian De Nápoli.

de ese espacio que adquiere representación parlamentaria ya en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1975, los protagonistas fueron el Partido Popular Democrático (Partido Social Demócrata, PSD, a partir de 1976) y el Centro Democrático Social (CDS). El PSD fue fundado por los animadores de la semioposición liberal interna a la dictadura en los últimos años de Caetano. En cuanto al CDS, lo fundaron segundas líneas del aparato jurídico-administrativo del régimen autoritario, identificados con el conservadurismo y la democracia cristiana¹. A lo largo de la transición democrática, fueron varias las tentativas de organizar partidos ubicados más a la derecha del CDS, con objetivos principales como el de salvaguardar la presencia de Portugal en África y obstaculizar la instauración de un régimen marxista por parte de las izquierdas radicales, en particular del Partido Comunista Portugués (PCP) y de la facción revolucionaria del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), autor del golpe militar de 1974. Esas tentativas identificadas con la extrema derecha fueron protagonizadas por fuerzas integristas de ultramar en el imperio portugués –Partido del Progreso (MFP-PP) y Partido Liberal (PL)–, por católicos liberales-conservadores –Partido de la

Democracia Cristiana (PDC)– y, más tarde, por nacionalistas –Partido de la Derecha Portuguesa (MIRN-PDP), del general Kaúlza de Arriaga–. Todas ellas conformaron, sin embargo, iniciativas efímeras, reprimidas durante la fase revolucionaria de la transición democrática (1974-1975) y definitivamente liquidadas tras la victoria, en las elecciones legislativas de 1980, de la Alianza Democrática, coalición electoral formada por el PSD, el CDS y el PPM (Partido Popular Monárquico)².

A partir de entonces, el espectro partidario portugués se cristalizó en torno de los partidos fundadores de la democracia en el país: a la izquierda, el Partido Socialista (PS) y el PCP; a derecha, el PSD y el CDS. Este panorama se mantuvo inalterado durante las últimas dos décadas del siglo XX, con la excepción relevante, aunque efímera, del Partido Renovador Democrático (PRD), presente en el Parlamento entre 1985 y 1991. Los cambios más importantes recién se registraron en los inicios del siglo XXI, con el ingreso al Parlamento, en las legislativas de 1999, del Bloque de Izquierda (Bloco de Esquerda, BE), partido de la nueva izquierda fundado por sectores radicales críticos del «socialismo real»³. En el polo opuesto, ninguna de las agrupaciones ubicadas más a la derecha

1. Carlos Jalali: «The Portuguese Party System: Evolution in Continuity?» en António Costa Pinto y Conceição Pequito Teixeira (eds.): *Political Institutions and Democracy in Portugal*, Palgrave, Londres, 2019, pp. 77-99.

2. R. Marchi: *The Portuguese Far Right Between Late Authoritarianism and Democracy (1945-2015)*, Routledge, Londres, 2019.

3. Marco Lisi: «New Politics in Portugal: The Rise and Success of the Left Bloc» en *Pôle Sud* vol. 1 N^o 30, 2009.

del CDS logró por entonces acceder al Parlamento. Entre estas contaron, especialmente, el Partido Nacional Renovador (PNR), fundado en 1999 por militantes de la extrema derecha tradicional salazarista, y el Partido de la Nueva Democracia (PND), lanzado en 2003 por el antiguo líder del CDS, Manuel Monteiro, con una agenda conservadora, euroescéptica y promotora de un discurso de populismo de protesta. Habría que esperar hasta 2019 para que la derecha radical accediese, de manera inédita, al Parlamento, a raíz de la elección del diputado André Ventura, fundador y presidente del partido Chega [Basta]⁴. Y si junto con España, Portugal era considerado una excepción europea en relación con la extrema derecha, debido, según algunos analistas, a la proximidad del salazarismo y el franquismo, hoy ambos países de la Península Ibérica ya tienen sus fuerzas de derecha radical en el Parlamento.

Chega es el fruto del emprendedurismo político de su fundador, André Ventura. Nacido en 1983 en el seno de una familia de la pequeña burguesía suburbana de Lisboa, a los 15 años Ventura adhirió a la Juventud Social Demócrata (JSD), la organización juvenil del PSD. Imbuido de fervor religioso, frecuentó sus estudios secundarios en el seminario sin, no obstante, continuar por el camino sacerdotal, y obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Nueva de Lisboa para

luego doctorarse en la Universidad de Cork, en Irlanda. A continuación inició su carrera como docente universitario en instituciones privadas y, en paralelo, como inspector tributario en la administración pública, para más tarde dar inicio, en 2014, a su proyección pública como comentarista televisivo en programas sobre seguridad, justicia, política y deportes.

Las intervenciones televisivas de Ventura, hinchado del club Benfica —el más popular entre los portugueses—, hicieron de trampolín hacia el gran público y de escuela donde pulir sus dotes de polemista en debates públicos polarizados. Por esos años, el futuro líder de la derecha populista portuguesa buscó promoverse dentro del PSD, donde pasó a integrar hasta 2017 el Consejo Nacional del partido, apoyando al presidente del PSD, el ex-primer ministro Pedro Passos Coelho. Ya en esa etapa, Ventura comienza a diseñar proyectos políticos autónomos de cariz populista, inspirados en el partido antisistema italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S) y en el estilo osado del francés Nicolas Sarkozy, a quien Ventura venía siguiendo desde sus disputas con los jóvenes de las periferias parisinas cuando era ministro de Interior, en 2005. Su proyectada autonomía no avanzó entonces, puesto que en 2017 el PSD le ofreció la primera oportunidad relevante para su carrera política: la candidatura dentro de la coalición PSD-CDS-PPM, de cara a las elecciones

4. Jorge M. Fernandes y Pedro C. Magalhães: «The 2019 Portuguese General Elections» en *West European Politics* vol. 43 N° 4, 2020.

municipales de 2017, como cabeza de lista para la Cámara Municipal de Loures, importante centro urbano del área metropolitana de Lisboa tradicionalmente gobernado por la izquierda. En el marco de esa campaña, Ventura inauguró la estrategia comunicacional que lo caracterizaría después: la adopción de posiciones radicales en cuestiones sociales y políticas sensibles, polarizando la opinión pública y conquistando la atención de los medios. En 2017, en concreto, lo hizo posicionándose con dureza respecto de la importante comunidad gitana residente en Loures y sus problemas de integración (deserción escolar, matrimonios de menores), dependencia de subsidios y microcriminalidad. La estrategia comunicacional funcionó: Ventura logró la atención de los medios y la reacción de todos los partidos de izquierda, incluido el primer ministro socialista; generó incluso la fractura, en Loures, de la coalición de centroderecha que lo tenía al frente (con el abandono del partido CDS). Ventura saltó, de este modo, de candidato local a figura polémica nacional. Y utilizó el buen resultado obtenido en Loures —un número absoluto de votos nunca alcanzado por el PSD, aunque insuficiente para el triunfo— como plataforma hacia la conquista del partido. Así es como creó, en 2018, el Movimiento Chega, dentro del PSD, con la intención explícita de competir en internas por la presidencia del partido e imprimirle una orientación plena a la derecha, en contra de la línea centrista de su dirección. Y ante la negativa de los cuadros partidarios

de apoyarlo en su escalada, Ventura transformó el Movimiento Chega en un partido autónomo.

El proceso comenzó a fines de 2018, con el apoyo de un reducido grupo de personas de su red propia: amigos de juventud, viejos colegas de facultad, estudiantes de sus cursos universitarios, adeptos conquistados en las elecciones municipales de 2017. Es decir, Chega no nació como escisión de una derecha interna del PSD integrada por cuadros y militantes previamente organizados que pasaran a apoyar al nuevo líder. La fragilidad inicial del proyecto, de hecho, quedó patente desde el arranque. En marzo de 2019, el Tribunal Constitucional detectó diversas irregularidades en las 7.500 firmas presentadas por el partido para su habilitación. En mayo, aun sin respaldo legal, Chega se vio obligado a aliarse con otras formaciones de cara a las elecciones europeas —lo hizo con dos pequeños partidos, el PPM y el Partido Ciudadanía y Democracia Cristiana (PPV/CDC), y con el movimiento Democracia21—. Encabezada por Ventura, esta alianza adoptó la denominación «Basta» y obtuvo apenas 1,49% de los votos (poco menos de 50.000) y ningún eurodiputado. Fue un resultado muy débil, que se acentuó en septiembre de 2019 al obtener un raquítico 0,43% en las elecciones regionales del archipiélago de Madeira.

De todos modos, la campaña en las elecciones europeas sirvió para ensayar la línea política del partido: una identidad liberal-conservadora, traducida en un planteamiento de ley y orden y de populismo de protesta, apoyándose

en posicionamientos polémicos orientados a la conquista del espacio mediático: reducción drástica del número de diputados del Parlamento nacional, cadena perpetua para crímenes brutales, castración química para pedófilos. En lo tocante a Europa, Chega no hizo suyo el euroescepticismo típico de las derechas radicales europeas, sino apenas ese antifederalismo característico de la derecha *mainstream* portuguesa, algo más amoldado al fuerte europeísmo en la opinión pública nacional.

La oficialización de esta línea política se llevó a cabo en la primera convención nacional de Chega, en junio de 2019, en la que se establecieron los órganos dirigentes del partido y se aprobó el programa para las elecciones legislativas del 6 de octubre de 2019. En la campaña electoral para las legislativas, Chega mantuvo su identidad liberal-conservadora diferenciándose de los partidos de centroderecha por su marcado tono antisistema: denuncias de la partidocracia y de la corrupción política enquistada en la democracia portuguesa; llamado a fundar la Cuarta República presidencialista con una reforma radical de la Constitución; refuerzo de las políticas de seguridad y legalistas, mediante el apoyo a las fuerzas policiales y el rechazo a la «subsidiodependencia» de las minorías étnicas; combate cultural contra la agenda posmaterialista de la izquierda, es decir, con respecto a la corrección política, la llamada «ideología

de género», la agenda LGBTI+, la descolonización de la cultura. En términos económicos, el programa de Chega presentaba un marcado sesgo liberal, apuntalado en los planteos de la escuela austriaca de economía de Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Sus medidas más polémicas eran la reducción drástica de la progresividad en los impuestos, de cara al objetivo de un *flat tax* único de 15%, y la introducción del principio de un Estado financiador pero no prestador de servicios, incluso en las áreas de salud y educación.

El programa político presentado para las legislativas de 2019 incorporó a Chega en la familia política de los partidos populistas de derecha radical⁵, particularmente dentro de lo que es la nueva derecha, que no reivindica el legado histórico de los regímenes autoritarios del pasado⁶. En repetidas ocasiones, por cierto, Ventura rechazó toda nostalgia estadonovista, responsabilizando a Salazar del atraso económico y estructural del Portugal contemporáneo. El líder de Chega prefería presentarse como un hombre de la generación de la década de 1980, apegado a la democracia liberal y siempre orgulloso del pasado heroico del país —la era de los «descubrimientos» y del Imperio portugués—, aunque sin nexos con la glorificación del pasado propia de la dictadura de Salazar.

En comparación con los programas del resto de los partidos con presencia

5. Mariana S. Mendes: «'Enough' of What? An Analysis of Chega's Populist Radical Right Agenda» en *South European Society and Politics* vol. 26 N° 3, 2021.

6. R. Marchi: *A nova direita anti-sistema. O caso do Chega*, Edições 70, Lisboa, 2020.

parlamentaria, el programa de Chega revela una preeminencia más clara del populismo en sus tres dimensiones de antielitismo, idea de un pueblo virtuoso y celebración de la soberanía popular⁷. Más allá de su sesgo fuertemente neoliberal, el programa presenta un marcado cariz identitario conservador, que, según algunos autores, traza una dicotomía entre los portugueses «verdaderos» y los «no portugueses», como los gitanos o las personas de origen migrante⁸. Para otros autores, la insistencia en las temáticas legalistas y de seguridad encuadra a Chega entre los partidos con una estrategia de populismo punitivo nativista, por promover la imagen del *outsider* peligroso para la seguridad del *insider*⁹.

Con solo 66.448 votos conquistados (1,3%), Chega logró llevar a Ventura al Parlamento nacional. El resultado apenas alcanzó para asegurar la elección del líder del partido en el distrito electoral de Lisboa, el único accesible para los partidos pequeños. Los mejores desempeños de Chega se registraron tanto en áreas de alta como de baja intensidad poblacional. La superposición geográfica con las áreas tradicionalmente comunistas no permite hacer ninguna deducción sólida

acerca de la eventual transferencia de votos de la izquierda radical a la derecha radical¹⁰.

Convertido en el primer diputado de extrema derecha de la Asamblea de la República desde la Revolución de 1974, André Ventura conquistó de inmediato la atención de los medios de comunicación y de los distintos partidos de izquierda. La consecuencia fue el crecimiento palpable de Chega en los meses que siguieron a aquella elección: el partido multiplicó sus seguidores en redes sociales, al tiempo que saltaba de 700 a 15.000 afiliados para el verano de 2020 –los 40.000 declarados por el partido en 2021 parecen excesivos, pero es evidente su progresión ascendente– y registraba un incremento constante en las encuestas, posicionándose como tercera fuerza política detrás del ps y el PSD, aunque sin superar el 10% en la intención de voto. Con esto, el partido hizo una apuesta inmediata a la movilización en las calles, algo inusual para la derecha portuguesa *mainstream*. Son emblemáticas sus manifestaciones de apoyo a los reclamos de las fuerzas de seguridad –en movilizaciones no coordinadas por los gremios tradicionales–, de oposición a las medidas

7. João Palhau, Patrícia Silva y Edna Costa: «Populismo nos partidos políticos portugueses – Os programas eleitorais de 2019» en *População e Sociedade* N° 35, 6/2021.

8. Paulo Miguel Fernandes Madeira, Katielle Susane do Nascimento Silva y Jorge Silva Macaísta Malheiros: «The Geography of the Nationalist Right in Portugal: Outlines of an Emerging Process» en *Cadernos Metrópole* vol. 23 N° 51, 2021.

9. Alfonso A. López-Rodríguez, Álvaro González-Gómez y Serafín González-Quinzán: «Populismo punitivo y extrema derecha en el espacio ibérico» en *Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas* N° 35, 2021.

10. P. Magalhaes, J. Fernandes y Mafalda Pratas Fernandes: «As legislativas à lupa» en *Expresso Semanário*, 12/10/2019.

del gobierno socialista y de rechazo a la agenda identitaria de las izquierdas, principalmente en lo relativo a campañas que combaten el llamado racismo estructural o alertan sobre la necesidad de descolonizar la cultura y la memoria histórica portuguesas.

Su consolidación hizo de Chega un interlocutor para los partidos de centroderecha, por ahora solo en el caso de la Región Autónoma de las Azores, donde, en noviembre de 2020, PSD y CDS firmaron un acuerdo para garantizar el apoyo externo del partido de Ventura al gobierno de centroderecha que pone fin a 20 años de poder socialista. Las izquierdas denunciaron que ese acuerdo equivalía a una normalización de la extrema derecha y la polémica se extendió al interior de la centroderecha, muchos de cuyos adeptos se oponían a cualquier forma de populismo. El asunto fue particularmente sensible en tanto evidenció una fuerte capacidad de Chega para atraer también al electorado de centroderecha. La base electoral y militante del partido se amplió a partir de dos ejes: por un lado, el apoyo de electores antisistema o que se manifiestan hartos del sistema político (que llevaban muchos años de abstención electoral) y que ahora se sienten atraídos por Chega y su inédita oferta política de protesta; y, por otro lado, el respaldo de afiliados al PSD y el CDS descontentos con el vector centrista de ambos partidos o estimulados por las oportunidades

de carrera política que el nuevo actor antisistema les proporciona. Considerando la escasa relevancia de los conflictos étnicos y migratorios en Portugal, y tomando en cuenta el estancamiento de la insatisfacción de los portugueses con el sistema político durante la segunda década del siglo XXI, algunos autores concluyen que la falta de diferenciación en los partidos moderados respecto de los temas socioeconómicos y la apertura de los electores a ofertas políticas alternativas son las razones que mejor explican el avance de Chega¹¹.

Sea como fuere, la pluralidad de culturas y aspiraciones políticas que confluyeron en Chega multiplicó las tensiones internas, en los niveles local y nacional. El partido se vio obligado a celebrar tres congresos nacionales en apenas dos años para estabilizar su estructura. Pese a ello, no logró aquietar la conflictividad interna, lo que quedó a la vista con la salida de varios de sus fundadores a lo largo de la primera legislatura (2019-2022) y en la creciente oposición interna, hasta ahora sin consecuencias desde el punto de vista organizativo. La preocupación por la imagen en los medios y las redes sociales llevó a Ventura a concentrar el poder y tomar medidas polémicas, como la creación de la Comisión de Ética, diseñada para suspender la crítica interna, o la desarticulación de las facciones supuestamente radicales —integradas por jóvenes empeñados en

11. João Carvalho: «Understanding the Emergence of Extreme Right Parties in Portugal in the Late 2010s» en *Parliamentary Affairs*, 7/2/2022.

la estructuración de la incipiente organización juvenil de Chega—, consideradas nocivas para la imagen del partido en los medios. El estilo personalista de Ventura viene siendo la constante a través de los años, en sintonía con su estrategia discursiva de populismo mesiánico, carismático y autoritario¹². Ejemplo de esto es el hábito de someter su liderazgo a la confirmación plebiscitaria de los afiliados a Chega cuando los resultados del partido no son satisfactorios. En paralelo, a lo largo de los años Ventura seleccionó un restringido círculo de colaboradores, sumamente fieles e impermeables a la crítica interna. Su figura como líder no está en discusión, ni siquiera entre la mayoría de los críticos internos, conscientes de la superioridad del capital social y político de Ventura en comparación con la del propio partido. La polémica se limita a la falta de democracia interna y al poder incontestable del presidente del partido y su núcleo de colaboradores.

Hay dos momentos relevantes en el proceso de consolidación de Chega. En su segundo Congreso Nacional, en Évora (septiembre de 2020), el partido se abocó a pulir su perfil ideológico y programático, para lo cual un elemento central fue la integración en sus filas del intelectual Gabriel Mithá Ribeiro. El trabajo del ahora diputado confirma las directrices originarias —conservadurismo en los valores, liberalismo en la economía, pero atemperado por el papel

subsidiario del Estado, occidentalismo en política externa (apoyo al Estado de Israel, europeísmo antifederalista)— y las cristaliza en la fórmula «Dios, Patria, Familia y Trabajo», asumida en el cuarto Congreso Nacional reunido en 2021. El cariz ultraliberal en economía típico del primer programa de 2019, de todos modos, ha sido abandonado. El partido sigue mostrándose fuertemente crítico del excesivo peso fiscal estatal, pero sustituye las propuestas de privatización total de los servicios públicos por los principios de complementariedad entre los sectores público y privado en la provisión de servicios, y de subsidiariedad del Estado allí donde el libre mercado no garantiza el acceso ciudadano a los servicios esenciales.

En este periodo toma forma la fusión de un antiguo compañero de alianza, el PPV/CDC, dentro de Chega. Surgido a partir del movimiento social «pro-vida», ese pequeño partido cristiano había sido determinante para la elección de Ventura en Lisboa en 2019. Por esto, su contribución pasa a ser premiada con un lugar destacado para su líder Manuel Matias dentro de la dirección de Chega y con un margen de maniobra para sus afiliados católicos y evangélicos en la estructura del partido populista, cosa que en redes y medios fue vista como la infiltración del *lobby* cristiano ultraconservador.

En materia internacional, Chega se acercó definitivamente a los partidos populistas y soberanistas europeos

12. João Ferreira Dias: «O Messias já chegou, e livrará ‘as pessoas de bem’ dos corruptos: messianismo político e legitimação popular, os casos de Bolsonaro e André Ventura» en *Polis* vol. 2 N.º 2, 2020.

de derecha: en julio de 2020 integró el eurogrupo Identidad y Democracia (ID), liderado por el francés Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen y por la Liga de Matteo Salvini en Italia; también estrechó lazos con el partido de Jair Bolsonaro en Brasil y con Vox en España, y comenzó a mirar con interés al líder húngaro Viktor Orbán. En este sentido, el partido combina su europeísmo respetuoso de las soberanías nacionales con la denuncia de supuestas amenazas terroristas ligadas al flujo migratorio oriundo de países musulmanes y al crecimiento de las comunidades islámicas en Europa. Aun cuando no es central en el discurso de Chega, la cuestión islámica suele acabar aflorando cuando el debate involucra asuntos de fronteras externas de la Unión Europea y leyes de inmigración y de nacionalidad, aunque con el cuidado de focalizar las incompatibilidades en términos «culturales» y no étnico-raciales. Para algunos autores, esta estrategia discursiva valoriza los aspectos culturales sin dejar de tener en cuenta los biológicos, como quedaría demostrado en el programa de Chega elaborado en 2019¹³.

El segundo momento relevante lo constituyen las elecciones presidenciales de enero de 2021. La agresiva estrategia comunicacional del líder en los debates con los demás candidatos presidenciales buscó consolidar la

imagen de único político antisistema, y el resultado fue 12% de los votos (casi medio millón de electores), perdiendo por poco el anhelado segundo lugar. La campaña fue la ocasión para que Ventura estrenase su concepto de pueblo virtuoso, constituido por los «portugueses de bien», permanentemente traicionados tanto por la elite político-económica en el poder como por los ciudadanos que no respetan las leyes o que se benefician del Estado social. En este sentido, el líder de Chega demostró su habilidad para formular mensajes polémicos altamente movilizadores, hechos a medida de los medios *mainstream* hambrientos de audiencia y de ciertos usuarios de las redes sociales¹⁴. Tales mensajes dieron pie a acciones judiciales contra el partido, promovidas por movimientos sociales antirracistas y por adversarios políticos. Sin embargo, y a diferencia de la extrema derecha tradicional (el PNR), Chega no sufrió un alto grado de estigmatización por parte de los medios, cosa que suele subrayarse como un factor explicativo de su crecimiento¹⁵.

Las elecciones de enero de 2021 demostraron asimismo el capital político de Ventura, muy superior al de su propio partido —el cual, en las elecciones municipales de mayo de 2021, logró en promedio 4,16% de los votos a escala nacional—. Las elecciones municipales fueron relevantes para Chega ya que le

13. M.S. Mendes: ob. cit.

14. Estrela Serrano: «Populismo em Portugal: o factor media» en *Média & Jornalismo* vol. 20 Nº 37, 2021.

15. M.S. Mendes y James Dennison: «Explaining the Emergence of the Radical Right in Spain and Portugal: Salience, Stigma and Supply» en *West European Politics* vol. 44 Nº 4, 2020.

permitieron presentar candidatos en todo el territorio nacional, verificar las regiones con mejor desempeño (algunas por encima de 10%) y definir los liderazgos locales y su vínculo con la estructura del partido ya en fase de su profesionalización.

La geografía electoral de Chega en las tres instancias electorales de 2019 y 2021 mostró sus puntos fuertes en áreas del centro-sur y del interior de Portugal, tradicionalmente controladas por la izquierda comunista, lo que demuestra su capacidad para movilizar a los descontentos con la situación económica y con el sistema de partidos tradicionales, muchos de ellos habituales al abstencionismo. No es posible, de todos modos, afirmar que hubo un traspaso de votos comunistas a Chega: los mejores resultados locales de este partido no coincidieron con caídas significativas para el PCP, y muchos de sus éxitos ocurrieron en zonas donde el comunismo es tradicionalmente débil (como en los distritos del norte). Esto lleva a creer que el éxito del partido populista de derecha seguirá quedando determinado por la eventual transferencia de votos desde el PSD y el CDS¹⁶.

Las áreas de éxito electoral de Chega coinciden también con una fuerte presencia de la minoría étnica gitana, particularmente alcanzada por las políticas de subsidios y asistencia social

que el partido critica. Esto convierte a la comunidad gitana en blanco privilegiado del discurso de Ventura, a diferencia, por ejemplo, de las distintas comunidades migrantes, no suficientemente significativas en el ámbito nacional como para habilitar la explotación eficaz de un perfil identitario antiinmigratorio¹⁷. Aun así, se trata, en palabras de algunos analistas, de una geografía del descontento y del resentimiento, con prevalencia del factor identitario por sobre el factor económico¹⁸. La desvalorización de la dimensión económica en el partido ya quedaba en cierto modo demostrada en su abandono de las proclamas del neoliberalismo entre 2019 y 2021, reemplazadas por proclamas antielitistas¹⁹.

Esta realidad se confirmó en las elecciones legislativas del 30 de enero de 2022, en las que Chega logró 7% de los votos y pasó de uno a 12 diputados. En el contexto de fuertes transformaciones en el mapa de la centroderecha —el CDS desapareció del Parlamento por primera vez desde 1974, mientras que Iniciativa Liberal pasó de 1,3% y un único diputado en 2019 a 5% y ocho diputados ahora—, Chega se afianzó como tercera fuerza política detrás de los históricos PS y PSD. Los casi 400.000 electores que apoyaron al partido se caracterizaron por ser mayoritariamente hombres (dos de cada

16. J. Fernandes y M. Pratas: «Os resultados das presidenciais à lupa: a vitória do Chega que talvez não chegue, a exagerada morte do PCP e a relação PS/Marcelo» en *Observador*, 21/2/2021.

17. Alexandre Afonso: «Correlates of Aggregate Support for the Radical Right in Portugal» en *Research and Politics*, 7-9/2021.

18. P.M. Fernandes Madeira, K.S. do Nascimento Silva y J. Silva Macaísta Malheiros: ob. cit.

19. M.S. Mendes: ob. cit.

tres), de hasta 54 años y con educación secundaria más que con educación básica o formación académica²⁰. En 2020, los electores de Chega (en cantidad sensiblemente menor) se caracterizaban como mayormente hombres de entre 25 y 44 años de edad y con formación escolar superior al promedio portugués²¹. Se trata de electores jóvenes y adultos, muy religiosos, concentrados en las áreas rurales, ajenos a la nostalgia salazarista, insatisfechos con la política, aunque informados acerca de ella, principalmente a través de los diarios y las redes sociales. Son electores modernos, movidos por sentimientos de crítica cultural a la globalización y a la inmigración, pero a quienes no cabría considerar como los perdedores económicos de la globalización, por no pertenecer a los

estratos sociales más afectados por la crisis y el estancamiento económico en Portugal²².

La consolidación organizacional, electoral y parlamentaria abre una nueva fase en la vida de Chega, cuya dirección ya se sumergió en el tránsito de partido de protesta a partido de gobierno, interesado en conquistar, ahora, el liderazgo de la oposición parlamentaria y en integrar una futura alternativa al actual gobierno socialista con mayoría absoluta. Si se reconfirma en los próximos tiempos, la dinámica de crecimiento protagonizada en los últimos tres años por Chega hará francamente difícil que se mantenga el «cordón sanitario» que aún hoy prevalece como estrategia de los partidos de centroderecha frente al populismo de derecha en Portugal. ☐

20. João Cancela y P. Magalhães: «Bases sociais do voto nas legislativas de 2022», 17/2/2022, <www.pedro-magalhaes.org/bases-sociais-do-voto-nas-legislativas-de-2022/>.

21. P. Magalhães: «Quem quer votar no Chega?» en *Expresso*, 15/2/2020.

22. Lea Heyne y Luca Manucci: «A New Iberian Exceptionalism? Comparing the Populist Radical Right Electorate in Portugal and Spain» en *Political Research Exchange* vol. 3 Nº 1, 2021.

| TEMA CENTRAL

América Central frente a sí misma



América Central: violencia y pseudodemocracias (1987-2022)

Gilles Bataillon

Desde comienzos del siglo **xxi**, América Central se encuentra atrapada en una serie de tensiones inéditas producto de transformaciones sociopolíticas contradictorias. Los acuerdos de paz y las transiciones democráticas se contraponen a tasas de homicidios que ubican a los países de la región entre los más violentos del mundo, así como a fenómenos de corrupción generalizada y procesos de desdemocratización en gran parte de la región.

Desde comienzos del siglo **xxi**, América Central¹ se encuentra atrapada en una serie de tensiones inéditas producto de transformaciones sociopolíticas contradictorias. Los países centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), registran tasas de homicidios que los ubican entre los más

Gilles Bataillon: es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CESPRA-EHES), París, y profesor afiliado a la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México. Es codirector de la revista *Problèmes d'Amérique Latine*. Publicó varios libros, entre ellos *Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983)* (FCE, Ciudad de México, 2008) y *Crónica de una guerrilla (Nicaragua, 1982-2007)* (CIDE / CEMCA, Ciudad de México, 2016).

Palabras claves: acuerdos de paz, corrupción, democracia, violencia, América Central.

Nota: traducción del francés de Gustavo Recalde.

1. Abordaremos aquí la situación de los países del llamado «Triángulo Norte de América Central», es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la de Nicaragua. La situación es diferente de la que viven los países del sur del istmo, como Costa Rica, que tiene una antigua tradición democrática, y Panamá, que obedece a lógicas muy distintas, al igual que Belice, microestado miembro del Commonwealth.

violentos del mundo, a excepción de los países en guerra. La totalidad de los países del istmo son escenario de fenómenos de corrupción generalizada que involucran al conjunto de la clase política y a buena parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, sin olvidar el aparato judicial. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua ven cómo un número sin precedentes de sus habitantes emigran a Estados Unidos vía México, y en menor medida a Costa Rica y Panamá. Paralelamente, todos los países del istmo viven reiteradas crisis políticas debidas en parte a los intentos de sus élites políticas de perpetuar viejos *habitus* oligárquicos, así como a los ataques contra ciertos principios democráticos y la instauración de formas de tiranía. Además, estas crisis se ven impulsadas por el surgimiento de nuevas aspiraciones democráticas, cada vez más alejadas de los aparatos políticos existentes. En este artículo, me propongo describir y analizar este entramado de fenómenos contradictorios.

Las formas de la violencia y la corrupción

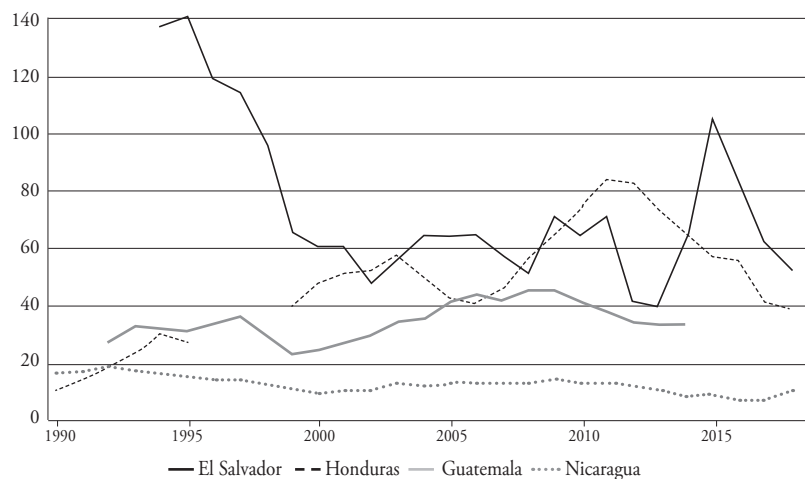
Nuevo auge de la violencia

El Acuerdo de Paz regional de Esquipulas (1987), y luego los acuerdos de alto el fuego entre los contras y los sandinistas (1988) en Nicaragua, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de Alfredo Cristiani (1992) en El Salvador y, finalmente, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Álvaro Arzú (1996) permitieron el fin de guerras internas particularmente mortíferas.

El primer efecto de estos múltiples acuerdos de paz fue una rápida disminución de la violencia homicida. En un país como El Salvador, donde a comienzos de los años 1990 la tasa de homicidios tras los acuerdos de paz seguía siendo superior a 140 por cada 100.000 habitantes, esa cifra se redujo regularmente año tras año hasta llegar a 37,8 en 2001. Si bien las caídas observadas en Guatemala fueron menos espectaculares, no fueron por ello menos significativas: 38 en 1997; 24,19 en 1999. Finalmente, en Nicaragua esa tasa se redujo considerablemente a partir de 1988 hasta caer a 9,5 en 2000. En cambio, la violencia común, no homicida, compuesta por una mezcla de riñas con golpes y heridas, robos y extorsiones, violaciones y violencia familiar, no disminuyó en absoluto. Muy por el contrario, creció en los países otrora en guerra. En esos países, como sucedió en Honduras, se observó además el resurgimiento de una conflictividad social, a veces muy desorganizada y atomizada. Muchos de los actores armados desmovilizados, provenientes tanto de las filas militares como de las guerrillas, fueron

Gráfico

Triángulo Norte y Nicaragua: tasas de homicidios, 1990-2015
(cada 100.000 habitantes)



Fuente: Banco Mundial.

generalmente los responsables directos de estas nuevas formas de violencia no homicida. En este contexto comenzaron a prosperar en los barrios populares urbanos de los países del Triángulo Norte las maras, cuyos orígenes son complejos y trascienden los límites de este artículo. De esta manera, los países centroamericanos reanudaron *habitus* de violencia que siempre habían estado en el corazón de múltiples interacciones comunes incluso antes de los años de conflicto. Un reflejo de esta influencia de la violencia a lo largo del tiempo son las tasas de homicidios que existían antes en El Salvador, 30 en 1965, y 16,5 en la misma época en Nicaragua².

A partir de los años 2000, en todos los países centroamericanos, a excepción de Nicaragua, se observó un continuo aumento de las tasas de homicidios y el recrudecimiento de muchas otras formas de violencia, en especial de los secuestros, múltiples formas de extorsión, violaciones y violencia doméstica. El fenómeno fue particularmente llamativo en Honduras, que no había vivido una guerra interna en los años 1980. Se observaron tasas de homicidios extremadamente altas, 50 a partir de 2000, 84 en 2011.

2. Mario Monteforte Toledo: *Centro América: subdesarrollo y dependencia*, tomo 1, UNAM, Ciudad de México, 1972, p. 128. Este autor solo brinda respecto de Guatemala una cifra que suma las tasas de homicidio y suicidio, 14 por cada 100.000 habitantes en 1965, y lo mismo hace respecto de Panamá (16,5) y Costa Rica (16,5). Señala que no existen datos estadísticos disponibles respecto de Honduras.

Si bien estas tasas se redujeron, siguen siendo en extremo altas, 39 cada 100.000 habitantes en 2018. Estos fenómenos de violencia estuvieron particularmente presentes en las zonas urbanas y fronterizas. El Salvador vivió también un aumento considerable de la tasa de homicidios; esta, que era de 48 en 2002, llegó a ser 71 en 2009, antes de registrar una reducción importante en 2013, 40, seguida de una nueva tendencia al alza hasta 2015, cuando llegó a 105 antes de decrecer nuevamente. Las zonas urbanas y el área fronteriza con Honduras y Guatemala fueron las más afectadas. Esta multiplicación del número de homicidios se vio acompañada de muchas otras formas de violencia presentes en Honduras. Se observa, aunque en menor proporción, la misma suba de la tasa de homicidios en Guatemala. Los escenarios de este recrudecimiento de la violencia fueron en, primer lugar, la capital y las zonas fronterizas. Nicaragua, por su parte, no registró una subida espectacular de la tasa de homicidios a escala nacional, excepto en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur.

En todos esos países, el mapa de la violencia, ante todo urbana, ya nada tiene que ver con la de los años de guerras internas, cuando la violencia tenía lugar mayormente en los territorios rurales. Del mismo modo, los actores de la violencia han cambiado en gran medida. Mientras que antes los principales responsables eran los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y las guerrillas, desde hace una veintena de años la violencia es causada por nuevos actores. Se trata, por supuesto, de sicarios a las órdenes de narco-trafficantes y empresarios forestales o mineros, múltiples bandas del crimen organizado, ligadas o no al narcotráfico, y mareros. Los blancos de estos asesinatos son sindicalistas, activistas ambientales, periodistas o campesinos que defienden sus tierras. Finalmente, se observan operaciones de «limpieza social» que apuntan a los mareros o a los vagabundos y los jóvenes en situación de calle, que son llevadas a cabo por policías que realizan adicionales para empresas de seguridad privada. Finalmente, son los mareros quienes asesinan a los miembros de las bandas rivales y a los habitantes de los barrios populares que se resisten a sus extorsiones.

Nuevos flujos migratorios

Estas nuevas formas de violencia tuvieron como consecuencia un incremento de los movimientos migratorios desde los países del Triángulo Norte, vía México, con destino a EEUU y, en menor medida, a Canadá. En efecto, los movimientos migratorios, que hasta los años de las guerras internas solo involucraban a un pequeño número de personas, registraron a partir de los años 2000 un fuerte crecimiento. La emigración de los años de guerra (1979-1987) ya había permitido a muchos centroamericanos instalarse en



© Nueva Sociedad / Jazmin Villagrán 2022

los países de América Central no afectados por las guerras internas, pero también en México, EEUU y Canadá. Ellos ayudaron luego a los migrantes de los años posteriores a la guerra.

A partir de la década de 1990, las migraciones a México y EEUU registraron un constante aumento, en primer lugar, en El Salvador, donde el porcentaje de la población que decidió emigrar para escapar de la violencia y en busca de mejores oportunidades de trabajo creció de 16% en 2000 a 35% en 2017. Fenómenos análogos, pero de menor amplitud, se observan en Honduras y Guatemala, donde el número de migrantes se triplicó durante el mismo periodo y donde su porcentaje respecto del total de la población pasó de 5% a 10%. Nicaragua también vivió fenómenos migratorios importantes, con la gran diferencia de que sus habitantes emigran, como es habitual, a EEUU, pero también, en proporciones casi similares, a la vecina Costa Rica. La emigración siguió ampliándose en 2018, tras la brutal represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

Estos nuevos movimientos migratorios, sin precedente alguno en el istmo, resultan emblemáticos de la manera en que muchos centroamericanos perciben la falta de futuro debido a la violencia allí imperante, y también a las escasas oportunidades en términos de empleo, sobre todo, para los más calificados.

Una corrupción proteiforme

El incremento de la violencia debe leerse en paralelo con el surgimiento de formas de corrupción infinitamente más complejas y sistemáticas que en las décadas de 1980-1990, por varias razones. En primer lugar, porque el istmo centroamericano se convirtió en la principal zona de tránsito para el transporte de la cocaína producida en América del Sur con destino a EEUU. Luego, como consecuencia del crecimiento de las actividades del sector primario en las economías centroamericanas, que se vio acompañado por múltiples transacciones ilegales. Lo que significa que, desde hace más de un cuarto de siglo, mercaderías ilegales de un valor considerable pasan por los países centroamericanos. En 2005, los expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUD) calculaban que el PIB de los países de tránsito era en esa época inferior al valor total de la cocaína transportada a EEUU³. Si bien en la actualidad las ganancias generadas por ese comercio ilegal son proporcionalmente menos importantes teniendo

3. El PIB de los países centroamericanos era entonces el siguiente: Guatemala: 28.000 millones de dólares; Honduras: 7.000 millones; El Salvador: 16.000 millones; Nicaragua: 5.000 millones; Costa Rica: 19.000 millones; y Panamá: 14.000 millones.

en cuenta la suba del PIB de los países centroamericanos, no dejan de jugar un papel esencial en la economía de estos países. Una serie de actividades como el comercio de indumentaria, el de vehículos, la actividad gastronómica, los bancos, el sector inmobiliario, la construcción y la obra pública y el turismo se beneficiaron en gran medida del lavado de los narcodólares.

Los militares, las elites políticas y el sector judicial son los sectores claves de este comercio ilegal que hoy es dominado por narcotraficantes mexicanos. Se estima además que la fuerza de su poder de intimidación y corrupción tiene un peso creciente en los gobernantes de los países del Triángulo Norte. En cambio, en Nicaragua, la hipercentralización del poder en torno de la familia Ortega desde su retorno al poder (2006) contribuye a mantenerlos en situación de subordinación. Esta colusión entre el sector político, las fuerzas armadas y policiales y la justicia favorece también otras actividades ilegales como el robo y el tráfico de vehículos y la trata de personas, en especial la prostitución, particularmente en el Triángulo Norte.

La influencia, cada vez más fuerte, de la corrupción ligada al narcotráfico y al crimen organizado se vio acompañada por el desarrollo paralelo de otros fenómenos de corrupción ligados a la afluencia de recursos financieros provenientes de la cooperación internacional, tanto de agencias internacionales y gobiernos preocupados por ayudar a los países del istmo como de capitalistas deseosos de invertir en los sectores de actividad más diversos. Los esfuerzos realizados por la cooperación internacional para apoyar programas de reinserción de guerrilleros desmovilizados en la década de 1990, y luego para ayudar a la reconstrucción de los países devastados por el huracán Mitch (1998), o por los terremotos en los años 2000, fueron objeto de desvíos de fondos considerables. La ayuda provista por Venezuela en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), especialmente a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a partir de 2006, pero también a Honduras durante el breve mandato de Manuel Zelaya (2006-2009), fue objeto de desvíos sistemáticos.

La última forma de corrupción consiste en el tráfico de influencias y el sistema de sobornos que emanan de quienes ejercen la autoridad política y administrativa en todos los niveles. Diferentes presidentes centroamericanos y sus familiares ofrecieron sus servicios para el otorgamiento de autorizaciones administrativas a empresarios que deseaban invertir en actividades agrícolas, mineras, comerciales o industriales. También organizaron sistemas de fraude aduanero.

Los militares, las elites políticas y el sector judicial son los sectores claves de este comercio ilegal que hoy es dominado por narcotraficantes mexicanos

Estos fenómenos fueron tanto más importantes cuanto que tres de estos países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, vivieron cada uno cerca de una década de guerras internas que frenaron las inversiones económicas en todos los sectores. Por eso, la reanudación de las actividades productivas asociada a algunos cambios en el régimen de la propiedad, en especial en Nicaragua, en el momento del cuestionamiento de algunas confiscaciones operadas bajo el régimen sandinista, o de las transformaciones territoriales surgidas del éxodo de algunas poblaciones en las zonas rurales en Guatemala y El Salvador, crearon enredos jurídicos propicios para todo tipo de transgresiones legales en nombre de una visión desvirtuada de la eficiencia. La cuestión de la transferencia de propiedades tuvo un giro particularmente espinoso en Nicaragua, donde los sandinistas votaron leyes que disponían la transferencia de propiedades, casas, inmuebles, propiedades agrícolas y empresas nacionalizadas en beneficio de dirigentes de la revolución y de autoridades del partido, pero también de cooperativas agrícolas, familias de campesinos y habitantes de barrios precarios. Estas leyes —denominadas «la Piñata»— afectaron así toda posibilidad de distinguir entre lo justo, una redistribución agraria o una reforma urbana equitativa, y lo injusto, la creación de fortunas privadas que convirtió a algunos sandinistas en rivales de los antiguos oligarcas de los años somocistas. En menor medida, se observaron problemas similares en las zonas rurales de Guatemala. Decenas de miles de campesinos que habían abandonado sus pueblos para escapar de las matanzas del Ejército fueron despojados de sus tierras en beneficio de aquellos que habían aceptado colaborar con las Fuerzas Armadas, y fenómenos del mismo tipo tuvieron lugar en las zonas rurales salvadoreñas.

Pseudodemocracias

Estas formas de violencia y corrupción que comenzaron a florecer en América Central están evidentemente ligadas a los fracasos de los regímenes democráticos que se instauraron tras los Acuerdos de Paz de Esquipulas en los años 90. En efecto, si bien estos pactos permitieron en todas partes el restablecimiento del Estado de derecho, estuvieron acompañados de procesos de amnistía para los crímenes cometidos durante los años de guerra que instauraron una forma de impunidad.

Sin embargo, nadie duda de que estos acuerdos de paz contribuyeron al fortalecimiento de costumbres democráticas. Implementaron mecanismos que prohíben a los países signatarios apoyar las operaciones armadas llevadas a cabo desde sus territorios a través de las guerrillas. El compromiso de los signatarios de restablecer las libertades fundamentales a menudo

vulneradas por los estados de excepción en vigor, así como de organizar rápidamente elecciones pluralistas y competitivas, también pesó en favor de la instauración de regímenes democráticos, en particular en Nicaragua. Observemos también que los acuerdos vinieron a reforzar la influencia de procesos democráticos a veces iniciados con anterioridad, en especial en Honduras y El Salvador, a partir de 1982 y 1984, y en Guatemala en 1985. Estos acuerdos significaron también todo un *aggiornamento* democrático en sectores otrora partidarios de la violencia, que pensaban que la sociedad necesitaba ser moldeada por la fuerza y no a través de pactos o de la expresión de la voluntad general mediante elecciones. Una serie de actores cercanos a la Contra y movimientos armados de los países del Triángulo Norte, como el FMLN, la URNG y el partido-Estado sandinista, se convirtieron a los ideales democráticos. Del mismo modo, los derechos humanos, que habían sido instrumentalizados para denunciar los crímenes de guerra del adversario, se transformaron en la piedra angular de una nueva reflexión sobre las exigencias universalistas consustanciales a las costumbres y los ideales democráticos. Esta nueva sensibilidad se expresó, en el mejor de los casos, en un resurgimiento de los medios de comunicación, la literatura y la música. También se hizo sentir en el lugar sin precedentes que ocuparon diferentes ONG, algunas vinculadas al movimiento feminista o indígena, otras al seguimiento de la repatriación de los refugiados o preocupadas por cuestiones ecológicas y asuntos territoriales.

Sin embargo, cabe señalar que, a partir de fines de la década de 1990, se expresaron claramente múltiples cuestionamientos a los principios democráticos en todas estas nuevas democracias. En cada una de ellas, hubo ante todo una persistencia de los hábitos de corrupción y violencia acompañada por proyectos muy pedestres. Las costumbres adquiridas durante los años de guerra, en los que la violencia más extrema se conjugó con increíbles fenómenos de corrupción, fueron en cierta forma legitimadas por los acuerdos de paz. En Guatemala, Nicaragua y El Salvador se decidió que el final de estas guerras estaría acompañado por amnistías para todos los protagonistas. Lo que significa que, en estos tres países, la combinación de hechos de violencia y corrupción, que fueron el telón de fondo de los años de guerra, y la ausencia de procesos judiciales que acompañó a los acuerdos de paz consagraron una cultura de la impunidad. Lo que es peor, esta cultura de la impunidad se instauró en el momento mismo en que se afirmó la necesidad de poner fin a las acciones armadas y poner en valor los principios democráticos. Es respecto de estas tensiones,

Esta cultura de la impunidad se instauró en el momento mismo en que se afirmó la necesidad de poner fin a las acciones armadas

entre las aspiraciones democráticas y la idea de que el poder descansaba necesariamente en la violencia y estaba acompañado de prebendas, como debe interpretarse el avance de la llamada dominación de los «poderes fácticos» en Guatemala y Honduras a partir de los años 1990, y luego el dominio de dos caudillos como Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en Nicaragua de 1996 a 2006, y después el de este último y de su esposa y, finalmente desde 2019, el de Nayib Bukele en El Salvador.

Si bien los acuerdos de paz suscriptos en Guatemala afirmaron la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y, para ello, reducir el peso de las Fuerzas Armadas y reforzar el poder de los aparatos administrativos civiles del Estado, estas medidas siguieron siendo letra muerta. Los aparatos de inteligencia militares no dejaron de existir y de llevar a cabo operaciones de intimidación e incluso asesinatos de «subversivos». A partir de los años 2000, responsables militares, empresarios y políticos se asociaron con las redes de narcotraficantes. Estas mafias infiltraron metódicamente el aparato de Estado y el sector político, y buscaron influir en la vida pública y someter al país. Se observan en mayor o menor medida los mismos fenómenos de colusión en Honduras, donde el control del aparato de Estado en beneficio de los intereses privados no fue menor. En Nicaragua, prácticas como la compra de votos en el Parlamento prepararon el terreno para una corrupción mucho más cotidiana que involucró a familiares de la presidenta Violeta Chamorro. Fue en este contexto que, valiéndose de la ayuda financiera de Muamar Gadafi, Ortega se deshizo de los renovadores y retomó las riendas del FSLN prometiendo además que su retorno al poder permitiría adueñarse del Estado. A su vez, gracias a la ayuda financiera de los cubanos de Miami, Arnoldo Alemán se impuso como alcalde de la capital y luego como candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1996. A comienzos de los años 2000, Ortega y Alemán celebraron un verdadero pacto de cooperación para eliminar a sus competidores de la escena política, apoderándose de todas las instituciones claves del país: el tribunal que controla las finanzas, el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, el Parlamento. En 2006, este pacto permitió a Ortega ser reelecto para la Presidencia de la República con 38% de los votos y, desde entonces, perpetuarse allí instaurando un sistema que socava todos los principios democráticos de separación de poderes y de cuestionamiento del poder en elecciones pluralistas. Si bien El Salvador enfrentó los intentos de actores que buscaban privatizar e instrumentalizar el Estado para sus fines inmediatos, el crecimiento de dos partidos relativamente estructurados, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el FMLN, permitió que subsistieran juegos de equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e

impidieran este tipo de control. Esta dinámica funcionó, mal que bien, hasta la elección de Bukele como presidente de la República en 2019.

La creciente omnipresencia de los fenómenos de violencia cotidiana, así como de corrupción, puso de manifiesto esquemas que cuestionaban los principios democráticos, por un lado, asignando de un modo u otro un papel central a la violencia en la conformación de los lazos sociales, y por el otro, desvalorizando los derechos humanos y los principios liberales de separación de poderes. Los primeros signos de esta manifestación de la violencia fueron las diferentes operaciones de «limpieza social» realizadas a la vez por asociaciones de vecinos o de comerciantes y empresas de seguridad privada, dirigidas a menudo por ex-militares. Estos asesinatos, que se multiplicaron a partir de la década de 2000 en el Triángulo Norte, fueron las más de las veces realizados en connivencia y a veces en coordinación no oficial con la policía. Esta última, no conforme con estas acciones clandestinas, desarrolló también una política de colusión con algunos grupos criminales dentro de las cárceles, muy especialmente en Guatemala y Honduras, donde toleró o supervisó numerosos ajustes de cuentas. Esta creencia en la necesidad de una erradicación del crimen a través de castigos ejemplares, inmediatos y despiadados desembocó en una retórica de la mano dura, que se convirtió en una temática política manifiesta no solo en el seno de los diferentes partidos políticos de derecha en el Triángulo Norte, sino que también fue retomada en El Salvador por el FLMN y por algunos sectores de los partidos de izquierda. El llamado al disciplinamiento brutal de los grupos delictivos se vio acompañado por un movimiento de descrédito de los principios jurídicos liberales.

Los primeros cuestionamientos de estos principios en nombre de una necesaria protección de la sociedad contra el crimen fueron acompañados por la puesta en duda de los principios democráticos, que abrevó a la vez en una manifestación de los viejos esquemas del populismo que enfrentaban al pueblo con las elites, tanto en Honduras como en Nicaragua y El Salvador, y en una revalorización de la idea de la necesidad de un poder fuerte que pudiera establecerse en el tiempo y cuestionar la separación de poderes. Nada resulta más llamativo que el paralelismo entre la retórica de Manuel Zelaya, elegido presidente de Honduras en 2006, la de Daniel Ortega, reelegido como jefe del Estado nicaragüense, y finalmente la de Nayib Bukele a partir de 2019. Todos ellos proclamaron la existencia de un abismo insalvable entre el pueblo y las elites. Se presentaron como la encarnación del pueblo y destacaron su papel de conciliadores entre los intereses

La policía desarrolló también una política de colusión con algunos grupos criminales dentro de las cárceles, muy especialmente en Guatemala y Honduras

de los diferentes sectores de la sociedad, pretendiendo superar así las divisiones existentes. Zelaya se vio rápidamente frenado en sus veleidades de instaurar una posible reelección presidencial al final de su mandato por un golpe de Estado organizado en 2009 por una conjunción de fuerzas políticas ligadas a los sectores empresariales, una parte de los grupos mafiosos y el Partido Nacional tan poco democráticos como él. A pesar del movimiento de oposición democrática de 2018, Ortega pudo en cambio llevar a cabo su proyecto de instaurar una dictadura que abreva a la vez en las prácticas del somocismo y en las formas totalitarias de su propio poder en sus primeros años al frente de Nicaragua durante la Revolución Sandinista (1979-1990). A partir de su vuelta a la Presidencia en 2006, valiéndose de su control de las instituciones judiciales del país y del Tribunal Electoral, fue formateando el Estado a su voluntad. Este control de las instituciones políticas desembocó a partir de 2016 en la prohibición para sus posibles competidores de presentarse en las elecciones presidenciales, y en 2021, en el encarcelamiento de todos los líderes de la oposición. Actualmente, se observa la construcción de un poder totalitario, donde él y su esposa actúan como una pareja de egócratas que pretenden encarnar a un pueblo unido monolíticamente y en el que toda forma de oposición, política, sindical y social, queda reducida a la figura de «enemigos del Pueblo».

Decir que los actores de la renovación democrática surgida en los años 1990 no la tuvieron fácil, se trate de las nuevas fuerzas políticas o de ONG, asociaciones, medios de comunicación, movimientos campesinos o sindicales, sería decir poco. En el conjunto de los países centroamericanos (con excepción de Costa Rica), todos fueron objeto de vejaciones y campañas de difamación, así como de intimidación de los gobiernos vigentes. Lo que no impidió, sin embargo, a estos diferentes tipos de opositores llevar a cabo con mucha valentía campañas contra los poderes vigentes y lograr a veces algunas victorias. Toda una red de activistas alimentó el trabajo de la prensa y de los medios de comunicación centroamericanos, así como de las grandes ONG internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Indian Law Resource Center y algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo que significa que, gracias a su trabajo y a su valentía, los hechos de corrupción y las numerosas violaciones a los derechos humanos son mucho más conocidos que antes. Algunos lograron además notables triunfos. Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2001, el gobierno de Nicaragua debió indemnizar a una comunidad indígena cuyas reservas forestales había vendido a una empresa coreana. Pero las victorias más notables tuvieron lugar en Guatemala. La primera se produjo en 2006, durante la creación, con el aval de la ONU, de la Comisión Internacional

contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A través de sus movilizaciones y sus campañas de prensa, la sociedad civil y un sector de la clase política lograron que el Parlamento aprobara la creación de esta comisión. Su trabajo, así como las manifestaciones de la sociedad civil, provocaron en 2015 la dimisión y el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina. Una nueva pulseada enfrentó a la CICIG y a un sector de la población con el presidente Jimmy Morales, acusado también de corrupción. Paralelamente, entre 2012 y 2013, el ex-dictador Efraín Ríos Montt fue condenado en los tribunales de la justicia guatemalteca a 50 años de prisión por genocidio, pena agravada por una segunda condena firme a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Si bien estos fallos fueron casi de inmediato anulados por la Corte Suprema, el proceso no dejó de representar un avance importante en la sensación del derecho a tener derechos en Guatemala. Por su parte, sin lograr verdaderas victorias, fueron muchos los hondureños que se movilizaron contra la violencia común y las redes mafiosas, así como contra el golpe de Estado que derrocó a Zelaya y, más aún, contra la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández. Pero es indudablemente en la Nicaragua de Ortega donde los partidarios de la democracia enfrentan mayores dificultades. En efecto, desde su regreso al poder en 2006, el presidente organizó una persecución metódica contra los opositores que consideraba más peligrosos: los medios de comunicación independientes que habían denunciado el peligro de su pacto con Arnoldo Alemán y puesto al descubierto sus redes de corrupción, así como las organizaciones feministas que habían apoyado a su hijastra Zoilamérica en sus denuncias de las violaciones repetidas de Ortega. Tampoco quedaron al margen los movimientos campesinos que se oponían a la construcción de un canal interoceánico, muchos de cuyos activistas fueron detenidos y a veces asesinados. Hoy es el turno de los militantes de los derechos humanos y la nebulosa opositora. Más de 550 fueron asesinados, centenares fueron encarcelados y acusados de terrorismo. Y por fin, en los primeros meses de 2022, luego de decisiones judiciales totalmente arbitrarias, más de un centenar de ellos fueron condenados a penas de prisión de más de diez años.

Foco de atención de la opinión pública internacional durante los años 80, América Central y sus crisis han pasado en la actualidad a un segundo plano para la opinión pública mundial. Así, aun cuando gracias a la revolución de la información que generó el surgimiento de internet, estamos más informados que nunca sobre cada sobresalto de las crisis centroamericanas, la opinión pública y las organizaciones internacionales, como la Organización de los

América Central y sus crisis pasaron actualmente a un segundo plano para la opinión pública mundial

Estados Americanos (OEA) o la ONU y la Unión Europea ponen en práctica el *benign neglect* respecto de esta parte del mundo. Solo les preocupan las olas migratorias con destino a EEUU y Canadá. Pero las instituciones internacionales y la opinión pública continúan siendo a menudo incapaces de vincular estos fenómenos a la creciente influencia de la violencia y las mafias de la droga, así como al avance de gobiernos corruptos y tiránicos. Las poblaciones cuyas aspiraciones democráticas van en aumento, tal como lo demuestran los recientes acontecimientos en Guatemala, Honduras o Nicaragua, tienen una necesidad vital de contar con el apoyo de las instituciones internacionales y de la opinión pública global para librarse de las nuevas tiranías que se están instaurando. ☐

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Mayo-Agosto de 2022

Quito

Vol. xxvi N° 73

URBANISMO, ARQUITECTURAS Y DISEÑOS FEMINISTAS

DOSSIER: Presentación del dossier, **Laura Sarmiento, Inés Moisset y Natalia Czytajlo**. Labores de cuidado y covid-19: cambios en la movilidad cotidiana de mujeres en Santiago, Chile, **Catalina Paz Zúñiga-Olave y Marie Geraldine Herrmann-Lunecke**. Movilidad y género en contextos de vulnerabilidad: el caso del Sistema Metropolitano de Tucumán, **Inés González-Alvo y Natalia Czytajlo**. Paisajes del cuidado en la Ciudad de México. Experiencias, movilidad e infraestructuras, **Paula Soto-Villagrán**. Planificación urbana, covid-19 y diversidades sexogenéricas en Pereira, Colombia, **Miguel Peraza**. Retos al feminismo popular: intervenciones urbanas en el Pedregal de Santo Domingo, México, **Socorro Pérez-Rincón**. TEMAS: Hablar de mí es hablar de todas: memorias y emociones entre activistas afroargentinas, **Paola Monkevicius**. Más que un expediente... Las madres de las personas desaparecidas en México y sus carpetas de investigación, **Isaac Vargas**. La relación capital-trabajo en la Industria 4.0, **Guillermo Foladori y Angeles Ortiz-Espinoza**. Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México, **Juan Antonio Le Clercq y Celeste Cedillo**. Conflicto hídrico y defensa territorial: mujeres en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Argentina, **Mariela Pena**.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.edu.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.

Urgencias en la América Central del bicentenario

Salvador Martí i Puig

¿Está hoy América Central mejor o peor que hace dos décadas respecto de la salud de la democracia? ¿Hay algo que festejar en estos tiempos de bicentenario? ¿Cuáles son los retos más urgentes que enfrentan los países centroamericanos en los próximos años? Algunas de estas preguntas permiten trazar un panorama de los problemas y los desafíos de la región en tiempos de crisis política, sanitaria, migratoria y ambiental, sin olvidar la crisis de la democracia.

Antes de empezar un análisis sobre América Central, creo relevante formular tres preguntas que seguramente se hacen muchas personas: ¿está hoy la región mejor o peor que hace un par de décadas respecto de la salud de los regímenes democráticos?; ¿hay algo que festejar cuando se celebra la efeméride del bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas?; y, finalmente, ¿cuáles son los retos más urgentes que enfrentan los países centroamericanos en los próximos años?

De estas tres cuestiones, la más fácil de responder es la segunda: hay poco que celebrar. La región, en los últimos años, se ha visto inmersa en una triple crisis. Una de carácter político, debido a una manifiesta involución democrática; otra humanitaria, fruto del impacto

Salvador Martí i Puig: es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Girona e investigador asociado de la Fundación CIDOB-Barcelona. Entre sus libros se incluye *Ciencia política. Un manual. Nueva edición actualizada* (en coautoría con Josep Maria Vallès, Ariel, Madrid, 2015).

Palabras claves: autoritarismo, cambio climático, crisis, migración, América Central.

de la pandemia de covid-19 y del cambio climático; y una tercera como consecuencia del incremento de la movilidad humana generada por múltiples injusticias, vulnerabilidades y violencias. Respecto de las otras dos preguntas, la primera y la tercera, trataremos de responderlas a lo largo del texto.

Un apunte sobre la (teorización de la) democracia en América Central

Las cinco repúblicas centroamericanas han experimentado notables turbulencias políticas

No es ninguna sorpresa que a lo largo de los últimos años las cinco repúblicas centroamericanas han experimentado notables turbulencias políticas que, en cuatro de ellas, han derivado en una persistente erosión democrática.

En este sentido, a lo largo de las últimas tres décadas, el paradigma que ha servido de base para analizar los sistemas políticos en cuestión ha mutado considerablemente. Si en la década de 1990 se interpretaba la transformación de regímenes autoritarios hacia la democracia liberal a partir de los estudios sobre transiciones —era una época en la que abundaban los «transitólogos»—, posteriormente llegaron las discusiones sobre la consolidación (o no) de las nuevas democracias. Al constatar que los nuevos regímenes no cumplían con las características mínimas de un sistema poliárquico, los estudiosos empezaron a añadir adjetivos a las democracias, y así nació un rosario de conceptos que muchas veces eran casi un oxímoron, a saber, «democracias delegativas», «democracias débiles», «democracias inciertas», «democracias reaccionarias»...

Entrado el siglo **xxi**, cambió la mirada hacia estos sistemas y se quiso analizar empíricamente sus características; hicieron entonces fortuna— y continúan haciendo— los estudios sobre la «calidad» de las democracias. Los criterios utilizados para construir el concepto son varios y en general estandarizados, siempre partiendo de una base empírica —si bien no siempre hay consenso sobre qué variables incluir y utilizar— sobre elementos como las libertades civiles, las elecciones limpias, los derechos individuales y colectivos, la protección del disenso, la separación de poderes, etc. En general, sin embargo, están presentes tres dimensiones: las que evalúan el estado de los derechos civiles, las relacionadas con la participación y la competencia política, y las vinculadas a los contrapesos efectivos al poder. En estos estudios, siempre comparados, los cinco países centroamericanos —con la excepción de Costa Rica— han estado a la cola de América Latina, y retrocediendo. Tanto es así que, a menudo, los regímenes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han sido calificados como regímenes híbridos por combinar elementos propios de sistemas democráticos y autoritarios.

Pero el tema en cuestión ha dado un giro durante el último lustro, fruto de tendencias políticas preocupantes que se han extendido en la región, como la quiebra de los sistemas de partidos y la aparición de plataformas políticas personalistas, la volatilidad electoral, la polarización política y el uso de nuevas tecnologías para difundir *fake news*.

Por primera vez desde la llegada de los regímenes democráticos a América Central, en la actualidad hay voces que cuestionan abiertamente el sistema. Este momento es, sin duda, un punto de inflexión en el cual el modelo democrático, su legitimidad y potencial se encuentran en discusión. Existen cuestionamientos a los sistemas de representación y a la legitimidad de los actos de gobierno y de las instituciones políticas. Por ello, en el debate académico actual se ha empezado a teorizar (y no solo en América Central) «cómo mueren» las democracias. Así, los estudios sobre desdemocratización tienen hoy tanto sentido como lo tuvieron hace 30 años aquellos sobre transiciones. Son estas reflexiones las que pueden arrojar luz, por ejemplo, sobre la involución política experimentada en Nicaragua desde 2007 pero, sobre todo, desde 2018.

Como es sabido, desde la vuelta al poder de Daniel Ortega en 2007, se ha ido instaurando en el país un régimen personalista que, si al inicio podía calificarse de híbrido, desde abril de 2018, cuando fue desafiado en las calles, ha derivado en un sistema autoritario cerrado y represor¹. Esta lógica de perpetuación en el poder del clan Ortega tuvo su último episodio en enero de 2022, cuando simuló una plácida victoria electoral con la que iniciar un cuarto periodo presidencial consecutivo. Esta victoria, sin ningún tipo de legitimidad interna ni externa, fue el resultado de un incremento en el control de la gobernanza electoral y de una intensa y sistematizada actividad represiva desplegada desde mediados de 2018 y que pervive al momento de escribir este artículo.

De todos modos, los problemas políticos en la región no son exclusivos de Nicaragua. Las instituciones políticas en Honduras, El Salvador y Guatemala también han experimentado un notable deterioro. La política en Honduras ha estado sometida a una degradación desde el golpe de Estado orquestado contra Manuel Zelaya en 2009 para poner en su lugar al político liberal Roberto Micheletti. En los comicios de fines de 2009, así como en los siguientes de 2013 y 2017, ganaron los candidatos del tradicional Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, siendo este último reelegido previa reforma constitucional. Durante los dos mandatos presidenciales de Hernández el país estuvo sometido a una

1. S. Martí i Puig: «Nicaragua: análisis de una crisis inesperada», Documento de Trabajo N° 10, Fundación Carolina, Madrid, 6/2019.

fuerte polarización política, a casos de corrupción por vinculaciones entre el narcotráfico y la clase política, y a la compleja labor desempeñada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), operativa entre enero de 2016 y diciembre de 2019 y a la que no se le renovó el mandato para un nuevo periodo, tal como reclamaba la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 28 de noviembre de 2021, en las elecciones presidenciales, legislativas, locales y al Parlamento Centroamericano, ganó el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con la candidata a la Presidencia Xiomara Castro, esposa del depuesto Zelaya. Con ello, por primera vez en la historia de Honduras una mujer se sitúa al frente del Poder Ejecutivo y como jefa de Estado. Se rompió además el bipartidismo entre el Partido Liberal y el Nacional que había dominado la política hondureña durante décadas. Sin embargo, a pesar de la llegada de un nuevo titular a la Presidencia de la República, los primeros pasos del nuevo gobierno se vieron manchados por escándalos de transfuguismo en el Congreso Nacional y por la continuidad de la violencia y la polarización en el país.

En cuanto a la situación de El Salvador, la tensión entre el gobierno y la oposición, además de la violencia callejera, también han sido la norma. En este país hubo elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021. En ellas, el actual presidente Nayib Bukele impulsó una formación afín conformada por familiares y allegados llamada Nuevas Ideas. Este nuevo partido consiguió imponerse con claridad frente a las fuerzas de derecha e izquierda que habían articulado la vida institucional desde los Acuerdos de Paz de 1992: la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Estos comicios, como sucedió en Honduras, dieron al traste con el bipartidismo tradicional, si bien esta «renovación» no necesariamente indica medidas políticas más consensuadas ni un mayor respeto a la democracia.

Los hechos más bien indican lo contrario. Desde la llegada al poder de Bukele, en junio de 2019, su mandato ha estado dominado por un estilo personalista muy apegado al uso de las redes sociales y por su entente con los sectores del Ejército más suspicaces respecto de los Acuerdos de Paz de 1992, así como por episodios que dan cuenta de la recreación *millennial* de una especie de populismo punitivo.

En Guatemala también ha habido un clima de deterioro institucional, siendo el tema principal de la agenda política la corrupción, sobre todo desde la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se interpretó como un «pacto de corruptos». Tal «pacto» supuso la cooptación definitiva por parte de la clase política del Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Corte de Constitucionalidad,

hecho que significó un retroceso en materia de transparencia, de justicia y de lucha contra el crimen organizado.

Costa Rica, en este contexto, es una relativa excepción, si bien la inestabilidad y la incertidumbre política también se ha enquistado. No por casualidad, la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de 2022 estuvo enmarcada por los temas de la corrupción, el nepotismo y la crisis económica y por denuncias personales entre los candidatos. Los dos postulantes que llegaron a segunda vuelta fueron el ex-presidente José María Figueres por el tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, ex-ministro de Hacienda y antiguo funcionario del Banco Mundial, a través de la joven formación Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Este último resultó ganador con 52,84% de los votos y deberá gobernar con una Asamblea Legislativa altamente fragmentada y el apoyo de tan solo nueve escaños de los 57, y sin una verdadera estructura partidaria. En este sentido, Costa Rica incursiona en un periodo de «gobierno dividido», con un líder *outsider* que deberá afrontar una economía con 23% de la población sumida en la pobreza, una deuda pública que equivale a 70% de su PIB y altas cotas de desconfianza hacia los políticos. Una desconfianza que ayudó a Chaves a llegar a la Presidencia, pero que quizás dificulte su permanencia.

En este contexto, el modelo democrático liberal, tal como lo conocemos, se está resintiendo. Los argumentos que apelan al paradigma de la eficiencia en temas como la lucha contra el crimen, el crecimiento económico o el manejo de crisis (sean estas climáticas o sanitarias) están revalorizando conductas autoritarias. La baja credibilidad de los políticos y de las instituciones representativas, y la mala prensa de los actores políticos tradicionales, como los partidos y los sindicatos, constituyen críticas directas al modelo democrático.

En América Central, las democracias han costado mucha sangre y han sido fruto de largos años (décadas, mejor) de luchas. Hasta la fecha, a pesar de todos los errores, los fallos, la frustración y la mediocridad, nadie se ha atrevido a negar abiertamente la democracia, si bien algunas encuestadoras han ido señalando que entre la ciudadanía de El Salvador, Honduras y Guatemala la preferencia por un gobierno autoritario ya rebasa el 50% de la población. De lo expuesto se deriva la respuesta a la primera pregunta planteada al inicio, a saber, la de si la región está hoy mejor o peor que hace un par de décadas respecto de la salud de los regímenes democráticos.

**En América Central,
las democracias
han costado mucha
sangre y han sido
fruto de largos
años (décadas,
mejor) de luchas**

Crisis sanitaria y climática

En cuanto a la crisis sanitaria, Costa Rica ha sido el único país que tuvo una política consistente

La política no es el único ámbito que ha agitado a América Central en los últimos años. La región también se ha visto asaltada por otras amenazas que han derivado en dos grandes crisis, una sanitaria y otra climática. En

cuanto a la crisis sanitaria, Costa Rica ha sido el único país que tuvo una política consistente en un primer momento. Las acciones rápidas y coordinadas del gobierno del presidente Carlos Alvarado con la Asamblea Legislativa, junto con la existencia de un sistema de salud pública robusto (en comparación con los de sus vecinos), permitieron contener la primera ola de infecciones. Pero, al mismo tiempo, los

efectos económicos de la pandemia fueron muy visibles en un país que tiene en el turismo su principal fuente de divisas y empleos.

Respecto a las medidas para hacer frente al covid-19 impulsadas por los gobiernos de los cuatro países septentrionales de la región, con independencia del color político de sus presidentes, fueron poco efectivas. En su contra jugaron factores de carácter estructural y difíciles de solventar a corto plazo, como los elevados niveles de informalidad laboral, la pobreza, la precariedad habitacional y, sobre todo, la débil capacidad infraestructural del Estado. En este sentido, la pandemia de covid-19 magnificó los déficits estructurales sistémicos de la región. La pandemia sorprendió a todos los países centroamericanos en una situación de gran debilidad, no solo en sus economías sino también en sus sistemas políticos. Y todo ello, en medio de un profundo déficit de solidaridad y cooperación regional, con sistemas de integración muy debilitados y con los países del Norte sin ninguna voluntad de cooperar.

En este sentido, para los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua el coronavirus se sumó a los riesgos a los que ya está sometida la población en su vida cotidiana. De todas formas, el caso nicaragüense merece un comentario aparte, ya que al inicio las autoridades optaron por negar la letalidad del covid-19, señalando que se trataba de un virus de carácter burgués. Incluso el tándem Daniel Ortega-Rosario Muriello impulsó concentraciones populares de apoyo al régimen con el eslogan «Amor en los tiempos del covid-19»².

Pero más allá de lo anecdótico, la incidencia del covid-19 en América Central ha presentado datos acumulados sobre casos detectados que arrojan las siguientes cifras: en Costa Rica se elevaban a 701.471, en Guatemala

2. «Simpatizantes sandinistas desafían al covid-19 con marcha multitudinaria», video en Agencia EFE, 15/3/2020, <www.youtube.com/watch?v=nbr2E_2EAV0>.

a 694.513, en Honduras a 391.874, en El Salvador a 135.109 y en Nicaragua a 17.709. Estos datos corresponden al 1 de febrero de 2022 y proceden del Coronavirus Resource Center de la Universidad de Medicina Johns Hopkins³. Respecto al número de fallecidos, tomando como referencia la misma fuente y fecha, las cifras son: Costa Rica, 7.593 fallecidos, Guatemala, 16.401, Honduras, 10.512, El Salvador, 3.914 y Nicaragua, 220⁴.

Los números expuestos arrojan algunos datos significativos, si bien deben manejarse con cautela, debido fundamentalmente a la existencia de un evidente subregistro, en especial en el apartado nicaragüense, y a la concordancia que puede establecerse entre pruebas realizadas y casos confirmados.

Más allá de la pandemia, la otra gran crisis experimentada es la climática. En 2020 la amenaza climática terminó materializándose en la temporada de huracanes más activa de la historia de la región, con un total de 30 tormentas, 13 de ellas catalogadas como huracanes⁵. Las tormentas más intensas, Iota y Eta, se dieron a finales de año. La región tuvo que lidiar, de forma simultánea, con la crisis sanitaria de la pandemia y con las consecuencias de los huracanes. Honduras, Guatemala y Nicaragua fueron los países más damnificados, aunque también afectaron a El Salvador y Costa Rica. El impacto en las cosechas e infraestructuras también fue devastador. Todas las fuentes coinciden en que el desastre climático de 2020 es mayor que el experimentado con el huracán Mitch en 1998; sin embargo, esta vez la reacción de la comunidad internacional fue prácticamente nula. Mientras que el Mitch concitó una gran ola de solidaridad internacional, los estragos del Eta y el Iota pasaron desapercibidos en un planeta ensimismado por la pandemia de covid-19.

Según los datos facilitados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en un informe fechado a finales de diciembre de 2020, en Honduras había 4,5 millones de personas afectadas por Eta e Iota, 1,8 millones en Nicaragua, y 1,8 millones también en Guatemala⁶. La devastación causada por los huracanes Eta e Iota tuvo efectos multiplicadores debido a la proximidad de su acción en el tiempo. A principios de noviembre de 2020, el primer huracán golpeó la región y, sin tiempo para que esta se recuperara, dos semanas después llegó el segundo, de mayor intensidad. Los dos huracanes, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés),

3. Johns Hopkins University & Medicine: Coronavirus Resource Centre, 5/2/2022, <<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>>.

4. *Ibíd.*

5. Mariana Toro Nader: «Así fue la desastrosa temporada de huracanes 2020» en *CNN en español*, 1/6/2021.

6. OCHA: «Centro América. Tormenta Tropical Eta & Huracán Iota: Seis semanas después», 22/12/2020.

afectaron a más de 9,3 millones de personas en siete países, de las cuales 3,5 millones eran niños⁷. La ayuda de los gobiernos fue escasa, diferida en el tiempo y con un componente de promesa que no se convirtió en realidad. Sin duda las dos crisis, la sanitaria y la climática, mostraron la extrema vulnerabilidad de la región en múltiples ámbitos, y el resultado de ello ha sido una crisis humanitaria sin precedentes que, a la postre, induce a una parte importante de la sociedad a migrar.

Movilidad humana bajo presión y acoso

El resultado de la concatenación de las crisis expuestas ha incrementado el deseo, por parte de múltiples sectores, de migrar. Se trata de una migración forzada por la cual la población de los países del Triángulo Norte se proyecta hacia México y Estados Unidos y la de Nicaragua hacia al sur, mayoritariamente en dirección a Costa Rica. La novedad reside en que, además de la «salida» de los sectores más humildes, por la represión en Nicaragua y el ascenso de líderes con tics autoritarios en El Salvador y Guatemala, también han empezado a exiliarse estudiantes, activistas, intelectuales y políticos. Se calcula, por ejemplo, que desde 2018 unas 100.000 personas han huido de sus países por causas políticas.

Respecto a los movimientos hacia el norte, el cierre de las fronteras por la pandemia y los diferentes acuerdos con EEUU han hecho que el paso por Guatemala y México sea aún más complicado para los migrantes, si bien antes –tal como describe magistralmente Oscar Martínez en el libro *Los migrantes que no importan*⁸– ya era terrible.

La forma de emigrar sigue siendo, para la mayoría, individual y orientada hacia EEUU

La forma de emigrar sigue siendo, para la mayoría, individual y orientada hacia EEUU; sin embargo, justo antes de la pandemia, los medios se centraron en el fenómeno de las seis «caravanas» que partieron de Honduras entre 2018 y 2019. De todas formas, la pandemia y los múltiples obstáculos que tenían que enfrentar las caravanas hasta llegar a su destino parece que han desincentivado su continuidad. La represión sobre los migrantes organizados en los países de tránsito fue tan intensa que después de la crisis sanitaria las caravanas no se han replicado. Desde entonces el despliegue militar realizado por el gobierno mexicano a lo largo de las orillas del río Suchiate, cerca de Tapachula, ha convertido los puntos fronterizos entre Guatemala

7. Unicef: «El impacto de los huracanes Eta e Iota», 1/3/2021.

8. Debate, Ciudad de México, 2008.

y México en escenarios de violencia gubernamental contra los migrantes varados en la frontera⁹.

No hay duda de que en la actualidad la migración se ha convertido en una cuestión crucial para los habitantes de la región y para los gobiernos de México y EEUU que llevan años prometiendo reformas que no se hacen efectivas. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca parecía indicar un cambio, pero hasta el momento las esperanzas se han visto truncadas. A pesar de los gestos de la nueva administración norteamericana, entre ellos la rescisión en febrero de 2021 de la declaración de emergencia fronteriza entre México y EEUU, decretada en 2019, o el congelamiento de los fondos destinados a la construcción del «muro», la reforma migratoria estadounidense sigue bloqueada en el Congreso. El bloqueo de esta iniciativa, que pretendía generar una vía a la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de centroamericanos indocumentados que viven en el país, hace que sus vidas sigan bajo la marca de la vulnerabilidad incluso cuando están asentados en EEUU. Por lo demás, algunas de las normativas del gobierno de Donald Trump siguen vigentes, lo que muestra que la administración Biden ha continuado con la mayor parte de la agenda instaurada por su predecesor. Las promesas electorales y los gestos en sus primeros meses quedan como una declaración de intenciones.

En relación con el drama de la movilidad forzada, cabe destacar que la violencia de género sigue siendo uno de los impulsores más significativos pero ignorados de la migración hacia el exterior en América Central y la región en general y, a la vez, las niñas y las mujeres son quienes más sufren violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas, que no siempre está presente en los análisis del fenómeno migratorio, se ejecuta desde múltiples instancias y con demasiada impunidad. No es posible tratar ningún tema en la región —ya sea el empoderamiento ciudadano, la seguridad económica doméstica o la seguridad— sin tener en cuenta el estatus y la seguridad de las mujeres y las niñas.

Un futuro incierto

Lo expuesto en las páginas precedentes no invita al optimismo. Ciertamente, ninguno de los gobiernos en ejercicio tiene como prioridad la resolución de las múltiples necesidades que demanda la población. En las agendas de los mandatarios no aparecen políticas públicas consistentes ni planes económicos que puedan reconducir las maltrechas condiciones en que vive la mayoría de las personas en la región. Falta, además de recursos, voluntad

9. Gobierno de México, Instituto Nacional de Migración: «Tema migratorio», 23/10/2021, <www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-241021/>.

política. En esta dirección, las elites económicas y políticas parecen más preocupadas por defender sus intereses que los de la población. A ello se le suma el descrédito de la política antes señalado.

Para proyectar opciones de futuro, a la vez, es necesario hacer una valoración de la integración regional. En este sentido, es preciso replantear los objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el fin de ubicar a la región en un contexto global en el que los bloques económicos van a tener un rol muy relevante. En el último lustro, sin embargo, la labor del SICA ha ido disminuyendo por la falta de entente entre los gobiernos miembros, y por la ausencia de una política económica firme por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) está bloqueado por la misma crisis que sufren las formaciones políticas que mandan sus representantes al hemisclero. El problema reside en que la integración regional no es una opción a mediano plazo, sino una necesidad de supervivencia en un entorno en el que los grandes poderes hegemónicos —públicos y privados— dictan cada día más las agendas.

En este marco, no es fácil responder a la tercera de las preguntas que se formulan al inicio del texto: ¿cuáles son los retos más urgentes que enfrenta la región en los próximos años? Se podría hacer una larga lista. Si tuviera que señalar cuatro apostaría, en primer lugar, por la necesidad de implantar el Estado de derecho desde abajo, empezando por los barrios y los gobiernos locales, recuperando el territorio que, poco a poco, gracias a la ausencia estatal, han ido conquistando redes ilegales (desde las maras hasta el narcotráfico), con el fin de garantizar el bien más básico de las personas: su seguridad y su capacidad de ejercer derechos de ciudadanía. En segundo lugar, señalaría la urgencia de revalorizar y desplegar de forma universal los servicios públicos básicos —empezando por la educación y la salud—, a la par de diseñar políticas fiscales progresivas y de lucha contra el fraude. En tercer lugar, pondría la necesidad de que los actores e instituciones den voz y poder a dos colectivos cruciales en la región. El primero es el de las mujeres, sin cuya representación, empoderamiento, liderazgo y sentir no hay futuro; y el segundo es el de los indígenas, en tanto actores imprescindibles para el rescate de saberes, bienes comunes y ecosistemas. El cuarto y último reto, no menos importante, es el de la preservación medioambiental, en una región tan frágil como rica y megadiversa en los recursos estratégicos del siglo XXI, a saber, la biodiversidad, el agua dulce y los minerales estratégicos.

La cuestión es, como siempre, cómo operar sobre cada uno de los retos señalados. No hay rectas, pero después de las crisis que han devastado la región sería de justicia pensar en una especie de nuevo contrato social programático a través de una mínima agenda de reconstrucción sostenible, incluyente y equitativa. Se trataría de construir un nuevo sentido común en el que la dignidad de las personas, independientemente de su condición, esté en el centro. 

América Central: fin de ciclo, ¿nuevos consensos?

Pedro Caldentey del Pozo

La erosión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es parte de un debilitamiento más amplio de la integración regional y de una crisis multidimensional. Los Acuerdos de Esquipulas, que sirvieron para avanzar en la paz, ya no parecen funcionales en un entorno que ha cambiado drásticamente. Los países centroamericanos necesitan un nuevo paquete de consensos y principios sobre los que construir su respuesta a un nuevo escenario de desarrollo.

La conmemoración del bicentenario de la independencia de los países centroamericanos en 2021 coincidió con un momento crítico en casi todos ellos. Las celebraciones de septiembre en algunas de las capitales de la región se tiñeron de conflicto. Como en El Salvador, donde el discurso institucional del presidente Nayib Bukele tuvo como prólogo unas tensas palabras dirigidas a la cooperación internacional y especialmente a Estados Unidos con motivo de unas leves protestas de la oposición. O como en Managua, donde Daniel Ortega lanzó un discurso de apariencia conciliadora, pero reforzando su encastillamiento, prólogo

Pedro Caldentey: es investigador sénior del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía y director del Departamento de Economía. Su área de investigación es la integración regional comparada y su foco de trabajo es el desarrollo regional en América Central.

Palabras claves: crisis, integración, Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), América Central.

de las decisiones judiciales sobre los opositores presos y el cierre de numerosas organizaciones de la sociedad civil, más de 850 hasta julio de 2022. En ese ambiente, el Sistema de la Integración Centroamericana (sica) rebajó sus planes de conmemoración pese a que había alterado el orden de sus presidencias *pro tempore* para que Guatemala las liderara.

2021 tenía un poderoso carácter simbólico, dada la coincidencia del bicentenario con otros aniversarios relacionados con la integración regional, como el de los 70 años de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), los 60 años de la integración económica y el mercado común centroamericano y los 30 años de la creación del sica¹. La confluencia de aniversarios debía además coincidir con el final de la emergencia provocada por la secuencia de la gran recesión, la pandemia y el confinamiento, que habían animado en todo el mundo a tomar decisiones drásticas y a explorar instrumentos inéditos de respuesta a la emergencia. La secuencia de crisis sugería, además, un final de ciclo global sobre cuya renovación de paradigmas de relaciones económicas y políticas se podría construir una nueva etapa e incluso desafiar la manera tradicional de hacer las cosas y el *statu quo*. Pero el panorama cambió y los factores de agudización de la crisis predominan sobre los de cambio. Se desvaneció con ello la esperanza de que esta confluencia de factores incentivara el diálogo político para la construcción de nuevos consensos de desarrollo para la región.

Antes de la crisis, especialmente durante la primera década del siglo, Centroamérica había experimentado algunas mejoras sensibles en su desarrollo², tanto en términos de crecimiento económico y de exportaciones, como de moderación de algunos desequilibrios macroeconómicos, como el de la inflación o incluso de las finanzas públicas. Varios indicadores sociales permitieron presentar algunos avances positivos en materia de reducción de la pobreza, acceso a la educación o aumento de la esperanza de vida. La gestión ambiental o la promoción de energías renovables parecían apuntar novedades en el modelo productivo, y también en términos políticos se apreciaban algunos cambios en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la justicia.

1. El Sistema de la Integración Centroamericana (sica) está formado desde 1991 por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a los que luego se incorporaron Belice en 2000 y República Dominicana en 2013. Los tratados constitutivos del sica son el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 a la Carta de la ODECA de 1951 y el Protocolo de Guatemala de 1993 al Tratado General de Integración Económica de 1960 que había creado el Mercado Común Centroamericano (MCCA).

2. Programa Estado de la Nación (PEN) y Consejo Nacional de Rectores: *Sexto Estado de la Región 2021*, PEN, San José, 2021 y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *Cambio estructural y crecimiento en Centroamérica y la República Dominicana. Un balance de dos décadas, 1990-2011*, ONU, Santiago de Chile, 2014.

La crisis multidimensional de Centroamérica

En los años previos a la pandemia fueron, sin embargo, aflorando las manifestaciones de una crisis de naturaleza multidimensional que no hizo más que acelerarse³. La pobreza y la desigualdad persisten en la región y han retrocedido las iniciativas que habían generado la esperanza de conseguir reducciones significativas. El modelo productivo persistió también en sus rasgos excluyentes y poco sostenibles⁴, lo que favorece un modelo de inserción internacional de bajo valor añadido, con escasos resultados en el despliegue de sus acuerdos comerciales⁵.

Por otra parte, crecieron las vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático, y los huracanes Eta e Iota durante la pandemia recordaron la fragilidad de las sociedades centroamericanas frente a sus embates. La violencia y la inseguridad siguen siendo una realidad recurrente en sus múltiples manifestaciones en varios países de la región, sus conexiones con el crimen transnacional y las maras y sus implicaciones en la emigración masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos y otros destinos. El funcionamiento del Estado, que ha sido un eje crítico en los objetivos de desarrollo en la región, es también una dimensión de primer orden de la crisis. Su eficiencia en la promoción y el acceso a servicios públicos para los más desfavorecidos es todavía insuficiente, no solo en términos de volumen de recursos, sino de calidad y eficacia de sus instrumentos. Y se ha visto gravemente amenazada por dos factores: en primer lugar, por la grave situación de crisis fiscal de los países centroamericanos, mayor aún tras la pandemia, profundizada por la necesidad de reaccionar a las intensas necesidades de sus sociedades con una presión fiscal de las más bajas del mundo en algunos de sus países. A ello se suman las dificultades de la región para conseguir financiación, como parece poner de nuevo en evidencia la azarosa experiencia del uso del bitcoin en El Salvador. En segundo lugar, la eficacia del Estado se ve comprometida por los problemas de captura por parte de las elites o de grupos específicos de poder. La corrupción y el clientelismo político

**Los huracanes
Eta e Iota durante
la pandemia
recordaron la
fragilidad de las
sociedades
centroamericanas**

3. Fundación ETEA: «Seminario 'Determinantes del desarrollo de Centroamérica en el marco del proceso de integración regional y del Acuerdo de Asociación con la UE'. Informe de sistematización y conclusiones», 12/2020.

4. Ricardo Bielschowsky, María C. Castro y Hugo E. Beteta (coords.): *Patrones de desarrollo económico en los seis países de Centroamérica (1950-2018)*, LC/MEX/TS.2022/7, Cepal, Ciudad de México, 2022.

5. P. Caldentey del Pozo: «El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica: un potencial por explotar», Documentos de Trabajo Nº especial FC/EU-LAC (6), Fundación Carolina / Fundación EU-LAC, Madrid, 2022.

El último elemento de la crisis multidimensional centroamericana es la crisis democrática, el proceso de desdemocratización

hacen estragos en los presupuestos e instituciones de los Estados centroamericanos, con una dinámica difícil de revertir y en el marco de instituciones y poderes con escasa capacidad para enfrentarlos y de un sistema de partidos políticos que agudiza los problemas en vez de contrarrestarlos.

El último elemento de la crisis multidimensional centroamericana es la crisis democrática, el proceso de desdemocratización, una dimensión especialmente

significativa e inesperada en el marco de los Acuerdos de Esquipulas⁶. Casi todos los países de la región experimentan graves retrocesos políticos. El caso más extremo es el régimen del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y sus episodios de represión y violencia y el enjuiciamiento y encarcelamiento de los líderes de la oposición política y social amparándose en una legislación *ad hoc*, cuya última manifestación es la ofensiva contra cente-

nares de organizaciones en un aparente intento de aplastar a la sociedad civil del país. El antecedente de la Revolución Sandinista en el caso nicaragüense pone en aprietos a parte de la izquierda latinoamericana y global, que se resiste a quitarle la etiqueta de movimiento de izquierdas a un régimen híbrido que combinaba instituciones democráticas con elecciones autoritarias y que, a partir de abril de 2018, ha mutado nuevamente en tiranía⁷.

Las tensiones democráticas se manifiestan en Guatemala en la dificultad de reducir la influencia de sus elites en el control de los poderes político, legislativo o judicial, en las limitaciones de un sistema de partidos políticos de naturaleza clientelar y en la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. El final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es probablemente la mejor ilustración de la complejidad del caso guatemalteco⁸.

6. Como es ampliamente conocido en la historia reciente de América Central, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pero también Panamá, Costa Rica y Honduras habían sido durante las décadas de 1970 y 1980 escenarios de la Guerra Fría y la intervención extranjera y de las dictaduras militares y los movimientos revolucionarios que marcaron esas décadas en toda América Latina. Los Acuerdos de Paz de la región se desarrollaron en el marco del proceso de Esquipulas, desde los Acuerdos de Sapoá de Nicaragua hasta los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, y facilitaron una solución regional de los conflictos de los países centroamericanos. La firma de los Acuerdos de Paz pacificó la región y abrió un proceso hacia la transición democrática centroamericana, en un entorno de optimismo que hacía pensar en avances significativos en el desarrollo político y económico.

7. Salvador Martí i Puig: «Nicaragua: análisis de una crisis inesperada», Documentos de Trabajo Nº 10 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, 2019.

8. Elisenda Calvet Martínez: «La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): dilemas tras 12 años de actuación» en Documentos de Trabajo Nº 6 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, 2019.

En El Salvador también entró en crisis el sistema de partidos políticos, y los últimos procesos electorales llevaron a un lugar secundario a la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y al izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), ambos protagonistas de la democracia salvadoreña tras los Acuerdos de Paz e incapaces de romper las dinámicas excluyentes en términos de prosperidad y participación política. Su probable desaparición no es necesariamente una mala noticia para el país, pero el liderazgo renovador del presidente Bukele y su partido, Nuevas Ideas, se ha visto empañado por un creciente populismo autoritario. Pese a la popularidad de su gobierno, sus iniciativas están marcadas por la agresividad verbal y judicial frente a opositores y discrepantes, y por decisiones que comprometen la separación de poderes y, en casos como el reciente estado de excepción para enfrentar la violencia de las maras, los derechos humanos. La iniciativa de declarar el bitcoin como moneda de curso legal y las decisiones tomadas al respecto ilustran bien cómo las propuestas rupturistas del gobierno de Bukele, tan relevantes para quebrar un *statu quo* incapaz de responder a la ciudadanía, se ven comprometidas por una cierta desmesura que parecería innecesaria en un entorno de alta popularidad y mayoría legislativa holgada.

Honduras parece ser la esperanza de una región inasequible al desaliento político pese a las continuas y recurrentes decepciones provocadas por sus líderes y movimientos políticos. El gobierno de Xiomara Castro está marcado por la esperanza de terminar con la corrupción y la captura del Estado tras los dos mandatos del presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a EEUU por su relación con el narcotráfico. El desafío es romper con el pasado, incluso con el del gobierno de Manuel Zelaya, sin volver a caer en sus errores. Ese es el reto de este nuevo gobierno que debe hacer frente a múltiples desafíos internos y de política exterior⁹.

Costa Rica y Panamá viven también sus propias crisis políticas. Las elecciones de Costa Rica parecen abonadas a las sorpresas desde hace muchos años. La elección del presidente Rodrigo Chaves abre ciertas incógnitas y es un episodio de renovación del sistema de partidos políticos. Como en otros casos, frente a la buena noticia de la renovación de liderazgos políticos, permanece la duda sobre los liderazgos de tipo personal y autoritario. Panamá se enfrenta a algo parecido, más centrado en el descontento ante la democracia y la desafección de la ciudadanía ante la política, pero eso no conduce a soluciones no democráticas ni a la desideologización¹⁰.

9. Leticia Salomón: «Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras» en *Nueva Sociedad* N° 299, 5-6/2022, disponible en <www.nuso.org>.

10. Harry Brown Aráuz: «La batalla por el relato en Panamá» en *Agenda Pública*, 25/5/2020.

El desarrollo económico y la desdemocratización están, por tanto, en retroceso, y eso resume muy bien la crisis multidimensional, que tiene el efecto de convertir a Centroamérica en una región que expulsa a los suyos. El principal canal es el de la migración en busca de soluciones de supervivencia ante las crisis políticas y sociales, aun asumiendo las costosas y arriesgadas rutas hacia EEUU a través de México y la incertidumbre de una vida de esfuerzo en un entorno de inseguridad legal, ya sea en EEUU o en los países europeos donde hay también migrantes centroamericanos. El segundo canal es el del exilio, que vuelve a hacerse presente en Centroamérica como en la década de 1980. El exilio forzoso de nicaragüenses en Costa Rica o los exilios preventivos de líderes, políticos o intelectuales desde otros países son ejemplos de un fenómeno complejo y doloroso que es nuevamente un elemento principal de la coyuntura centroamericana.

Cuánto de la crisis centroamericana es global y cuánto es regional

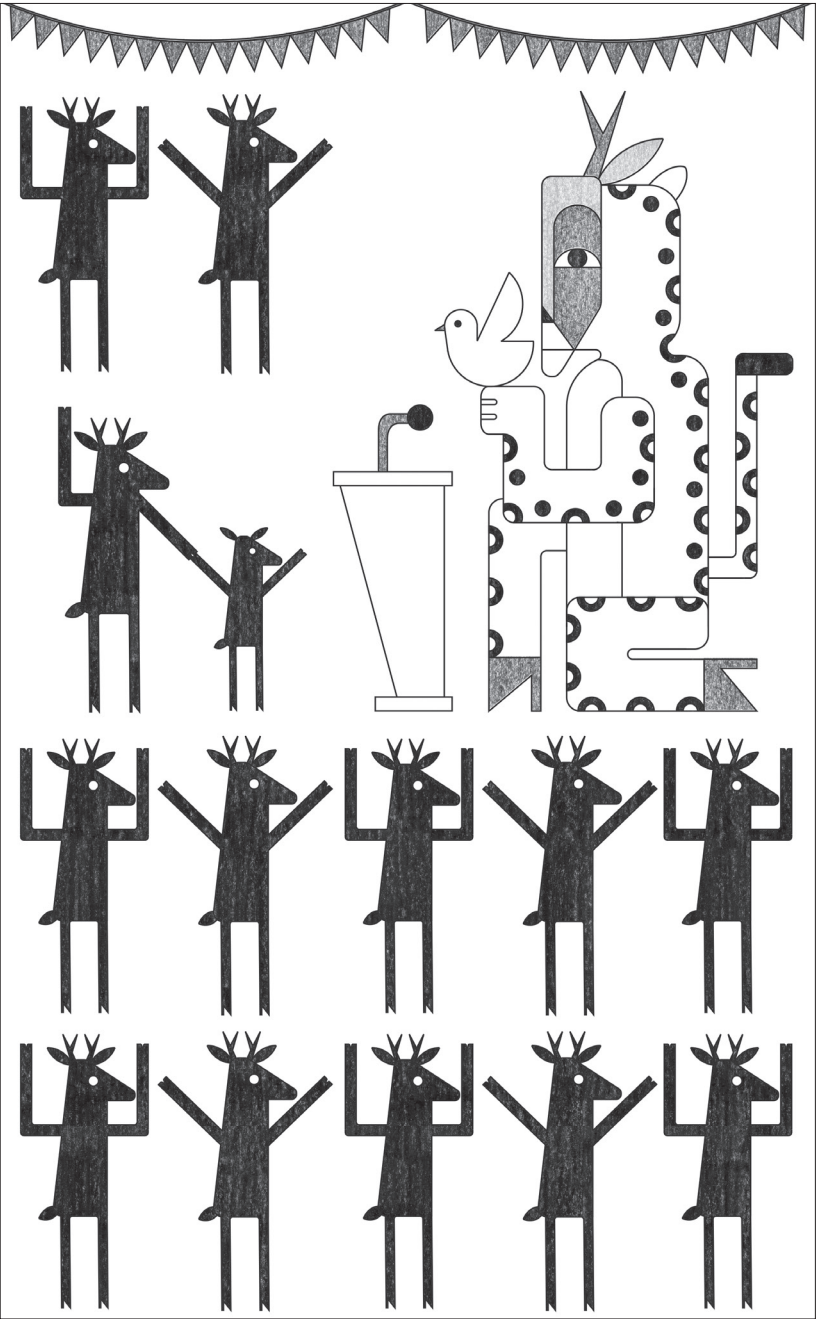
Todos los componentes de la crisis centroamericana tienen relación con o son reflejo de factores de impacto global. La desdemocratización no es un fenómeno exclusivamente centroamericano y forma ya parte del análisis teórico reciente¹¹. Los episodios del gobierno de Donald Trump o la ideologización del Tribunal Supremo en EEUU, o los gobiernos y movimientos de extrema derecha en Europa son buen ejemplo de ello. Los efectos de la Gran Recesión y, luego, de la pandemia y el confinamiento han sido profundos en las economías de todos los países, sin apenas excepción. Los cambios sociales y los movimientos migratorios tienen manifestación en todas las regiones del mundo.

Estos cambios se ven acompañados de modificaciones en las políticas económicas y de movimientos de transformación en el sistema de relaciones multilaterales. Son cambios algo difusos, porque forman probablemente parte de un fin de ciclo, el del neoliberalismo, como se ha analizado extensamente.

El ciclo en proceso de definición tendrá una nueva combinación de políticas económicas si no sucumbe de nuevo al relato de la inevitable austeridad, que compite con la necesidad de ampliar el alcance de la política social en Centroamérica y con las evidencias de que esto es posible pese a las limitaciones fiscales¹².

11. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: *Cómo mueren las democracias*, Ariel, Barcelona, 2018.

12. Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea: «¿Puede la covid-19 avanzar la política social inclusiva? Las transferencias monetarias de emergencia en Centroamérica», Documentos de Trabajo N° 60 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, 2022.



El nuevo ciclo también sugiere un renovado sistema de relaciones económicas y sociales de producción. El escenario global que enfrenta América Central está definido, como se apuntaba, por una gobernanza global en crisis y por una revisión de los paradigmas de la política económica. También por la tensión entre el nacionalismo y las pulsiones proteccionistas y por la recuperación del impulso multilateralista y un regionalismo en mudanza. Asimismo, se asiste a un proceso de reajuste de la hiperglobalización, la llamada *slowbalization* (globalización lenta), que recogería velas en los procesos de deslocalización industrial de los países más desarrollados¹³.

El cambio de ciclo, como revela el conflicto en Ucrania, trae consigo una renovación del marco de las relaciones internacionales y del tablero de la geopolítica. Un elemento ineludible para Centroamérica que, sometida a este escenario de incertidumbre, no tiene autonomía alguna y debe definir cómo moverse en él, ya que no tiene posibilidad de transformarlo a su favor. El rol

**Las relaciones con
EEUU y la Unión
Europea son
de baja intensidad
con respecto a
otros periodos**

de los socios tradicionales de la región será clave para ello. Las relaciones con EEUU y la Unión Europea son de baja intensidad con respecto a otros periodos, y su capacidad de influencia es limitada, más aún cuando sus tradicionales instrumentos de cooperación pierden fuerza por las limitaciones financieras y, especialmente, por cierta desidia en la intencionalidad política de ambos actores, más preocupados por otros problemas y regiones. La irrelevancia del Plan Harris

y el fracaso de la reciente Cumbre de las Américas ejemplifican muy bien este fenómeno en el caso estadounidense.

La emergencia de China no parece anticipar cambios a corto plazo, aunque la desaparición progresiva de Taiwán parece inevitable en virtud del giro de los países centroamericanos hacia el gigante chino. Más interesante podría ser el rol de México si consigue implementar su propuesta de política exterior hacia América Central mediante el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México que, firmado en 2018, no parece haber sido capaz hasta ahora de canalizar el apoyo de EEUU y de la cooperación internacional. Como sucedió con el Proyecto Mesoamérica o la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Barack Obama y Joe Biden, no parece que las iniciativas de actuación regional promovidas por actores externos tengan más éxito que el siempre criticado SICA.

Pero la crisis centroamericana tiene un componente regional decisivo para entenderla. Todas las dimensiones con que se expresa la crisis centroamericana tienen que ver con la persistencia del predominio de los intereses

13. Fundación ETEA: ob. cit.

particulares sobre el interés general, con una sociedad y una economía de naturaleza excluyente que los Acuerdos de Esquipulas y sus propuestas no han conseguido transformar en estas tres décadas de vigencia, inspirando las políticas nacionales.

La producción bibliográfica sobre la región ha crecido en los últimos años, como es natural en momentos de cambio e incertidumbre. Hay dos trabajos indispensables para hacer balance de los 30 años de Esquipulas: *Revoluciones sin cambios revolucionarios*, una de las últimas obras de Edelberto Torres-Rivas¹⁴, y la contribución multidimensional y coral del *Handbook of Central American Governance*, editado por Diego Sánchez-Ancochea y Salvador Martí i Puig¹⁵. Según Torres-Rivas, los procesos revolucionarios que hicieron estallar los conflictos no trajeron cambios revolucionarios en las estructuras políticas y económicas de la región. Ambas obras sostienen que los procesos de paz en Centroamérica rompieron una dinámica que era muy negativa pero consolidaron el modelo económico predominante, y este ha tenido un éxito reducido en aminsonar las diferencias sociales y económicas en la región. Por su parte, Sánchez-Ancochea y Martí i Puig abordan las dificultades del modelo aplicado en estas décadas recientes para transformar un sistema económico y social basado en el dominio de las elites, y la incapacidad del Estado para asegurar un bienestar razonable y salvaguardar el Estado de derecho¹⁶.

Otros trabajos más recientes han analizado en profundidad el rol de las elites centroamericanas y su impacto en el desarrollo de la región¹⁷. Todos esos trabajos indagan en la naturaleza de los diferentes actores que las componen y contribuyen a una descripción que esquiva las simplificaciones ideológicas y puede ayudar a definir claves para trabajar con ellas.

Un nuevo momento Esquipulas

Los Acuerdos de Esquipulas I y II trajeron paz a la región y abrieron un proceso de transición democrática en Centroamérica, en un entorno que sugería

14. E. Torres-Rivas: *Revoluciones sin cambios revolucionarios*, F&G Editores, Ciudad de Guatemala, 2011.

15. D. Sánchez-Ancochea y S. Martí i Puig: «Central America's Triple Transition and the Persistent Power of the Elite» en D. Sánchez-Ancochea y S. Martí i Puig (eds.): *Handbook of Central American Governance*, Routledge, Londres, 2014.

16. D. Sánchez-Ancochea y S. Martí i Puig: ob. cit.

17. Benedict Bull y Francisco Robles Rivera: «El covid-19, las elites y el futuro de la economía política de la reducción de la desigualdad en América Latina» en *Revista Cepal* N° 132, 1/2020; Alexander Segovia: *El Gran Fracaso: 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica*, F&G Editores, Ciudad de Guatemala, 2021; Juan Alberto Fuentes Knight: *La economía atrapada. Gestores de poder y Estado encadenado*, F&G Editores, Ciudad de Guatemala, 2022 y R. Bielchowsky, M.C. Castro y H.E. Beteta (eds.): ob. cit.

avances significativos en el desarrollo político y económico. Esquipulas fue también marco de inspiración para el diseño de estrategias nacionales¹⁸. América Central afrontó en los Acuerdos de Paz un escenario en el que se sumaban la violencia estructural asociada a los conflictos nacionales, a su regionalización y al efecto amplificador en ellos de las injerencias externas, con los efectos de la exclusión provocada por el modelo socioeconómico agroexportador al servicio de las elites.

La región se ha transformado, pero sus resultados son insuficientes en la reducción de la pobreza y la desigualdad

El balance de sus resultados es positivo y no hay dudas de que ha generado cambios significativos. La región se ha transformado de forma intensa, pero sus resultados son insuficientes en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en la mitigación de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y el cambio climático, o en prevenir las condiciones que expulsan a su población o la hacen vivir en entornos de violencia cotidiana.

Se puede afirmar que el legado de Esquipulas ha sido valioso y positivo para América Central, pero parece evidente que se han agotado los consensos sobre los que se apoyaba. Los acuerdos no son ya funcionales en un entorno que ha cambiado drásticamente dentro y fuera de la región. Los países centroamericanos necesitan un nuevo paquete de consensos y principios sobre los que construir un nuevo escenario de desarrollo. Hace falta un nuevo Esquipulas, que quizás debe empezar sacrificando esta denominación para favorecer un cambio que necesariamente sea también generacional. Los trabajos recientes de análisis del escenario centroamericano de conflicto y cambio¹⁹ y de la naturaleza de los actores económicos²⁰ pueden ayudar a explorar la función que las elites podrían tener en el diálogo político sobre los nuevos consensos de desarrollo, pero también a encontrar nuevos actores para el diálogo, quizás en otros sectores económicos e incluso entre los migrantes en EEUU.

Una característica fundamental de América Central es su dimensión regional, tanto si hablamos de la naturaleza de la crisis como de los consensos sobre los que construir su prosperidad. Es algo lógico y especialmente relevante en países pequeños como los centroamericanos, que además comparten raíces históricas y problemas. La construcción de la democracia y el desarrollo a partir de los Acuerdos de Paz tuvo como elemento principal la reactivación del proceso de integración regional que ya había sido importante entre los años 50 y 70. En el marco de la nueva ola en la integración

18. D. Sánchez-Ancochea y S. Martí i Puig: ob. cit.

19. Fundación ETEA: ob. cit.

20. A. Segovia: ob. cit. y J.A. Fuentes Knight: ob. cit.

latinoamericana de la década de 1990, los países centroamericanos reestructuraron el antiguo MCCA transformándolo en el SICA, un esquema multidimensional que definió un nuevo marco político y estratégico y amplió el entramado jurídico e institucional, y que ha constituido una dimensión complementaria de los esfuerzos nacionales de desarrollo.

La dimensión regional fue igualmente importante tras el desastre provocado por el huracán Mitch en 1998. El SICA y sus mecanismos de interlocución con la cooperación internacional fueron la plataforma para el desarrollo de la llamada Agenda para la Modernización y Transformación de Centroamérica, que ha sido la fuente de muchas estrategias y programas nacionales y regionales de desarrollo hasta ahora, como los corredores ambientales y logísticos que han sido el foco de la inversión pública desde inicios de siglo. También deberían serlo en este momento de crisis regional con las expresiones nacionales de crisis política antes mencionadas. Aunque los niveles de diálogo entre los gobiernos centroamericanos son en la actualidad muy bajos, no cabe duda de que los mecanismos institucionales que la región ha desarrollado en el SICA y fuera de él serán de máxima utilidad para el diálogo cuando existan condiciones para ello. Vinicio Cerezo, último secretario general del SICA (2017-2020), ex-presidente de Guatemala y uno de los protagonistas de los Acuerdos de Paz, intentaba promover un nuevo consenso, llamado Esquipulas III, antes de la pandemia, a partir de nuevos ejes de desarrollo y de una transformación funcional del funcionamiento del SICA²¹. Pero los mecanismos de diálogo político no bastaron y la propuesta no prosperó por la irrupción de la pandemia y por el insuficiente protagonismo de los gobiernos de los países miembros en su elaboración. Como en tantos episodios de la integración y del desarrollo de América Central, el cómo es mucho más importante que el qué. En la elaboración de los nuevos consensos será igual, y por ello es necesario invertir en condiciones para un diálogo político abierto y eficaz.

La crisis del SICA

La variable regional es clave, pero el SICA está en crisis. La principal manifestación es el atasco en la elección del secretario general para reemplazar a Cerezo. Los países centroamericanos se dotaron en 2021 de un «reglamento relativo a la elección de los titulares de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana», para facilitar la negociación del nombramiento de Hugo Martínez, ex-canciller en los gobiernos del FMLN. Sus

21. V. Cerezo: «Carta por el futuro de la integración centroamericana», El Salvador, 2020.

efectos han sido desastrosos para el SICA. Ante la natural preocupación de los países miembros por contar con un reparto razonable de autoridades en el complejo sistema institucional de la integración, se instauró un sistema rotatorio para repartir cargos por nacionalidades, algo que, visto *a posteriori*, se debió resolver con un acuerdo no escrito, implícito. El efecto ha sido negativo porque ha dejado en manos de los gobiernos nacionales la asignación de candidatos para su turno rotatorio, eliminando así cualquier competencia y rebajando la idoneidad de las candidaturas. Nos ha llevado además a la circunstancia actual, cuando el candidato debe ser propuesto, porque le toca en la rotación, por el gobierno de Nicaragua.

Tras una primera terna marcada por la falta de experiencia de candidatos inelegibles por su fidelidad política al régimen, Nicaragua propone ahora un buen candidato en la figura de Werner Vargas, de amplia y reconocida experiencia en el SICA. Tras la aprobación de los cancilleres de esta candidatura el 23 de junio de 2022, gracias al cambio de posición del nuevo gobierno costarricense, el proceso parecía desbloquearse, pero la decisión enfrenta intensa resistencia política en la región, no ante la figura del candidato, sino ante las dudas de la legitimidad y los riesgos de aprobar una propuesta de Ortega, que los presidentes tendrán que resolver. Hay también tensiones coyunturales en torno del rol del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), principal fuente de financiación del gobierno nicaragüense y foco, quizás en términos inusualmente altos, de los préstamos del banco. Se trata de problemas importantes, que provocan cierto rechazo ciudadano en algunos países y sectores, pero que se enfrentan a la ausencia de mecanismos para resolver cuestiones democráticas en el SICA. No existen cláusulas democráticas que se puedan aplicar a estos casos, y la respuesta regional depende exclusivamente del diálogo político y la decisión de los gobiernos, en un marco jurídico basado en la unanimidad. Sin embargo, por muy graves que sean estos asuntos, la crisis del SICA está asociada más bien a su eficacia, un problema que comparte con todas las iniciativas del regionalismo latinoamericano. Pese a la crisis y a sus debilidades, el SICA es el proceso latinoamericano de integración más dinámico, el que más importancia tie-

El SICA es un proceso que se mantiene vivo pese a sus achaques

ne para sus países y el que más lejos ha llegado. Frente a otros procesos en decadencia —como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)— o que sobreviven con baja intensidad a este periodo en el que el regionalismo tiene menos espacio político —la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur)—, el SICA es un proceso que se mantiene vivo pese a sus achaques.

Desde inicios de siglo, el SICA ha generado una cartera de políticas regionales de mucho valor, quizás más importante que la de cualquier otro proceso latinoamericano, seguramente porque, como en la Comunidad del Caribe (CARICOM), la dimensión regional es obligatoria para alcanzar las economías de escala necesarias. Estas políticas ofrecen una selección de prioridades cuya formulación cuenta con respaldo (pasivo con frecuencia) de varios actores de la región, como por ejemplo en el caso de la integración económica²².

Pero el resultado ha sido un conjunto excesivamente amplio e irregular de políticas difícil de abarcar y de financiar. Ello refuerza algunas percepciones negativas sobre el funcionamiento del sistema. Para conseguir que la integración sea eficaz, cumpla sus objetivos y sea tangible para sus ciudadanos, habría que corregir tres elementos que fallan drásticamente en la definición y formulación de las políticas: la articulación con las políticas nacionales, los instrumentos de ejecución y los instrumentos de financiación.

Y más allá del debate de la eficacia, el SICA está condicionado por algo que va mucho más allá del repetido –y probablemente errado– diagnóstico de la falta de voluntad integradora. Depende de la definición explícita, y consensuada en la medida de lo posible, de los intereses de los países miembros en torno de ella y de la definición de los recursos necesarios para garantizar su eficacia. Un marco de intereses claros sobre el alcance del proceso y de racionalidad en los recursos disponibles para impulsarlo mejoraría la capacidad del SICA para ser marco de diálogo político y volver a ofrecer a la región un consenso eficaz para su desarrollo en las próximas décadas.

Es importante, no obstante, que el diálogo y el diseño de nuevos consensos permitan construir un proyecto transformador alrededor de la integración regional, evitando que, como ha señalado Alex Segovia²³, la integración sea un factor de consolidación del *statu quo*, de la forma tradicional de hacer las cosas, y no un factor de cambio; que cumpla la función clásica de los procesos de integración regional de ser un marco que evite obstáculos que en el nivel nacional frenan los cambios.

Los retos para entender el nuevo ciclo centroamericano

En estas difíciles circunstancias que América Central comparte con el resto de la sociedad global, parece importante definir los focos de análisis y

22. P. Caldentey: «Sesenta años de integración económica en Centroamérica: avances y retos», BCIE / SIECA / CMCA, 2021; Jorge Mario Martínez Piva (ed.): *Logros y desafíos de la integración centroamericana. Los aportes de la Cepal*, Cepal, Santiago de Chile, 2019.

23. A. Segovia: ob. cit.

debate. Tras 30 años de paradigma neoliberal y regionalismo abierto, la región debería superar esta fase de crisis y cambio construyendo una nueva narrativa sobre su desarrollo. Necesita lo que aquel clásico trabajo de Torres-Rivas planteaba en su llamado a la «interpretación del desarrollo social centroamericano». Pensando en las próximas décadas, conviene abordar los vínculos entre Estado, mercado y democracia en las desiguales sociedades de la región y analizar la crisis de los proyectos políticos de cambio social que ha vivido América Central.

Asuntos como la transformación y capacidad de interlocución para el cambio de los actores sociales centroamericanos (elites económicas, mujeres, jóvenes, movimientos sociales o partidos políticos) o la economía política de las migraciones y las remesas familiares deben formar parte del diálogo político para construir consensos. También el rol de los actores externos en el desarrollo de la región y los nuevos ejes de inserción internacional ante la reconfiguración de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Los nuevos consensos tendrán que dar respuesta asimismo a la necesidad de movilizar recursos internos para financiar la democracia y el desarrollo en sociedades tan desiguales como las centroamericanas.

El reto es amplio y complejo y se manifiesta en el entorno más complicado de las últimas décadas, pero lo mismo ocurrió a finales de los años 80 y la región pudo liberarse de la presión de asuntos y actores externos para encontrar un marco de soluciones a sus desafíos. Los próximos años podrían dar lugar a un proceso similar y es preciso estar preparados para ello. ☐



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2021

Gijón

Nº 110

PAISAJES PORTUARIOS Y RELACIONES PUERTO CIUDAD
EN EL ÁMBITO ATLÁNTICO

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 39 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 50 euros

Suscripción internacional: Europa - 66 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 90 euros (incluye gastos de envío)

Suscripción digital: 22 euros

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla Nº 3, entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.es>.

Nicaragua: de proyecto revolucionario a dinastía autoritaria

Elvira Cuadra Lira

Tras la derrota electoral en 1990, Daniel Ortega proyectó su regreso al poder. Para ello, estableció pactos con la vieja política y con el «gran capital». Finalmente, logró su objetivo en 2007 para no irse más: en estos años fue construyendo un poder personal que hoy encabezan él mismo y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. El encarcelamiento de líderes históricos del sandinismo fue el último episodio de una deriva crecientemente dictatorial.

En la década de 1980, mencionar el sandinismo bastaba para concitar un sentimiento de respeto, entusiasmo y solidaridad en una parte importante de la sociedad nicaragüense y en el exterior. Con el tiempo, el apelativo, que originalmente remitía a la revolución popular contra la dictadura de Anastasio Somoza, se recubrió de una oscura sombra hasta provocar un fuerte rechazo en los nicaragüenses y diversos actores internacionales. En la actualidad, el sandinismo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio presidencial de Nicaragua, encarna un proyecto político dinástico y autoritario que no ha escatimado ningún recurso del poder para entronizarse y permanecer en él, aunque esto signifique aplastar con la violencia los derechos de toda la sociedad nicaragüense.

Elvira Cuadra Lira: es una socióloga nicaragüense. Actualmente es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica.

Palabras claves: autoritarismo, sandinismo, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Nicaragua.

El decantamiento de la revolución

Los resultados electorales de 1990 se convirtieron en una bofetada de realidad para el sandinismo. Muy seguro de que todo estaba bajo control y de que contaba con un apoyo popular mayoritario, se dispuso a unas elecciones presidenciales que finalmente perdió. Cerca de 80% de los electores fue a votar y Violeta Barrios de Chamorro, la candidata por la Unión Nacional Opositora (UNO), ganó con 54% de los votos, mientras que Daniel Ortega, el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo 40%. Pocos días después de reconocer su derrota electoral, en una plaza pública, Ortega pronunció ante sus seguidores su famosa frase «Vamos a gobernar desde abajo», anunciando tempranamente su futuro regreso al poder.

En 1990 Ortega pronunció ante sus seguidores su famosa frase «Vamos a gobernar desde abajo»

La sociedad nicaragüense quedó polarizada y marcada por una enorme desconfianza entre quienes apoyaban el proyecto político de la revolución y quienes sostenían a la UNO como la fuerza de oposición ganadora de los comicios. Se pactó la transición entre el gobierno entrante y el saliente, mientras el país se sumía en una ola de conflictos que duró varios años e incluyó el rearme de grupos de ex-combatientes del ejército y la llamada «Contra» (insurgencia antisandinista apoyada desde Estados Unidos), otrora protagonistas del enfrentamiento interno que vivió el país durante la década de 1980 y desplazados de la arena política a un segundo plano luego de las elecciones¹.

En ese periodo, el FSLN sufrió escisiones cuando varios grupos de militantes se separaron del partido por diferencias políticas con el sector encabezado por Ortega; de uno de ellos surgió a mediados de la década de 1990 el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora conocido como Unión Democrática Renovadora-UNAMOS. Algunos de sus principales dirigentes eran figuras icónicas de la revolución, como los ex-guerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, actualmente encarcelados y condenados por «traición» a la patria, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias no esclarecidas mientras se encontraba enfermo en prisión.

Con un partido con escasas disidencias internas y sin apoyos significativos de la izquierda internacional en crisis, Ortega maniobró para lograr el control del aparato partidario y mantener los espacios de poder en la Asamblea Nacional con una bancada que representaba aproximadamente

Con un partido con escasas disidencias internas y sin apoyos significativos de la izquierda internacional en crisis, Ortega maniobró para lograr el control del aparato partidario y mantener los espacios de poder en la Asamblea Nacional con una bancada que representaba aproximadamente

1. Antonio Lacayo Oyanguren: *La difícil transición nicaragüense. En el gobierno con doña Violeta*, Fundación UNO, Managua, 2005, y E. Cuadra Lira, Andrés Pérez Baltodano y Ángel Saldomando: *Orden social y gobernabilidad en Nicaragua. 1990-1996*, CRIES, Managua, 1998.

un tercio de los escaños parlamentarios, el respaldo de los gobiernos locales conquistados y un número importante de organizaciones sociales. Ese apoyo político le permitió posicionarse como el líder de oposición más beligerante del país y avanzar en su plan para recuperar el poder.

El golpe maestro de Ortega fue el acuerdo político que estableció con su adversario Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en 2000. El Pacto Alemán-Ortega, como se lo conoce, sentó las bases para su regreso a la Presidencia mediante una reforma a la ley electoral que disminuyó el porcentaje de votos requeridos en primera vuelta y abrió las puertas para que los dos caudillos controlaran los demás poderes estatales, particularmente el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el nombramiento de magistrados leales. El principal ganador fue Ortega.

En esa época, el líder sandinista se enfrentó a la denuncia pública de abuso presentada por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo. El entonces ex-presidente logró evadir a la Justicia y superar el impacto político con el respaldo público de su propia esposa y madre de Zoilamérica, Rosario Murillo, quien después se convirtió en figura clave de su proyecto político dinástico.

El FSLN, bajo el control de Ortega, se convirtió en una maquinaria de liderazgo autoritario y personalista, con prácticas populistas, una involución ideológica acelerada y un pragmatismo oportunista que no le hizo dudar en respaldar las reformas económicas de los tres gobiernos neoliberales que se sucedieron entre 1990 y 2007.

La instalación del corporativismo autoritario

Con el camino institucional allanado, *Daniel* se instaló nuevamente en el sillón presidencial en 2007 cuando ganó las elecciones con 38% de los votos; un porcentaje bajo pero suficiente para darle legitimidad a su gobierno tanto dentro del país como en el exterior. Diversos sectores sociales y económicos se mostraban escépticos y hasta desconfiados de su futura gestión, pero no se atrevieron a cuestionar los resultados electorales y prefirieron darle el beneficio de la duda esperando, según decían, que «aprendiera de los errores del pasado».

Ortega se benefició de algunas tendencias que se potenciaron durante su gobierno hasta antes de 2018, tales como el sostenido crecimiento económico desde los años 90, que entre 2007 y 2017 promedió 4,2%. A diferencia de otros países de la región centroamericana que enfrentaban graves situaciones de violencia e inseguridad, Nicaragua presentaba indicadores

de criminalidad y percepción de inseguridad relativamente bajos. Además, pese a los altos niveles de informalidad de la economía, en ese mismo periodo la cantidad de personas activas en la seguridad social se duplicó, pasando de un poco más de 450.000 en 2007 a 900.000 en 2017².

Para empujar su proyecto político, el nuevo sandinismo «danielista» dirigió sus esfuerzos en dos direcciones: construir una alianza estratégica con el gran capital privado y el Ejército, y poner en marcha un entramado de dispositivos de vigilancia y control social para contener cualquier expresión de descontento. Esta entente con el gran capital y los militares fue apalancada con los fondos provenientes de la cooperación venezolana. La información sobre estos fondos ha sido manejada como secreto de Estado; sin embargo, algunos economistas e investigaciones periodísticas estiman que cerca de 80% de los más de 3.400 millones de dólares fueron privatizados en un periodo de ocho años a través de un holding de empresas denominado Alba de Nicaragua SA (Albanisa), manejado directamente por familiares y personas de confianza de Ortega y Murillo, su esposa, primera dama y vocera gubernamental³.

La alianza y el llamado modelo de «diálogo y consenso» con el gran empresariado facilitaron el nacimiento y consolidación de un nuevo grupo de poder económico alrededor de la familia Ortega-Murillo, que rápidamente extendió su control sobre sectores sensibles como la distribución de combustibles, así como la generación y distribución de la energía eléctrica, pero también la exportación de café, carne, leche, azúcar, madera y otros productos. Hasta 2018, los empresarios privados gozaron de beneficios fiscales, ocuparon cargos directivos en instancias estatales, contaron con un acuerdo para que los ajustes salariales fueran mínimos, pudieron rechazar reclamos laborales y mantuvieron una oficina de *lobby* parlamentario a cambio de respaldar políticamente al gobierno⁴.

La institución militar aprovechó la alianza con Ortega para participar en los negocios que crecieron al amparo de los fondos venezolanos y expandir su red de empresas a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), en sectores claves como la construcción y la exportación de madera y carne. En términos políticos, las Fuerzas Armadas mantuvieron su autonomía relativa a cambio de un respaldo político que Ortega sabía le sería útil; de manera que en 2014 reformó el Código Militar eliminando todos los mecanismos

2. Edmundo Jarquín (coord.): *El cambio azul y blanco. Dejando atrás el régimen de Daniel Ortega*, FUNPADEM, Managua, 2020.

3. César Batiz, Octavio Enríquez e Iván Olivares: «La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela» en *Connectas*, s./f., <www.connectas.org/la-bonanza-de-daniel-ortega-se-llama-venezuela/>.

4. «El idilio de Daniel Ortega con el gran capital» en *Connectas*, s./f., <www.connectas.org/especiales/nicaragua-no-calla/el-idilio-de-daniel-ortega-con-el-gran-capital/>.

de supervisión y control civiles sobre el aparato militar para establecer una línea de mando directamente subordinada a la Presidencia, estableció la permanencia del jefe del Ejército a consideración del presidente y colocó a numerosos oficiales en retiro en puestos claves de instituciones civiles en áreas como la construcción y las telecomunicaciones⁵.

Desde 2007, Ortega avanzó en su control sobre los demás poderes del Estado a través del nombramiento de magistrados leales. El control sobre el órgano electoral ha jugado un papel fundamental en su estrategia de consolidar el proyecto político familiar, pues le permitió reelegirse en 2011 a pesar de que la Constitución lo prohibía expresamente; también facilitó los fraudes electorales que le permitieron controlar la mayoría de las alcaldías y de los escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional. El control se extendió a la Corte Suprema y demás instituciones de la administración de justicia, así como la Contraloría General de la República.

Mientras construía un entramado de relaciones cupulares, Ortega creó un sistema de dispositivos para la represión, la vigilancia y el control social con el propósito de contener cualquier expresión de descontento entre la población. Ese sistema incluía desde instituciones públicas, como la Policía, hasta colectivos paraestatales como los llamados «grupos de choque» —organizados con jóvenes simpatizantes que desde 2008 salieron a las calles a golpear y agredir a ciudadanos que protestaban—, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) organizados en barrios e instituciones públicas para vigilar a las personas desafectas al gobierno.

En cuanto al FSLN, el otrora partido de la revolución se degradó aceleradamente para quedar convertido en una maquinaria al servicio del proyecto personal de Ortega-Murillo. Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2016, comenzó a asumir el control del aparato partidario para asegurarse la sucesión dinástica en el poder. Para eso, construyó una base de apoyo propia con jóvenes militantes a partir del reparto de prebendas, el tráfico de influencias y la participación en negocios oscuros. Esas nuevas camadas más vinculadas al Estado desplazaron a la «militancia histórica» que se mantenía leal al partido sobre todo por afinidad ideológica y trayectoria

**Esas nuevas
camadas más
vinculadas al Estado
desplazaron a la
«militancia histórica»**

5. E. Cuadra Lira: «Las reformas del sector seguridad en Nicaragua: cambios significativos en el paradigma de la seguridad» en Catalina Niño Guarnizo (ed.): *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2014*, Fundación Friedrich Ebert, Programa de Cooperación en Seguridad Regional, Bogotá, 2014, y E. Cuadra Lira: «El nuevo protagonismo militar. Fuerzas Armadas y poder» en E. Jarquín (coord.): *El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?*, PAVSA, Managua, 2016.

política. Sin disidencias internas y con una base de apoyo propia, Ortega y Murillo afianzaron su control sobre el aparato partidario⁶.

En el exterior, el primer periodo presidencial de Ortega (2007-2011) coincidió en el tiempo con una tendencia de cambio político en América Latina que resultó favorable a sus propósitos: la existencia y llegada a la Presidencia de una serie de gobiernos de izquierda por la vía electoral y la constitución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en el contexto de la retórica del «socialismo del siglo XXI».

**Hasta 2018 Ortega
era reconocido como
poder legítimo
por la mayoría de
los gobiernos del
mundo, incluido EEUU**

Más tarde, aunque el panorama político latinoamericano cambió, Ortega no perdió respaldos significativos y hasta 2018 era reconocido como poder legítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo, incluidos los de EEUU y los centroamericanos con los que manejaba relaciones de mucha cordialidad, en especial con la Honduras de Juan Orlando Hernández, pese a la supuesta divergencia ideológica. Algunas instancias internacionales asumieron una posición de cooperación con el gobierno nicaragüense, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Para diversos sectores económicos, sociales e incluso políticos, el corporativismo autoritario de Ortega era funcional, pues permitía mantener la estabilidad y el crecimiento económico, además de la formalidad democrática institucional, aunque eso significara la restricción de derechos fundamentales, el control de los poderes estatales y el sistema político, y el avance acelerado de un proyecto político «sultanístico»⁷.

El estallido social que sacudió el sistema

El estallido social de abril de 2018 interrumpió abruptamente la «buena» marcha del proyecto autoritario de los Ortega-Murillo, cuando miles de personas se lanzaron a las calles en todo el país para expresar su descontento por el anuncio de reformas a la seguridad social que afectaban a jubilados, cotizantes y empleadores. El punto de quiebre fue la respuesta violenta y represiva de Ortega a las multitudinarias marchas y protestas de ese año, de

6. «La lenta mutación del FSLN» en *Perspectivas* N° 55, Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), 5/2011.

7. E. Jarquín (coord.): *El régimen Ortega*, cit.

tal manera que el esquema de alianzas y sostenes de su proyecto político se desconfiguró significativamente.

Acostumbrado a resolver las crisis mediante negociaciones privadas y excluyentes, Ortega esperaba contener los ánimos de la población y volver el estado de cosas a la normalidad ofreciendo un diálogo nacional que inicialmente incluía solo al sector privado como interlocutor, pero ni la ciudadanía ni los empresarios aceptaron, de manera que le pidió a la Iglesia católica su intermediación y se amplió la participación a diversos sectores sociales. Pero el anuncio del diálogo no contuvo las protestas ni la represión policial, y el 23 de abril el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización gremial empresarial, convocó a una marcha en Managua con la participación de miles de personas que demandaban la salida de Ortega de la Presidencia, un hecho inédito en la historia reciente del país⁸.

Después de la marcha y el diálogo iniciado en mayo de ese año, se rompió la alianza que los empresarios habían mantenido y alimentado con Ortega durante más de diez años. Esto representó un duro golpe para el régimen, que desde entonces ha hecho esfuerzos infructuosos para restablecerla mediante ofrecimientos, negociaciones, chantajes, amenazas y, finalmente, el encarcelamiento de algunos directivos del sector privado en 2021 bajo supuestos cargos de «traición a la patria». La otra alianza estratégica de Ortega con el Ejército se ha mantenido invariable desde que se inició la crisis, aunque los militares han tenido el cuidado de no participar de manera visible en la represión contra la ciudadanía.

A lo largo de cuatro años de crisis sociopolítica, Ortega decidió manejar la situación con una política de represión y violencia que ha disminuido su legitimidad y apoyos a números rojos dentro y fuera del país. En el camino ha perdido el reconocimiento de actores claves como la Iglesia católica, a la que se ha dedicado a perseguir y atacar abiertamente. Su respaldo entre la población es mínimo, tal como se apreció en los sondeos previos a las elecciones de noviembre de 2021, cuando los porcentajes de apoyo apenas alcanzaron el 18%. Ortega y Murillo esperaban que ese proceso electoral se convirtiera en un punto de inflexión para pasar la página a la crisis, asegurar su permanencia en el poder y recomponer sus puntos de apoyo.

Su apuesta era asegurar de nuevo la Presidencia y Vicepresidencia con un mínimo de legitimidad proveniente de los votos ciudadanos, restablecer un entendimiento al menos con una parte del sector privado para darle viabilidad a su nuevo periodo presidencial y revestirse con el reconocimiento de la Iglesia católica, que goza de gran autoridad entre la ciudadanía, para recomponer sus relaciones con la comunidad internacional, disminuir su

8. «Masiva marcha en Nicaragua para repudiar la brutal represión del régimen de Daniel Ortega» en *Infobae América*, 23/4/2018.

rechazo y obtener los fondos de cooperación que le permitieran lidiar con la rampante crisis económica que afecta al país por el efecto combinado de la prolongada crisis sociopolítica y la pandemia de covid-19.

El temor real de que se conformara un frente amplio de oposición electoral, que pusiera en riesgo sus planes de continuidad dinástica disputando los votos ciudadanos, lo llevó a controlar las variables de la competencia y a radicalizar la represión mediante la aprobación de un conjunto de leyes que limitaron aún más los derechos ciudadanos. La escalada de represión y violencia ha significado el encarcelamiento de más de 50 líderes, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas y de siete aspirantes presidenciales durante 2021, hasta alcanzar la suma de 180 personas prisioneras políticas, además de la persecución y el silenciamiento de las voces críticas y la prensa independiente.

El rechazo de la población se hizo sentir el mismo día de las votaciones cuando una amplia mayoría, estimada en cerca de 80%, se abstuvo de votar a pesar de las amenazas, las presiones y el control gubernamental. El órgano electoral totalmente controlado por Ortega le atribuyó 75% de votos al anunciar su reelección y la de Murillo para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. La comunidad internacional rechazó ampliamente los resultados electorales por considerar que el proceso no contó con las condiciones necesarias y que tampoco expresaba la verdadera voluntad popular.

El problema de la viabilidad dinástica

Sin legitimidad ni reconocimiento tanto en el interior como fuera de Nicaragua, Ortega se instaló de nuevo en la Presidencia para un cuarto periodo consecutivo. El escenario que enfrenta es complejo y nada favorable.

Sin la posibilidad de obtener más fondos de la cooperación venezolana, que cesaron desde hace varios años, y con el acceso a préstamos de organismos financieros internacionales bajo riesgo de suspensión, Ortega comenzó a explorar fuentes de financiamiento de regímenes autoritarios como Rusia, Irán y China, pero la invasión rusa de Ucrania pospuso la esperada cooperación, a pesar de que se ha anunciado con bombos y platillos la firma de acuerdos con los dos últimos y el nombramiento de un embajador chino en Managua. De momento, cuenta con dos salvavidas para mantenerse a flote económico: los préstamos que recibe del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y las remesas familiares, que se han incrementado significativamente y ya representan 17% del PIB como consecuencia del enorme flujo migratorio que se está produciendo por razones políticas y económicas.

La crisis y su manejo ya han hecho mella entre las propias bases del orteguismo y cada vez se hace más evidente un acelerado proceso de erosión que toca incluso a sus más cercanos. Desde finales de 2021 y los primeros meses de 2022 se han conocido varias defecciones: entre ellas, la más reveladora fue la renuncia pública de David McFields, representante ante la OEA, durante una reunión del Consejo Permanente de la organización. La respuesta de Ortega y Murillo ha sido incrementar la vigilancia y reprimir a sus propios seguidores, como ocurrió con un conocido militante de los llamados «históricos» que se atrevió a hacer críticas a través de las redes sociales y ha sido encarcelado. Se conoce que otros conatos de disidencia interna han sido sofocados con presiones y amenazas.

El problema principal de Ortega y Murillo es darle viabilidad a su proyecto continuista en un escenario poco favorable. Internamente, no cuentan con respaldo de la población, su base de apoyo se está resquebrajando con rapidez, tampoco han logrado restablecer las alianzas fácticas con el sector empresarial, se enfrentan a una crítica situación económica y se está alimentando una corriente subterránea de mayor descontento e insatisfacción social. La alternativa para controlar este escenario es la «institucionalización» de un Estado policial, mediante la aprobación de un conjunto de leyes que restringen derechos fundamentales, la «desertificación» de la sociedad civil con la cancelación de más 400 organizaciones no gubernamentales y la «normalización» de la vigilancia y el control sobre la población.

En el plano internacional, Ortega ha decidido autoaislarse y desde 2018 maneja una política exterior confrontativa con los países y foros que han urgido una salida democrática y pacífica a la crisis. Esta política se ha acentuado desde 2021 con los agrios intercambios diplomáticos que se han producido con España, Colombia, Taiwán —país con el que rompió relaciones abruptamente para restablecer lazos con China— e incluso México y Argentina, que intentaron abrir una alternativa de negociación antes de las elecciones de noviembre de ese año. Las hostilidades han llegado a puntos críticos cuando el gobierno expulsó al representante del Vaticano y poco después ordenó el allanamiento y la confiscación de la sede de la OEA en Managua.

A falta de apoyo entre la comunidad internacional, cada vez es mayor el acercamiento a regímenes autoritarios como los de Rusia, China e Irán, mientras en la región se mantienen los vínculos próximos con Venezuela, Cuba y Bolivia, así como apoyos moderados de México y Argentina. El giro autoritario que está en curso en Centroamérica también ha acercado a Ortega-Murillo a gobiernos como los de Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales en foros como la OEA prefieren abstenerse de votar resoluciones que no favorecen al presidente nicaragüense. En esas condiciones, pareciera que el régimen de Ortega espera en casa de paja sabiendo que se avecina un vendaval. ☐

Los apóstoles del bitcoin que conquistaron El Salvador

Nelson Rauda Zablah

Más que una moneda, el bitcoin es una religión. Surgió de las ideas de unos apóstoles de la libertad y activistas perseguidos por el gobierno. Sus usuarios y creyentes hablan de esta moneda no estatal con fervor. ¿Cómo fue que esos «libertarios» evolucionaron a millonarios que utilizan helicópteros militares para promover un proyecto gubernamental en El Salvador? ¿Por qué su presidente, cada vez más autoritario, impulsó esta riesgosa –y excéntrica– iniciativa? En este artículo están muchas de las respuestas.

Tres meses después de escuchar sobre el bitcoin y sobre lo afortunados que éramos los salvadoreños por haberlo adoptado tan pronto, de ver lo inútil que era hacer cálculos de equivalencia en dólares porque el precio cambia diariamente y de tratar de explicarles a medios internacionales cómo era vivir en un país que usa los frijoles mágicos más populares de internet como moneda, me enviaron a Miami a conocer el paraíso.

El bitcoin es, por supuesto, una moneda digital, pero esta no es una historia financiera. Si lo fuera, quizá debería haber ido a Nueva

Nelson Rauda Zablah: es periodista y trabaja desde 2015 en *El Faro*, el primer medio nativo digital de América Central. En 2018 fue finalista del European Press Prize y en 2020 fue nominado al Premio en Innovación de la Fundación Gabo.

Palabras claves: autoritarismo, bitcoin, criptomonedas, Nayib Bukele, El Salvador.

Nota: este texto es parte del proyecto «Elites sin destino», apoyado por el Programa de Medios y Comunicación para América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Una versión previa fue publicada en *El Faro*, 3/2022.

York, con el toro de Wall Street y los corredores de bolsa. Bitcoin no es solo una moneda. Ocho meses después de empezar a conocer a miembros de la comunidad bitcoin de Estados Unidos, de Venezuela, de Senegal y Egipto, de Holanda e Inglaterra, Guatemala y El Salvador, algo en su lenguaje y en su actitud me hace pensar en ellos como miembros de un culto religioso.

«Hay que entender la teología de liberación espiritual de bitcoin, el resto es fácil», dice el gurú Max Keiser, un ferviente porrista del caso salvadoreño de adopción del bitcoin y de uno de los apóstoles más populares, el presidente Nayib Bukele. «Es más fácil que se apague el sol que que el precio del bitcoin se reduzca a cero», me dijo un empresario de bitcoin guatemalteco. Alex Gladstein, un activista del bitcoin y de derechos humanos, enlista la moneda a la par de lo que considera logros equiparables de la humanidad: las pirámides de Egipto, la capacidad de volar, la llegada a la Luna, la energía nuclear.

Todos parecen personajes de Ayn Rand, la filósofa libertaria: son titanes, hombres insumisos y pioneros, su moneda es el fuego de Prometeo, el fruto prohibido de Adán. «Crear un sistema monetario que nadie puede corromper puede ser nuestro logro más improbable e impresionante», dice Gladstein. «Sí, parece religioso», admite. «Quizá deberíamos comparar el bitcoin y la cristiandad por un segundo...».

Como el cristianismo, el bitcoin tiene un fundador misterioso, un texto sagrado y sus apóstoles. «Creo que dentro de 10 o 20 años habrá una religión organizada alrededor del bitcoin», dice Gladstein. Pero dice también que el bitcoin es más real que el cristianismo. «Una cosa es creer en Jesucristo y tomar la Eucaristía. Pero eso requiere estirar la imaginación porque no hay nada físico. Bitcoin es real: es matemática respaldada por energía, no se puede crear de la nada», dice.

Aunque suena como John Lennon cuando dijo que los Beatles eran más grandes que Jesús, Gladstein no es un fanático, ni un extremista, ni una excepción en el mundo bitcoin. Es uno de los organizadores del evento por el que llegué a Miami. Su cargo es muy serio: director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés)¹. La fundación organiza el Oslo Freedom Forum, una conferencia que reúne a activistas con artistas, empresarios y periodistas, una especie de festival Coachella de derechos humanos. En Miami fui a buscar a algunos de esos apóstoles y evangelistas que han convencido al presidente de un país pobre como El Salvador de gastar unos 200 millones de dólares para creer en el sueño que nos sacará a todos de la pobreza.

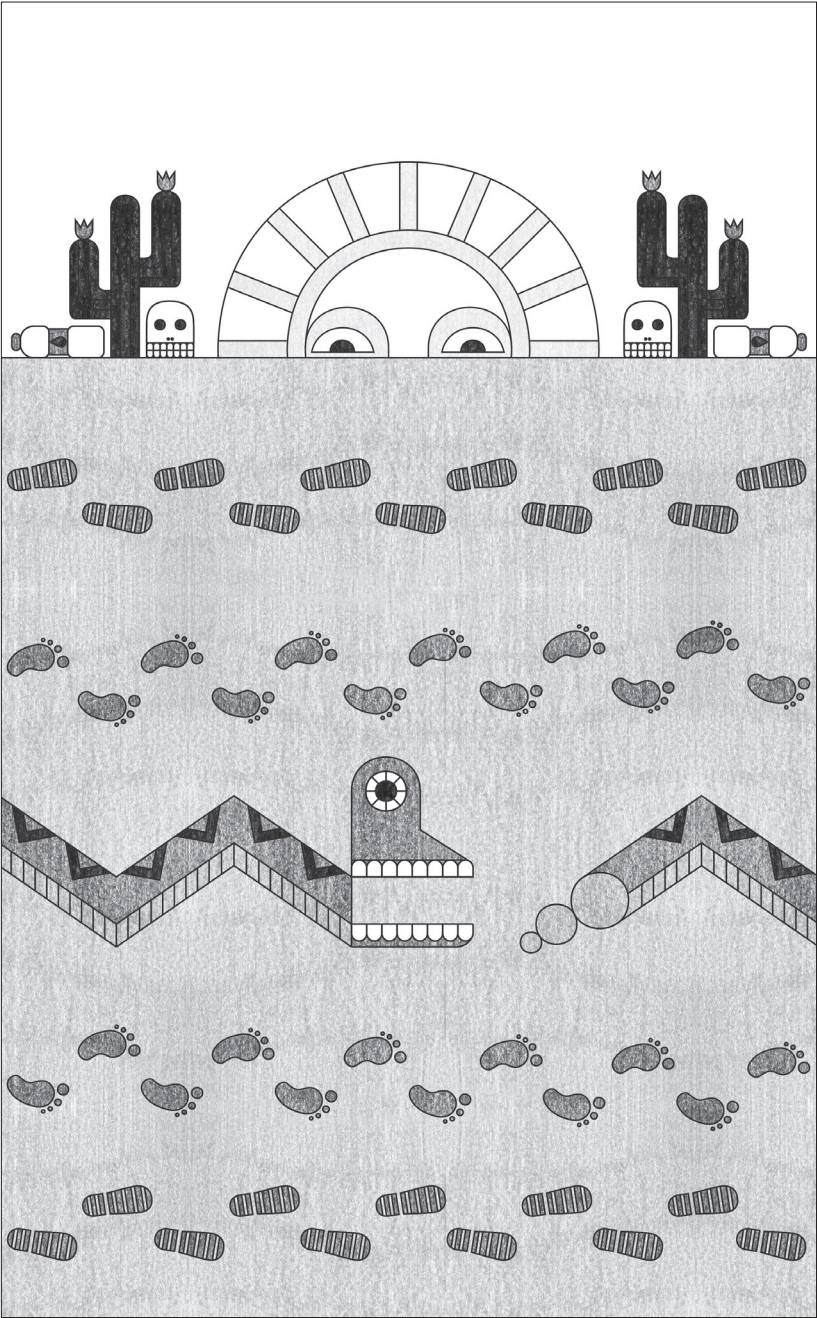
1. N. Rauda: «Alex Gladstein: 'No usen Chivo, porque es contradictorio a bitcoin'» en *El Faro*, 31/10/2021.

Eso es exactamente lo que la publicidad dice. «¿Tenías 10 dólares en Bitcoin en 2010? En agosto de 2021 son 500.000 dólares. No pierdas los próximos 10 años», dice el *copy* de Binance, una casa de intercambio de criptomonedas. Celebrities como Kim Kardashian, el basquetbolista Stephen Curry y el jugador de fútbol americano Tom Brady han publicitado inversiones en criptomonedas. Hubo seis anuncios de empresas cripto en el Súper Tazón de 2022. El actor Matt Damon estelariza un anuncio de crypto.com, la misma plataforma que patrocina al PSG y que compró los derechos para renombrar el Staples Center, el estadio donde juegan los Lakers de Los Ángeles. Peter McCormack, un empresario de bitcoin inglés, compró el Real Bedford, un equipo de fútbol que compite en la décima división, y se trazó el objetivo de llevarlo hasta la liga Premier y usar el bitcoin como estrategia comercial para hacerlo. El Salvador se convirtió en un hito para la comunidad de creyentes desde que, en junio de 2021, el presidente Bukele anunció la adopción del bitcoin como moneda legal². En la avenida Jerusalén, de San Salvador, hay una gigantografía que muestra a un hombre sonriente —la escena cripto está llena de hombres— y dice: «Santiago Acevedo, 28 años. Dueño de su negocio global en Paxful. Sé el próximo. Invertí en bitcoin».

Tres días después de oír el evangelio del bitcoin en los lujosos hoteles de Miami, sentado en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, empecé a pensar en lo que decían. Aquí me podría convertir en un hombre nuevo, manejar por la costa en un Lamborghini naranja para ir a ver los murales del barrio de Wynwood. Aquí con las muchachas en los bikinis diminutos y los muchachos de cuerpos bronceados en busca de la ola perfecta. Aquí en Miami Beach, donde el invierno no llega y nadie fracasa, y la edad promedio es 23. Mi trabajo sería acostarme bajo el mismo sol que Camila Cabello y Pitbull y mantener la esperanza. Podría pedir un coco o un trago tropical que se viera bien en Instagram, usar lentes oscuros, posar sin camisa para lucir mi bronceado y, dentro de diez años, contarle a todos cómo es mi vida porque compré una escalera al cielo llamada «bitcoin».

El mito creacionista del bitcoin es una historia sobre liberación, sobre levantar a los desprotegidos y confrontar a los poderosos. En Miami, el portador de este mensaje es Nic Carter, un veinteañero, inversionista de bitcoin, con nombre de estrella pop, mocasines sin calcetas, traje sin corbata y lentes de sol en el saco.

2. N. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en *El Faro*, 10/6/2021.



La génesis del bitcoin, dice Carter, se remonta hasta la década de 1970. En 1976, Whitfield Diffie implementó por primera vez la criptografía, el cifrado de mensajes usado en el ámbito militar y gubernamental, para fines civiles y académicos. Diffie creía que la criptografía era «una herramienta poderosa para proteger a los individuos de un adversario poderoso». Casi una década después, otro criptógrafo, David Chaum, publicó una profecía³. En 1985, Chaum escribió que «se están plantando los cimientos para una sociedad dossier en la que las computadoras serán utilizadas para inferir los estilos de vida, hábitos, ubicaciones y asociaciones de los individuos». Como lo que Facebook o Amazon hacen ahora.

En 1988, otro apóstol del cripto, Tim May, escribió el «Manifiesto criptoanarquista»⁴, donde predijo el comercio electrónico y la piratería. En 1992, en San Francisco, California, May se empezó a reunir con un grupo de personas alrededor de estas ideas de libertad y privacidad. Se apodaron «*cypherpunks*», un juego de palabras en inglés entre el género de ciencia ficción *cyberpunk* (al que pertenecen *Blade Runner* o la trilogía *Matrix*) y la palabra *cipher*, cifrado. Los *cypherpunks* creen, esencialmente, que la privacidad es importante, que pedir al Estado que la proteja es inútil y que la mejor forma de protegerla es escribiendo códigos y desarrollando programas que permitan hacerlo. Además de sus reuniones, los *cypherpunks* crearon una lista de correo electrónico que es algo así como un lugar sagrado.

Tal como Moisés recibió los diez mandamientos en el monte Sinaí, el creador del protocolo Bitcoin, Satoshi Nakamoto, usó esa lista de correo para publicar el texto sagrado del bitcoin, el *Libro Blanco*, 16 años más tarde.

Nakamoto es el seudónimo bajo el que se publicó el texto fundacional del bitcoin⁵, el 31 de octubre de 2008. Nadie sabe su género o incluso si se trataba de una o varias personas. En 2011, la revista *The New Yorker* publicó un artículo que buscaba identificar a Nakamoto, pero solo llegó a deducir que su estilo de escritura era inglés británico⁶. En el mito creacionista, Nakamoto es el gran liberador, el mesías. Su *Libro blanco* o *White Paper* describe los fundamentos técnicos del bitcoin. El documento describe así qué es el bitcoin: «una forma de dinero en efectivo electrónico *peer-to-peer* [entre pares] que permite enviar pagos en línea directamente entre las partes y sin pasar a través de una institución financiera». En su invención, el rol de un banco en garantizar la moneda y las transacciones lo cumple una red de

3. D. Chaum: «Security without Identification Card Computers to Make Big Brother Obsolete» en *Communications of the ACM* vol. 28 N° 10, 10/1985.

4. Disponible en <<https://nakamotoinstitute.org/crypto-anarchist-manifesto/>>.

5. Disponible en <<https://bitcoin.org/es/bitcoin-documento>>.

6. Joshua Davis: «The Crypto-Currency. Bitcoin and its Mysterious Inventor» en *The New Yorker*, 3/10/2011.

computadoras. En lugar de confiar en un banco, los creyentes confían en una red de computadoras que realizan los procesos necesarios para verificar las operaciones. Ahí empieza la jerga *bitcoiner*: el libro de registro de todas las transacciones se llama «blockchain». Al trabajo de las computadoras se lo llama minería y a los operarios, mineros. Como pago, los mineros reciben fracciones de bitcoin llamadas «satoshis», por el nombre de su creador, que se abrevian «sats».

En lugar de confiar en un banco, los creyentes confían en una red de computadoras

En el mito de creación del bitcoin, como en el cristianismo, también hay un elemento de persecución: la de Phil Zimmermann, un desarrollador que creó en 1991 PGP, la primera aplicación de mensajería de correo electrónico encriptada⁷. Zimmermann fue procesado por el gobierno estadounidense porque catalogaron su invento como «munición» y alegaron que necesitaba una licencia de exportación. Cada vez que se publica una noticia de que un país prohíbe las transacciones en criptomonedas o la minería bitcoin, en la mentalidad de los creyentes se activa el mito de que el bitcoin es un descubrimiento tan revelador como el evangelio y, por tanto, es perseguido.

Por supuesto, como en toda religión, hay creyentes en una vida después de la muerte. Hal Finney, un *cypherpunk* que ayudó a corregir el código de bitcoin, murió en 2014 pero fue congelado a la espera de que se halle una forma de regresarlo a la vida. El tratamiento de criogenización fue financiado, en parte, con donaciones de bitcoin.

El cuento sobre el invento de unos nerds que abogan por mayor privacidad y libertad incrementa el contraste con la escena actual de ricos y famosos. No hay un ejemplo más actual de esa paradoja que El Salvador.

Fui a escuchar la prédica de Nic Carter porque se trata de un personaje clave en la génesis del bitcoin en El Salvador. Todo empezó en Miami⁸. El 5 de junio, el presidente Bukele apareció en un video en una conferencia llamada Bitcoin 2021. Habló en inglés y anunció que El Salvador adoptaría el bitcoin como moneda de curso legal. Tras él, Jack Mallers, un gringo emocionado, dijo que casi se orinó en los pantalones por la noticia, mientras la audiencia gritaba y aplaudía eufórica.

7. Ph. Zimmermann: «Why I Wrote PGP», extracto disponible en <www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html>.

8. N. Rauda Zablah: «Cómo Bukele, presidente de El Salvador, adoptó el bitcoin en tres días» en *elDiario.es*, 12/6/2021.

Bukele hace ese tipo de cosas de vez en cuando: se toma una *selfie* en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)⁹, se cambia la bio de Twitter y coloca como perfil «dictador», publica una foto comiendo caviar. Pensé que la movida del bitcoin se trataba de otra ocurrencia y que teníamos problemas más grandes. Me equivoqué. Tres días después del video en inglés y del gringo incontinente, me encontré en la Asamblea Legislativa mientras se aprobaba la ley que oficializaba el uso del bitcoin como nueva moneda en El Salvador.

Ese 8 de junio, Nic Carter creó un *space* en Twitter, un chat en vivo, para traducir la Ley Bitcoin a los estadounidenses interesados en lo que estaba pasando en El Salvador. A ese chat se conectó, primero, Karim Bukele, hermano del presidente y uno de sus principales asesores. «Yo no estaba en contacto con ellos y no he estado en contacto con ellos desde entonces», asegura Carter. «Fue una completa coincidencia, quizá un golpe de suerte», dice. «Karim nos dio una descripción de la ley y todo corrió como bola de nieve a partir de entonces».

En el Parlamento salvadoreño, los diputados estudiaron la ley durante menos de 90 minutos y la aprobaron en cinco horas

En el Parlamento salvadoreño, los diputados estudiaron la ley durante menos de 90 minutos y la aprobaron en cinco horas¹⁰. Me conecté al chat de Carter porque estaba claro que había información más valiosa ahí que donde de hecho estaban aprobando la ley. Por ejemplo, un diputado dijo (en español) antes de la aprobación que la ley no obligaría a nadie a usar el bitcoin. En la otra dimensión, se daba en inglés la explicación real de lo que estaba ocurriendo. «Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’», explicó el presidente Bukele, que se unió al chat invitado por su hermano.

Así, la explicación de una ley que afectaría a millones de salvadoreños se dio a un puñado de estadounidenses, en inglés, en un chat de Twitter. Quienes tomaban turnos haciendo preguntas no éramos periodistas salvadoreños, sino inversionistas de bitcoin, aquellos a quienes Carter decidía dar el micrófono.

«Ellos encontraron la plataforma útil para alcanzar a la comunidad occidental de bitcoin en ese momento. Me asombró que, en un momento histórico de aprobación de la ley, [el presidente] eligiera estar en Twitter con una audiencia que honestamente era más que todo de estadounidenses», dice Carter. «No era mi objetivo involucrarme en la política salvadoreña», añade.

9. J. Alvarado: «Otra selfie y ni una palabra sobre nuestros migrantes» en *El Faro*, 26/9/2019.

10. N. Rauda y R. Gressier: ob. cit.

Queriendo o sin querer, los *bitcoiners* juegan un papel importante en la política del gobierno de Bukele y están metidos hasta en la cocina. En El Salvador, los *bitcoiners* no parecen activistas de la libertad y la defensa de los ciudadanos. Son amigos del gobierno. Son asistentes VIP a fiestas exclusivas. Suben a helicópteros, surfean y hacen viajes de pesca¹¹. Tienen acceso privilegiado a políticos, los llevan a *tours* privados en instalaciones del gobierno, los escolta la policía e incluso toman decisiones de políticas públicas¹². Y a algunos les encanta.

Un montón de gringos bailan canciones de Pitbull sobre la arena en el club de playa La Bonita, iluminados por unas lámparas italianas colgadas de palmeras y la pantalla de la plataforma del DJ. En medio baila una muchacha de ojos claros, con tacones, un short de lona y una blusa negra que deja ver su abdomen. Un rato después, algunos conocidos, organizadores de la fiesta, me la presentaron. Me dijo que trabajaba como «creadora de contenido». Lógico, porque esta era una fiesta de lanzamiento para Starbackr, una plataforma para monetizar contenido. Como un OnlyFans pero con bitcoin.

Fiestas como la de La Bonita son cada vez más frecuentes en El Salvador. Desde junio de 2021, muchos de los predicadores e inversionistas de la escena cripto que desfilaron en Miami han llegado al país. En la segunda mitad de noviembre, hubo dos conferencias de bitcoin. Ambas se llevaron a cabo en la Zona Rosa, un barrio donde hay bares, hoteles y discotecas exclusivas en San Salvador, aunque, por supuesto, los asistentes hicieron varias excursiones a las playas, a solo media hora de distancia.

La playa es un punto obligatorio de peregrinaje. En 2019, Michael Peterson, un empresario estadounidense, recibió una donación anónima de bitcoin para hacer proyectos en la comunidad de El Zonte: nació Bitcoin Beach¹³, donde varios negocios aceptaban la moneda antes de la ley de 2021.

Esta iniciativa local ha sido punto de encuentro, pero también punto de división entre los creyentes. Así como entre los cristianos hay un sinnúmero de variedades —católicos, bautistas, luteranos, pentecostales, etc.—, los *bitcoiners* son variados. Hay creyentes politeístas, que impulsan otras iniciativas cripto. Para el lanzamiento de la ley, Brock Pierce, un multimillonario

11. Encrypted Production: tuit, 19/1/2022, <<https://twitter.com/EncryptedFilm/status/1483757858873352194?s=20>>.

12. Noticiero El Salvador: posteo en Facebook, <www.facebook.com/NoticieroSLV/posts/204376101880641>.

13. R. Gressier: «Los creyentes en bitcoin buscan un nuevo paraíso en Atitlán» en *El Faro*, 20/3/2022.

estadounidense, se presentó como embajador del bitcoin. Pierce dio una extravagante fiesta en un hotel de playa con un show de drones, fuegos artificiales, música electrónica y celebridades en la que terminamos bailando conga alrededor de la piscina¹⁴. Pero Pierce, creador de otra criptomoneda llamada Tether, no es considerado embajador por muchos miembros de la comunidad. «Personas como Pierce imprimieron su propio dinero y tratan de convencer a otros de que lo usen. Es muy avaro», me dijo el activista Alex Gladstein¹⁵.

Gladstein, a su vez, representa a otro grupo de *bitcoiners* más conscientes de asuntos de derechos humanos, democracia e inclusión. Es más idealista y es común escucharlo referirse a la manera en que el bitcoin sirve a personas en Nigeria o Líbano para justificar las ventajas de la moneda. Las opiniones de Gladstein sobre el desmantelamiento democrático en El Salvador le han valido epítetos como el de ser «agente de la CIA»¹⁶ y lo confrontan con otro grupo, uno de los más radicales: los «maximalistas».

**Los «maxis» son
una facción que cree
en la supremacía
del bitcoin
sobre cualquier otra
moneda**

Los «maxis» son una facción que cree en la supremacía del bitcoin sobre cualquier otra moneda y que han devenido grandes porristas del presidente salvadoreño. Claro, ese entusiasmo tiene sus beneficios. El 8 de enero de 2022, el gurú Max Keiser, su pareja Stacy Hebert y el empresario Samson Mow publicaron fotos suyas en un taxi particular: despegaron en helicóptero desde la Escuela Militar de San Salvador. En una de las fotos aparece un opera-

rio con uniforme de aerotécnico de esa institución. Los estadounidenses volaron al oriente salvadoreño para conocer el lugar donde el gobierno ha prometido construir Bitcoin City, una ciudad futurista en la que los inversionistas no tendrán que pagar impuestos de ningún tipo.

Keiser estuvo en otra fiesta playera exclusiva para *bitcoiners*, que captó la atención de medios en todo el mundo por lo estrafalaria. Bukele hizo su aparición con un avatar animado, un show de luces y una canción de AC/DC. En la fiesta, uno de los pasajeros del helicóptero, Mow, subió al escenario con Bukele para explicar la emisión de un bono en bitcoin, una idea de Keiser¹⁷. En la fiesta también se anunció la construcción de una utopía bitcoin: esencialmente, la idea es privatizar un terreno dentro del país y construir

14. N. Rauda: «Los evangelistas del bitcoin bailan conga en El Salvador» en *El Faro*, 11/9/2021.

15. N. Rauda: «Alex Gladstein: 'No usen Chivo, porque es contradictorio a bitcoin'», cit.

16. M. Keiser: Bitcoin Pioneer, tuit, 17/2/2022, <<https://twitter.com/maxkeiser/status/1494301953244991490?s=20&ct=loIlatzhtvemoM7j40ffuQ>>.

17. N. Rauda y J. Alvarado: «Bukele explora financiar El Salvador con criptomonedas y sin el Fondo Monetario Internacional» en *El Faro*, 25/11/2021.

una zona económica especial¹⁸, un concepto muy parecido al de empresarios europeos que han tenido reuniones con funcionarios, alabando la adopción del bitcoin y confirmando su interés en adquirir un pedazo de El Salvador¹⁹.

Saquemos algo del camino. Desde el año pasado, todos los académicos y periodistas extranjeros con los que he hablado del bitcoin me preguntan: «¿Por qué Bukele lo adoptó?». He sintetizado mi respuesta en dos razones.

La primera: relaciones públicas. La apuesta por el bitcoin le ha conseguido al gobierno de Bukele muchos embajadores. Cada celebridad del mundo bitcoin que habla sobre El Salvador, sobre las playas de El Salvador, sobre lo seguro que es El Salvador²⁰, sobre lo moderno y lo progresista y lo bonito sirve para limpiar la cara del régimen. «Creo que parte del motivo es promover a Bukele y funcionó. Se propulsó a esta posición de superestrellato político y ahora es el jefe de Estado mejor conocido de Centroamérica y quizá de América, con la excepción de [Jair] Bolsonaro», tal como me dijo Nic Carter. Los embajadores omiten que Bukele tiene negociaciones con las pandillas²¹, que persigue a fiscales que investigan corrupción gubernamental²², que es sospechoso en un escándalo de espionaje telefónico a periodistas²³ o que ha cooptado un órgano judicial que, entre otras cosas, ya habilitó su reelección, contra lo que dice la Constitución salvadoreña²⁴.

La segunda razón es financiera. El Salvador es un país profundamente endeudado y los desvaríos autoritarios de Bukele no han hecho sino aumentar el riesgo país. A mayor riesgo, más intereses cobran los prestamistas. En bitcoins, tiene acceso a una red alternativa que no es gobernada por EEUU, con cuyo gobierno Bukele está enfrentado y de cuya moneda El Salvador depende desde que su economía fuera dolarizada

18. N. Rauda: «Ciudades privadas: el sueño que inversionistas bitcoiner presentaron en El Salvador» en *El Faro*, 17/11/2021.

19. Cristian Flores: tuit, 2/12/2021, <<https://twitter.com/CrisFloresSV/status/1466529636964356098?s=20>>.

20. Jimmy Song (송재준): tuit, 20/1/2022, <<https://twitter.com/jimmysong/status/1484299119267135488?s=20>>.

21. Carlos Martínez, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez: «Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia» en *El Faro*, 23/8/2021.

22. G. Cáceres: «Fiscalía allana oficinas de fiscales que realizaron la investigación Catedral» en *El Faro*, 11/1/2022.

23. Jacobo García: «22 periodistas e integrantes de 'El Faro', espiados con Pegasus durante el mandato de Bukele» en *El País*, 13/1/2022.

24. El Faro/Redacción: «Sala de lo Constitucional avala reelección de Bukele y Estados Unidos lo compara con Hugo Chávez» en *El Faro*, 5/9/2021.

en 2001. No en vano, Estados marginados como Venezuela²⁵ o Corea del Norte²⁶ también han hecho sus propios experimentos con criptomonedas. Este año, El Salvador planea emitir deuda por 1.000 millones de dólares en forma de un criptobono emitido por una empresa domiciliada en Kazajistán²⁷.

La fe en el bitcoin es recompensada en El Salvador. Les voy a contar tres anécdotas.

Uno: el 29 de noviembre de 2021, Jairo Vélez Pérez, un empresario colombiano, daba emocionado su testimonio durante una junta de *bitcoiners*. Vélez es maximalista y dijo que decidió ir a El Salvador sin efectivo ni tarjetas de crédito y tratar de pagar exclusivamente en bitcoin. Pero el primer obstáculo lo enfrentó en el aeropuerto. El Salvador exige a algunos países, entre ellos Colombia, el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Vélez no lo tenía. En la reunión, Vélez dijo que estuvo discutiendo con la empleada del control migratorio hasta que vio a una muchacha con un cartelito que decía «*bitcoiner*». Entonces, le explicó que él venía al país a la conferencia, y santo remedio: fue eximido de un requisito legal. Bienvenido a El Salvador.

La de Vélez no es una historia aislada. El 17 de noviembre, en medio de la semana de conferencias bitcoin, El Salvador eliminó los requisitos de prueba de vacunación o prueba negativa de covid que estaban vigentes desde septiembre de 2020²⁸. No es un secreto. La comunidad de *bitcoiners* tiene alta repelencia a los mandatos legales de vacunarse o utilizar mascarillas, basada en el argumento de que coarta la libertad. En el hotel de la conferencia, escuché cuando una empleada le dijo a otra: «Ya me aburrí de decirles de la mascarilla». Dos meses después, a mediados de enero, El Salvador enfrentó un alza de casos de covid y la población debió hacer largas filas desde la madrugada en busca de una de las pruebas gratuitas del Ministerio de Salud. Pero el país sigue abierto, sin restricciones, para los turistas, y especialmente para los *bitcoiners*.

Dos: la noche de la aprobación de la Ley Bitcoin, mientras los estadounidenses se atropellaban en el chat virtual para hacer preguntas al presidente, alguien le preguntó si había pensado en minar bitcoin en el país. «Jamás

25. Florantonia Singer: «El petro venezolano: una ilusión y una moneda de chocolate» en *El País*, 30/1/2020.

26. Josh Smith: «N. Korean hackers stole \$400 mln in cryptocurrency in 2021 - report» en *Reuters*, 14/1/2022.

27. J. Alvarado y N. Rauda: «El 'bróker' de los criptobonos: 'Hablé con Yusef Bukele sobre el plan para los bonos Bitcoin'» en *El Faro*, 5/1/2022.

28. Migración y Extranjería El Salvador: tuit, 17/11/2021, <https://twitter.com/migracion_sv/status/1461067453916663814>.

se me ocurrió, pero cada día habrá una nueva idea. Así que no habíamos contemplado la minería, pero podemos hacer algo para promoverlo, por supuesto», respondió Bukele la noche del 8 de junio. Al día siguiente, anunció en Twitter que había ordenado a la empresa estatal de electricidad geotérmica que ofreciera un plan con el principal insumo que necesitan los mineros: energía barata²⁹. Ahora, El Salvador tiene una instalación de minería de bitcoin en Usulután³⁰.

Ahora, El Salvador tiene una instalación de minería de bitcoin en Usulután

Tres: el 17 de noviembre, cuando comenzó una de las conferencias, la policía cerró la calle de acceso al Teatro Presidente, donde se llevó a cabo Labitconf. Entonces caminé unos 500 metros pero me di cuenta de que había algunos carros a los que sí dejaban pasar desde el punto donde me detuvieron a mí. Al siguiente día cambié de estrategia. Cuando llegué al redondel, me puse lentes oscuros y le dije a la agente policial, con un acento fingidísimo, como si no hablara español, que venía a la conferencia de bitcoin. Funcionó: la agente quitó los conos y me dejaron pasar.

Tras estar en la conferencia de Miami, rodeado de gente que prometía que el precio del bitcoin llegaría a las nubes, a la Luna, a Marte, de escuchar a personas que habían sido indigentes y ahora son millonarios, de desear ese estilo de vida de Miami, donde todos parecen extras de un video de Will Smith, sentí miedo. Hay una sigla común en los *bitcoiners* para eso: FOMO (*fear of missing out*), el miedo a perderse algo.

Le pregunté a Gladstein, el activista de la Fundación de Derechos Humanos, qué es lo que los *bitcoiners* saben que todos los demás no sabemos. Él puso un ejemplo colonialista: dice que los *bitcoiners* han descubierto un mejor dinero que el que usa el resto del mundo. «Los nativos americanos usaban *wampum*, cinturones, como moneda y luego llegaron los ingleses que tenían oro. Ninguna persona con conocimiento diría 'Prefiero usar el *wampum*', dice. «Creo que los *bitcoiners* se han dado cuenta de que el bitcoin es un dinero más duro que cualquier otro dinero producido por los gobiernos».

Decidí poner a prueba las palabras de los apóstoles. Mi primer problema fue decidir qué billetera usar, de las decenas que hay en el mercado. El

29. N. Rauda: «Primer minero salvadoreño de bitcoin: 'buscamos electricidad más barata'» en *El Faro*, 8/2/2022.

30. TCS Noticias: «Minería de Bitcoin ya funciona en El Salvador», video en YouTube, 15/11/2021, <www.youtube.com/watch?v=ZWasg3JrD0Y>.

gobierno salvadoreño creó su propia billetera, Chivo Wallet, a través de una empresa privada financiada con fondos públicos. La billetera solo es para salvadoreños, requiere registrarse con el documento de identidad. Pero yo no puedo usar la Chivo Wallet porque, como les ocurrió a otros cientos de salvadoreños, alguien usó mi número de identidad para registrarse. ¿Por qué? Bueno, el gobierno ofreció un subsidio de 30 dólares a todo el que la bajara. Si alguien más registró mi usuario, alguien más se quedó con mis 30 dólares. Les sucedió a muchos: una organización presentó una demanda colectiva representando a 131 damnificados³¹. Nunca me pude registrar. Traté en vano de solventar mi caso en un centro de llamadas de la Chivo Wallet y en un punto de atención. Hay cientos de denuncias de personas que han perdido dinero en la Chivo Wallet: gente que envía remesas que nunca se acreditan, transacciones no autorizadas, usurpaciones de identidad, robos. Chivo ha sido tan cuestionado que muchos de la propia comunidad, tan entusiastas del presidente, han promovido el lema: «Chivo no es bitcoin».

Entonces usé otras billeteras. Compré bitcoins la primera vez en un cajero instalado en un centro comercial. Metí un billete de 20 dólares a la maquinita y mi cuenta fue acreditada con 19 dólares y tres centavos. Me cobraron una comisión de casi 5%, no tan distinta de las de los cajeros automáticos normales. Fue una desilusión, porque se supone que Bitcoin es distinto de todas esas empresas como los bancos y las compañías de remesas que cobran grandes sumas de dinero. Pero me dijeron que lo que tenía que hacer era comprar bitcoins directamente en línea, sin intermediarios.

Lo hice. Compré 100 dólares en bitcoins con mi tarjeta de crédito en la aplicación Binance. Pero me dijeron que no era conveniente guardar dinero en Binance, que es un intermediario, sino que hay que tener el control, ya saben, por la privacidad y la libertad. Entonces transferí mi dinero mágico a otra billetera, Muun, aunque para entonces solo eran 66 dólares y 14 centavos. ¿Qué pasó con los otros 33 dólares? Bueno, Binance me cobró una comisión por la compra y otra comisión por sacar el dinero de su plataforma.

Imagino que otros creyentes más experimentados en esto de las criptomonedas se reirán de todas mis novatadas. «Estúpido, ¿no sabes que hay un truco para sacar de Binance sin pagar comisión?». No sabía, y me costó 30 dólares descubrirlo. Ahora, yo puedo ser un fracaso como inversionista, pero piensen una cosa: si los datos del gobierno son ciertos, hay millones de salvadoreños haciendo sus propios experimentos con estas tecnologías. Y hay miles de personas pagando el precio de experimentar. La Fiscalía salvadoreña

31. Ronald Erazo y Dennis Argueta: «La Sala de lo Constitucional está permitiendo esta vulneración a los ciudadanos»: Cristosal sobre nuevas demandas contra Chivo Wallet» en *La Prensa Gráfica*, 8/12/2021.

recibió en 2021 más de 6.000 denuncias por delitos informáticos, la mayoría por hurto por medios informáticos y robo de identidad.

Este experimento no sería posible en un país donde no gobernara un creyente. En noviembre, un documentalista inglés me entrevistó en San Salvador. Le dije que lo ideal para experimentar con bitcoin sería un lugar como Suecia o Finlandia, un lugar que de hecho pueda costearse algo como esto. Me respondió que esto nunca habría sido posible en un país como esos, que se necesitaba un *strongman*, un hombre fuerte, para hacer que un país cambiara su sistema monetario tan drásticamente. Yo pensé: *touché*. Con reglas democráticas normales, esto sería imposible.

Debe ser muy interesante ver los eventos desde afuera, venir de visita, hacer cálculos cuando alguien más paga la cuenta y tu país no es la pelotita que da vueltas en la ruleta. Por ahora es una cuestión de fe. Quizá mi país sí llegue a ser la Florencia del Renacimiento 2.0 o Singapur o Suiza. Y quizá mi inversión, valorada en 46 dólares mientras termino de escribir esto, me haga millonario algún día. Tal vez en 10 años, como dice la publicidad. ☒

Ecuador Debate

Abril de 2022

Quito

Nº 115

MEMORIA DE LAS REVISTAS POLÍTICO-CULTURALES

PRESENTACIÓN. COYUNTURA: «¿Crisis institucional?»: tres avatares donde lo mismo siempre vuelve, **Fernando Bustamante**. Conflictividad socio-política: Noviembre 2021-Febrero 2022. TEMA CENTRAL: La *Nariz del Diablo* o cómo olfatear el cambio de época, **Julio Echeverría**. *Caracola*: repliegue y apuesta por lo público, **Mónica Mancero Acosta**. Una ruptura tierna e insolente: el movimiento tzántzico y la revista *Pucuna*, **Susana Freire García**. *Nueva*: Itinerarios de un proyecto progresista, **María José Garrido**. Cohesión y heterogeneidad social en el cono sur de América (1870-1930). Una aproximación desde las publicaciones periódicas, **Ricardo González Leandri**, **Silvia Finocchio** y **Armando Minguzzi**. La revista *Cultura* del Banco Central del Ecuador, **Irving Iván Zapater**. DEBATE AGRARIO: Desafíos para la transformación de los sistemas productivos agrarios, **Rubén Flores Agreda**. ANÁLISIS: Un tema incómodo para las Ciencias Sociales: la popularidad de pensadores conservadores en círculos progresistas de América Latina, **H.C.F. Mansilla**. La reforma en el mercado de valores (II), **Luis Rosero M.** RESEÑAS.

Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular. Redacción: Diego de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Apartado aéreo 17-15-173-B, Quito, Ecuador; Tel.: 2522763. Correo electrónico: <caaporg.ec@uiio.satnet.net>.

Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional?

Ricardo Sáenz de Tejada

Tras la «primavera» ciudadana de 2015, que llevó a la cárcel a figuras de primer orden de la política guatemalteca, y la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se restauró en el país el régimen de impunidad. A ello se suma la deriva autoritaria del gobierno actual, presidido por Alejandro Giammattei. Pero pese a las dificultades, el movimiento social, con un fuerte peso de los pueblos indígenas, busca trazar otro rumbo mediante una Asamblea Constituyente plurinacional.

El deterioro de la situación política y el cierre de espacios democráticos se han acelerado en Guatemala. Tras la toma de posesión del presidente Alejandro Giammattei en enero de 2020, uno a uno han ido cayendo los últimos bastiones de la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho.

Este proceso incluyó la integración de una Corte de Constitucionalidad favorable a los intereses de la coalición gobernante, la desarticulación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la confirmación de Consuelo Porras –señalada por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir y socavar repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos– al

Ricardo Sáenz de Tejada: es un antropólogo social y politólogo guatemalteco. Es profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Palabras claves: autoritarismo, corrupción, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Alejandro Giammattei, Guatemala.

frente de la Fiscalía General, el desmantelamiento de las entidades públicas creadas para dar seguimiento a los acuerdos de paz de 1996 y, recientemente, la imposición fraudulenta de un rector en la única entidad de educación pública superior del país, la Universidad de San Carlos. En esta estrategia ha jugado un papel central la prolongación de mandato ilegal de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, elegidas en 2014 y que debieron entregar su cargo hace tres años.

El deterioro de la institucionalidad democrática se ha traducido en la criminalización de opositores, desde ex-fiscales de la FECI hasta periodistas, pasando por estudiantes, líderes sociales y autoridades indígenas; incluso algunos de ellos han tenido que salir al exilio. El sometimiento del sistema de justicia también ha dado lugar al retorno a la «cultura de impunidad» que posibilitó la generalización de la corrupción en el sector público y el retroceso en indicadores de seguridad.

Para comprender cómo se ha llegado a este estado de cosas, se considera pertinente hacer un recorrido por la última década de la historia política de Guatemala, que vivió la primavera de la movilización social en 2015 y asiste hoy al establecimiento de un régimen autoritario que aparenta mantener la legalidad.

La cooptación del Estado

En las elecciones de 2011 ganó la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina. El ex-militar tuvo a su cargo operaciones contrainsurgentes en localidades en las que se cometieron actos de genocidio contra el pueblo Ixil a principios de la década de 1980. Posteriormente, ocupó posiciones en la inteligencia militar hasta alcanzar la Dirección de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993). Durante el autogolpe de Estado intentado por Serrano en 1993, Pérez desempeñó un papel clave para lograr una salida constitucional a la crisis y entró en contacto con los principales grupos económicos del país. Como militar «institucionalista», fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996.

En 2003, con el Partido Patriota (PP) recién fundado, formó parte de la coalición que llevó a la Presidencia a Oscar Berger. Durante los primeros meses del gobierno de Berger, sirvió como comisionado de seguridad. Participó como candidato presidencial en las elecciones de 2007, llevando como compañero de fórmula a Ricardo Castillo Sinibaldi, un connotado y reconocido empresario, pero perdió en segunda vuelta con Álvaro Colom.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CICIG, desde 2007 Pérez Molina y los más reconocidos líderes del PP organizaron un sistema de financiamiento para enriquecerse y pagar la campaña de 2011. Canales de radio y

televisión, firmas constructoras y otros grupos empresariales hicieron aportes entre 2007 y 2011 que después fueron recompensados con la adjudicación de contratos y obra pública. Estos recursos facilitaron la llegada a la Presidencia de Pérez Molina en 2012. Por primera vez desde la democratización, un militar retirado resultaba elegido presidente de la República. Una vez en el Ejecutivo, los funcionarios de Pérez Molina se distribuyeron en una suerte de «cotos de corrupción». Los ministros de Gobernación, Comunicaciones, Energía y Minas y Salud, así como la vicepresidenta, convirtieron la institucionalidad pública en una maquinaria organizada de corrupción en la que se cobraban sobornos y comisiones para asignar obra pública, se sobrevaluaban las compras del Estado, se intercambiaban plazas en la administración gubernamental a cambio de favores políticos, se aprobaban de manera anómala licencias mineras y, en general, se saqueó de manera sistemática el presupuesto nacional. Para lograr el apoyo del Legislativo, en el que el PP no tenía mayoría, no se ahorraron intercambios de favores económicos y políticos de todo tipo para alcanzar los votos necesarios para aprobar leyes de interés para el partido de gobierno, incluido el pago sistemático de sobornos financiados por una empresa de telecomunicaciones.

En ese marco, se negoció con el principal partido de oposición en el Parlamento, Libertad Democrática Renovada (LÍDER), la elección de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en 2014. Como en su momento lo explicó la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti, se trató del «pacto de la cama»: en una habitación de hotel, los líderes de los partidos acordaron la integración de las altas cortes cuyos miembros siguen ocupando de manera anómala sus cargos hasta hoy.

La primavera de 2015 y el momento reformista

Los líderes del PP, encabezados por Pérez Molina, habían logrado hacerse con la Presidencia, subordinaron al organismo legislativo y controlaban parcialmente el organismo judicial. La cooptación del Estado era una realidad. Sin embargo, la presencia en Guatemala de la CICIG podía ser un obstáculo para los planes de este grupo. Aprobada por el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 e instalada en Guatemala en 2008, la CICIG había logrado cambios institucionales para favorecer la investigación criminal, formado equipos de investigadores y fiscales en el Ministerio Público e investigado algunos casos relativamente importantes. Pérez Molina optó por crear una comisión para evaluar el trabajo de la CICIG y evaluar la prórroga de su mandato, aunque había adelantado que no consideraba necesaria su continuidad en Guatemala.

En ese contexto, el 16 de abril de 2015, el comisionado de la CICIG Iván Velásquez y la jefa del Ministerio Público dieron a conocer la existencia de

una estructura de defraudación en las aduanas que tenía relación con altos funcionarios del Poder Ejecutivo. El caso sacudió a la opinión pública por sus ramificaciones, y ese mismo día grupos de manifestantes se reunieron en una esquina de la Casa Presidencial para expresar su protesta. El 25 de abril de 2015, decenas de miles de guatemaltecos se reunieron en la plaza central para exigir justicia frente a la impunidad y la corrupción.

Se desarrolló así un proceso de fortalecimiento recíproco. La protesta y el apoyo ciudadano posibilitaron que las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público se ampliaran y que los fiscales y jueces pudieran actuar con autonomía. A su vez, los nuevos casos denunciados alimentaron la protesta e indignación ciudadana, que se fueron expandiendo al resto del país. La vicepresidenta Roxana Baldetti renunció a su cargo y fue detenida para ser sometida a un proceso judicial.

Para entonces, una buena parte del gabinete había renunciado y era evidente que en el centro de la red de corrupción estaba el mismo presidente. En agosto se convocó a un paro nacional al que el sector privado se vio obligado a sumarse, y el 2 de septiembre Pérez Molina renunció a la Presidencia y fue también detenido. Los avances en las investigaciones y casos, con la renuncia y captura de buena parte del gabinete y de otros funcionarios involucrados en casos de corrupción, habían logrado en apariencia interrumpir –al menos temporalmente, como sabemos hoy– la cooptación y captura del Estado.

La movilización ciudadana dio lugar a la irrupción de liderazgos jóvenes y al surgimiento de decenas de colectivos y organizaciones que discutían y proponían acciones para transformar el país. Sin embargo, el proceso electoral estaba en marcha, y las candidaturas que a principios de 2015 encabezaban las encuestas, Manuel Baldizón de LÍDER y Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fueron desplazadas por Jimmy Morales, un comediante de televisión postulado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido que contaba con el apoyo de redes de militares retirados y, como se supo después, con el financiamiento no declarado de las elites empresariales.

Morales posicionó su candidatura con la consigna «Ni corrupto ni ladrón», por demás oportuna en esta coyuntura. Entre sus primeras acciones al frente del gobierno estuvo la renovación del mandato de la CICIG por cuatro años, en lugar de dos como se venía haciendo, como muestra de su compromiso contra la impunidad. Se abrió entonces un periodo reformista,

El 25 de abril de 2015, decenas de miles de guatemaltecos se reunieron en la plaza central para exigir justicia frente a la impunidad y la corrupción

y en el Congreso se aprobaron varias leyes dirigidas a enfrentar la corrupción, lo que incluyó más rigor en el control del financiamiento ilícito en la ley electoral y de partidos políticos, así como cambios en los procesos de compras y contrataciones.

Las reformas legales tenían un límite en la Constitución, por lo que se retomó una discusión planteada desde los acuerdos de paz, las reformas constitucionales circunscritas al sector justicia. Desde un inicio las elites políticas y empresariales conservadoras se opusieron a estos cambios, que les harían perder influencia sobre el sistema de justicia. El reconocimiento del derecho indígena fue utilizado como excusa para bloquear el proceso y acusar de injerencia a la CICIG, que apoyaba estas discusiones.

La batalla contra la CICIG

Mientras que en el primer semestre de 2015 las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público afectaron estructuras de corrupción anidadas en el gobierno que eran dirigidas por políticos y funcionarios, las siguientes pesquisas, resultado de las ramificaciones de los casos, fueron encontrando sistemáticamente la participación de grupos empresariales en estas estructuras. Los casos judiciales «Construcción y corrupción» y «Cooptación del Estado» dejaron al descubierto la participación de constructoras, bancos, entidades financieras y otras empresas en lo que se empezó a caracterizar como redes políticas y económicas ilícitas (RPEI). Estas investigaciones provocaron realineamientos en torno del apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Una de las investigaciones sobre el pago de sobornos en el caso «Construcción y corrupción» llevó al allanamiento de una entidad civil conservadora y proempresarial, y entre la documentación incautada se encontró una operación de recaudación y movilización de recursos no declarados de los principales grupos empresariales del país en beneficio del partido del presidente Morales durante la campaña de 2015. El testimonio de una persona involucrada, ligada directamente a uno de los grupos empresariales globalizados, confirmó el financiamiento ilícito. La CICIG había llegado al «núcleo oligárquico de la clase dominante».

La reacción no se hizo esperar. Aprovechando el miedo provocado en el presidente por la participación de miembros de su familia en un caso de corrupción, los grupos afectados por la lucha contra la impunidad articularon una coalición *sui generis* en contra de la CICIG. Funcionarios y ex-funcionarios, personas acusadas de corrupción, militares en situación de retiro, empresarios de diversos niveles, grupos criminales propiamente dichos y

algunos medios de comunicación desencadenaron una campaña de ataques y desprestigio contra la Comisión.

Los grupos empresariales financiaron oficinas de *lobby* en Estados Unidos que, en el marco de la nueva coyuntura marcada por el gobierno de Donald Trump, acusaron a la CICIG de ser un instrumento del presidente ruso Vladimir Putin para perseguir a supuestos opositores en Guatemala. La política exterior de Guatemala se concentró en atacar la lucha contra la corrupción y terminar con el mandato de la Comisión.

La situación llegó a tal extremo que frente a la sede de la CICIG se posicionó una caravana de vehículos militares artillados, se declaró al comisionado Iván Velásquez *persona non grata* y se ordenó su salida del país. Aunque la expulsión del jurista colombiano fue impedida por la Corte de Constitucionalidad, tras un viaje de trabajo se le impidió regresar a Guatemala.

La coalición proimpunidad fracasó en adelantar el fin del mandato de la CICIG, pero sí logró limitar las investigaciones, y los magistrados nombrados en el «pacto de la cama» de 2014 empezaron a bloquear los procesos judiciales. En septiembre de 2019 terminó el mandato de la CICIG, que logró identificar y procesar más de 60 estructuras criminales y llevar a tribunales a altos funcionarios, empresarios y políticos, lo que contribuyó a fortalecer el Ministerio Público y, sobre todo, a mostrar que los poderosos podían ser investigados y juzgados.

Morales finalizó su mandato el 14 de enero de 2020, y en medio de protestas y bajo una lluvia de huevos lanzada por manifestantes, fue juramentado esa misma noche como diputado al Parlamento Centroamericano que, prestándose a otorgarle inmunidad parlamentaria, realizó una sesión extraordinaria en un hotel capitalino. El legado de su presidencia fue liderar una coalición mafiosa para preservar los privilegios y la impunidad, y abortar el proceso de reformas iniciado en 2015.

En septiembre de 2019 terminó el mandato de la CICIG, que logró identificar y procesar más de 60 estructuras criminales

La contraofensiva conservadora

Una vez retirada la CICIG, la coalición proimpunidad tuvo vía libre no solo para detener los avances alcanzados en los años anteriores, sino además para tomar el pleno control del sistema de justicia y utilizarlo para perseguir a sus opositores. En esto ha jugado un papel clave el presidente Giammattei.

Giammattei fue candidato presidencial en cuatro oportunidades por diferentes partidos políticos. Su experiencia más destacada como funcionario fue la de director de presidios durante el gobierno de Berger (2004-2008).

Mientras era responsable de las prisiones del país, se realizó la operación Pavo Real, en la cual, con el pretexto de retomar el control de la granja penal de Pavón, se realizaron ejecuciones extrajudiciales. El ahora presidente fue investigado y procesado por estos hechos y resultó absuelto.

La fuerza que lo postuló a la Presidencia, Vamos, es un partido de reciente creación, y en la primera vuelta obtuvo 15% de los votos, en una elección en la que no pudieron participar las candidatas con mayor intención de voto: Zury Ríos –hija del dictador genocida Efraín Ríos Montt– y Thelma Aldana –ex-fiscal general y candidata del partido progresista Semilla–. Giammattei no fue la primera opción electoral para 85% de las personas que votaron, pero en segunda vuelta logró imponerse a Sandra Torres, postulada nuevamente por la UNE, que obtuvo 25% en la primera vuelta.

A pesar de tener un bloque parlamentario minoritario, el partido de Giammattei logró construir una coalición legislativa –sobre la base de prebendas de diversa naturaleza– que le ha permitido mantener la Presidencia del Congreso y aprobar leyes de su interés. Con esa mayoría logró también integrar una Corte de Constitucionalidad favorable a los intereses de la coalición gubernamental y, apoyado por el Ministerio Público y las altas cortes, intensificó la persecución contra los opositores.

Tras meses de hostigamiento, la fiscal general Consuelo Porras destituyó en julio de 2021 al jefe de la FECL, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que abandonar el país. Este fue el banderazo de salida para iniciar una cacería de jueces y fiscales independientes y ex-funcionarios de la CICIG, que fueron acusados de manera espuria. La mayoría de ellos logró salir del país, aunque al momento de escribir este artículo la ex-fiscal de la FECL Virginia Laparra llevaba más de 100 días en prisión bajo acusaciones falsas.

Periodistas, defensores del territorio, líderes indígenas, estudiantes y activistas han sido objeto de criminalización y judicialización. Como se indicó al principio, las cortes fueron elegidas en 2014 y a pesar de que su mandato finalizó hace más de 30 meses, han continuado en sus cargos, siendo parte central de esta ofensiva. El Congreso, dominado por una coalición alineada con el Ejecutivo, ha aprobado leyes que restringen los derechos, como las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, que establecen controles y limitaciones sobre este tipo de entidades y abren la posibilidad de cancelación de su personería. Con la misma intención se aprobó y posteriormente se «archivó» la Ley de la Familia, que buscaba restringir los derechos de las mujeres y penalizar el aborto bajo cualquier causal. Por otro lado, se han aprobado préstamos y ajustes al presupuesto con fines opacos y que, de acuerdo con especialistas, constituyen «bolsones de corrupción» para el enriquecimiento de diputados y funcionarios y el

financiamiento de la campaña electoral de 2023. Las elites empresariales participan activamente en esta coalición, en la que conviven con políticos corruptos y estructuras criminales. Han optado por entregar el país a estas redes ilícitas antes que perder privilegios, aunque desde el empresariado se han levantado algunas voces críticas.

El discurso que esta coalición ha enarbolado para tratar de legitimarse ha sido en primer lugar el de la religiosidad: apela a un cristianismo ultra-conservador que enfrenta la «ideología globalista» y «de género» y busca imponer la heteronormalidad. A esto se suma un discurso anticomunista fuera de tiempo, pero que les permite descalificar a los opositores, rechazar cualquier reforma social y despertar fantasmas de la Guerra Fría. El mismo presidente se ha referido a sus críticos como «chairos», un término coloquial de origen mexicano con el que busca caricaturizar y ridiculizar las distintas tradiciones de izquierda y progresistas. El tercer elemento de este bricolaje ideológico es un «antiimperialismo oportunista»: cada vez que la comunidad internacional denuncia la persecución de personas, la violación de derechos humanos y la corrupción, se rechaza la «intervención extranjera» y se apela al nacionalismo.

Ahora bien, todo este proceso de captura de la institucionalidad democrática y de anulación del Estado de derecho se ha realizado aparentando el cumplimiento de la ley. De acuerdo con fuentes diplomáticas en Guatemala, esto ha hecho muy complejo señalar las reincidencias autoritarias del régimen e incluso se trata de un proceso muy difícil de explicar en el exterior. Pese a esto, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno estadounidense han hecho declaraciones públicas sobre el deterioro del sistema de justicia.

La prioridad de los últimos tres gobiernos ha sido preservar la impunidad y la corrupción. Esto se ha traducido en el deterioro de las condiciones de vida de los guatemaltecos, lo que se agudizó con la pandemia de covid-19 y las consecuencias de la invasión de Ucrania.

En informes de instituciones nacionales e internacionales se ha podido constatar la caída del ingreso real y la pérdida de empleos producida por la pandemia, a lo que se suma la incapacidad del modelo económico de generar empleo decente para los 200.000 jóvenes que anualmente ingresan en el mercado laboral. También se pueden constatar retrocesos graves en materia de educación, sobre todo en el sector público, asociadas a más de dos años de actividades escolares irregulares en el marco de una baja cobertura de vacunación contra la pandemia y el aumento de la desnutrición crónica y

La prioridad de los últimos tres gobiernos ha sido preservar la impunidad y la corrupción

aguda. Este nuevo autoritarismo ha fracasado en todas las materias, excepto en el mantenimiento de la corrupción y la impunidad.

Resistencias y construcción de alternativas

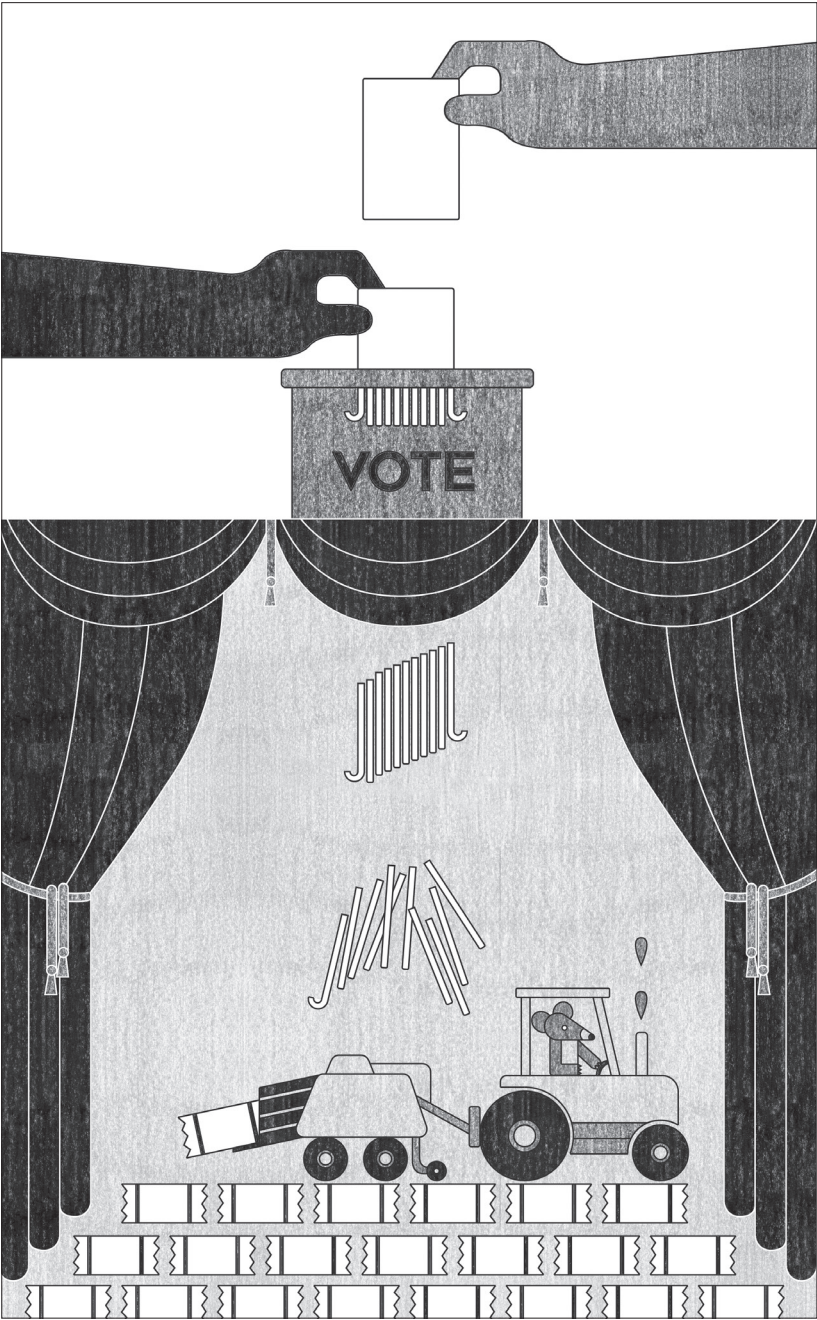
Frente a esta ofensiva autoritaria se han posicionado distintas respuestas políticas y organizativas. Algunas, como las reivindicaciones de autonomía y la práctica de autogobierno, preceden en mucho a la crisis de 2015, mientras que otras responden a nuevos clivajes, como la política de lo sexual. Desde la sociedad se trata de enfrentar, en condiciones muy difíciles, la cooptación del Estado.

En primer lugar, hoy en Guatemala se vive un clima permanente de protesta social. Aunque no hay informes académicos actualizados, los reportes de la Policía Nacional Civil y las notas de prensa muestran que todos los días hay acciones de protesta local en distintas regiones del país: por agua, servicios públicos, conflictos laborales, de defensa del territorio, por la carencia de infraestructura y por muchas razones y demandas. Estas acciones de protesta incluyen a organizaciones y movimientos sociales tradicionales como el campesino y sindical, pero en general se trata de acciones espontáneas, de carácter local, que aún no alcanzan niveles de articulación y coordinación pero que confirman un cansancio ciudadano.

En segundo lugar, se asiste a cambios en el liderazgo social en los repertorios de protesta y acción política. En esta década, el centro de gravedad de la oposición civil se ha movido hacia los pueblos indígenas y sus autoridades, las organizaciones feministas, las organizaciones de la diversidad y de disidencias sexuales y los colectivos de jóvenes.

Una muestra de este cambio fue el paro plurinacional convocado en julio de 2021 por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Parlamento Xinca. A diferencia de 2015, la propuesta no fue del centro a la periferia, sino que se inició y lideró desde las localidades indígenas.

Sobre el protagonismo nacional de las autoridades ancestrales, debe subrayarse que estas siempre han poseído liderazgo y protagonismo en sus localidades. De hecho, puede afirmarse que en muchos municipios del país existen desde hace siglos formas de autogobierno indígena que han podido persistir pese a los cambios de régimen político, la guerra civil y el hecho de que los gobiernos municipales oficiales en municipios mayoritariamente indígenas están en manos de indígenas. Pese a ello, las autoridades indígenas han preservado reconocimiento, prestigio y la capacidad de ejercer formas de gobierno más apegadas a la población, teniendo en muchos casos incluso



© Nueva Sociedad / Jazmin Villagrán 2022

un reconocimiento constitucional. El cambio ocurrido en la última década tuvo que ver con el hecho de que esta autoridad pasó a un plano nacional. Por ejemplo, fue notable el papel de las autoridades indígenas en la defensa de la CICIG. De manera particular, las autoridades de los 48 cantones, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Parlamento Xinka se han convertido en referentes nacionales e internacionales.

Otro proceso que ha influido en esta nueva dinámica ha sido la reconstitución de autoridades y gobiernos indígenas en muchas localidades del país. Frente a los proyectos extractivistas, se constituyeron y reconstituyeron organizaciones de autogobierno indígena como el Gobierno Plurinacional del Norte de Huehuetenango o el Parlamento Xinka, que mostraron cómo el recurso a las formas tradicionales de organización, a la construcción de redes comunitarias y a formas de democracia directa tenía resultados efectivos tanto en la defensa de los territorios como en el desarrollo de una mejor gobernabilidad local. Estos procesos han sido seguidos por otras comunidades, y en casos como los Copones en Ixcán, algunos municipios de Sololá, Chiquimula y otros departamentos, se asiste a la (re)construcción de formas de autogobierno indígena.

El reconocimiento nacional de las autoridades ancestrales y los procesos de reconstitución de formas de autogobierno han influido también en la construcción de alianzas y coordinaciones entre las autoridades y pueblos. Hoy existen redes nacionales de autoridades que tienen capacidad de organizar y realizar paros plurinacionales, pero también de articular posicionamientos y propuestas, probablemente con mayor legitimidad que la que puedan tener otros actores políticos.

El liderazgo nacional de las autoridades y organizaciones indígenas ha sido acompañado por una propuesta política de transformación del Estado actual en uno de carácter plurinacional. Desde los acuerdos de paz de 1996 quedó demostrado que los límites para el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos estaban en la Constitución, y cada intento de reforma constitucional que incluyera el tema indígena despertaba una movilización de las fuerzas conservadoras que se oponen a cualquier tipo de reconocimiento. Ante esto, la estrategia de los pueblos y las organizaciones se ha dirigido no a una reforma, sino a la lucha por una nueva Constitución.

El Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), que se forjó como resultado de las luchas comunitarias contra distintas formas de extractivismo en el occidente del país, dio a conocer en 2014 el documento «Proyecto político. Un nuevo estado para Guatemala: Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los Pueblos Indígenas». Allí se adelantaba la necesidad de una nueva Constitución política que adoptara una «forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional» y que incluyera

el «derecho de los pueblos a representarse, autogobernarse y elegir a sus autoridades en las esferas y órganos públicos sujetos a la elección general. La democracia plurinacional se sustentará en la existencia y la libertad de los pueblos indígenas a constituir gobiernos autónomos complementarios de la unidad nacional y a tomar decisiones en todos los asuntos que les incumban para decidir su propio desarrollo».

De manera paralela, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) dio a conocer en 2016 su propuesta «Guatemala: vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional», en la que además de algunos contenidos de su propuesta de organización estatal, traza la ruta de una «Asamblea Constituyente originaria, popular y plurinacional».

La propuesta de Codeca fue asumida por su brazo político-electoral, el Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), que en las elecciones presidenciales de 2019 alcanzó más de 10% de los votos y se ubicó en el cuarto lugar (quedó en primer lugar en los departamentos de Sololá, Totonicapán y Chimaltenango, mayoritariamente indígenas). La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional fue central en esa campaña. Los procesos organizativos y políticos de los pueblos indígenas han asumido el debate y el desarrollo conceptual del Estado Plurinacional, que hoy es parte del discurso y la propuesta de estos grupos.

Otros movimientos que se han fortalecido son el de mujeres y diversidades y disidencias sexuales. Este fenómeno encuadra en lo que en América Latina se ha venido configurando como nuevos alineamientos en torno de la política sexual. La contienda por la educación sexual, el derecho al cuerpo y el derecho a decidir han sido asumidos no solo por el movimiento tradicional de mujeres, sino también por estos nuevos movimientos, que se han hecho presentes en los distintos momentos de protesta y que jugaron un papel central en el rechazo a la Ley de la Familia. Lideresas feministas como Sandra Morán trabajan en la articulación de estos movimientos con la discusión del cambio constitucional, que se expresa en lo que denominan Poder Constituyente de las mujeres, así como en el posicionamiento de una agenda progresista en el campo de las sexualidades que tiene un amplio respaldo entre la juventud.

Los avances recientes en la captura del Estado por parte de la coalición de redes de corrupción que gobierna Guatemala han producido el exilio y encarcelamiento de operadores de justicia, líderes de organizaciones de sociedad civil, defensores del territorio y jóvenes. Esto ha creado un clima de desánimo frente a la idea de que, tras la «primavera de 2015», los sectores

La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional fue central en la campaña de 2019

progresistas solo han acumulado derrotas, y muchos creen que se está o se estará peor que antes de la llegada de la CICIG. Estas perspectivas pierden de vista los cambios que ocurren en distintas zonas del país, así como el protagonismo de nuevos movimientos. La propuesta de Asamblea Constituyente es debatida de manera amplia en diferentes sectores sociales.

En esta iniciativa se plantea la posibilidad de construir un Estado Plurinacional que termine con el actual Estado monoétnico, capturado y fallido, que no ha podido resolver los problemas que arrastra desde hace tiempo la sociedad guatemalteca. La propuesta se sostiene en redes de autoridades y organizaciones indígenas que han logrado tejer alianzas con otros actores urbanos y que eventualmente podrían impulsar este proceso de cambio.

El siguiente episodio de esta contienda serán las elecciones de 2023, cuando la coalición de redes políticas y económicas ilícitas buscará consolidar su posición recurriendo incluso a la proscripción de partidos y candidatos opositores. Mientras tanto, las fuerzas progresistas y populares tienen el desafío de articular un proyecto político viable, que pueda construir una mayoría política y electoral. ☐

El Cotidiano

REVISTA DE LA REALIDAD MEXICANA

Mayo-Junio de 2022

Ciudad de México

Nº 233

CULTURA DE LA VIOLENCIA Y EDUCACIÓN

Estudio comparativo: violencias en universidades públicas mexicanas, **Rosalía Carrillo Meráz** y **Rafael Montesinos Carrera**. Violencias en contra del estudiantado de posgrado en México, **Florencia Peña Saint Martín** y **Scherezada López Marroquín**. Las modalidades de la protesta contra la violencia por razones de género en México. Una lectura sintomática, **Griselda Gutiérrez Castañeda**. Un reto en común: combatir la violencia de género en las universidades mexicanas, **Luis Alberto Monroy Lara**. Narrativa sobre la violencia de género en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), **Priscila Amayrani L. Ugalde**. Educación, desigualdad sociodigital y pandemia. Un recuento latinoamericano, **Abel Pérez Ruiz**. Ciberacoso en estudiantes. Entre amenazas e intimidación y ataques en los videojuegos, **Luz María Velásquez Reyes**. La educación artística: una alternativa para llegar a la inclusión educativa, **Samantha Mesina Velasco**.

<www.elcotidianoenlinea.com.mx>

El Cotidiano es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Edif. K-011, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México. Tel. 53 18 93 36. Apartado Postal 32-031, Ciudad de México, 06031. Correo electrónico: <cotid@correo.azc.uam.mx>.

Elites alteradas en Costa Rica

Álvaro Murillo

Tiempos inciertos viven las elites económicas del estable país centroamericano por las tendencias de la economía, la erosión de los instrumentos políticos y una relación amor/odio con el Estado y con su sistema institucional. El encarcelamiento de un magnate local de la construcción mostró los límites de los ricos, en un contexto de transformación de la burguesía local.

Carlos Cerdas Araya era hasta junio de 2021 un empresario fácil de describir como un caso de milagro económico en Costa Rica: un chico cualquiera de familia sencilla en la conservadora ciudad de Cartago, que de grande llegó a ocupar un lugar en el olimpo de las personas más ricas de Centroamérica.

Era el hijo de un hombre trabajador que alquilaba maquinaria al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los años 70, momento de fuerte desarrollo de infraestructura pública, pero aprovechó el recambio generacional para dar un salto sobre otras compañías y dominar en el nuevo siglo el sector de la construcción y mantenimiento de obra pública vial. La marca MECO empezó a verse como

Álvaro Murillo: es un periodista costarricense con 20 años de experiencia en la cobertura política de su país y sus ribetes económicos, sociales o ambientales. Trabaja en *Semanario Universidad* y escribe para *El País* y la agencia Reuters, además de compartir espacios en la radio y proyectos especiales.

Palabras claves: corrupción, elite, Estado, América Central, Costa Rica.

Nota: una versión previa de este artículo se publicó como parte del proyecto «Elites sin destino», apoyado por el Programa de Medios y Comunicación para América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

un sello de poder en las vallas de las construcciones hasta que el país se le hizo pequeño. Entonces cruzó a Nicaragua, donde hizo buenas migas con el régimen autoritario de Daniel Ortega, y a Panamá, donde la ampliación del canal interoceánico permitió a la compañía graduarse en el escenario internacional. Después llegó a Colombia y a El Salvador, en la segunda década del siglo, hasta ganarse el título de empresa transnacional, quizás la única nacida en un país donde las familias ricas nunca han llegado ni cerca de los grupos poderosos de otros países centroamericanos.

La riqueza le había dado ascenso social, cómo no. Se movía en un avión propio que guardaba en el mismo hangar del propietario de la principal televisora del país y llevaba o traía a algunos de los políticos más pintados de Costa Rica. Cerdas era un nuevo millonario con el mérito de haber convertido su herencia en una fortuna incluso superior a las de algunas de las familias poderosas de toda la vida, incluidas las de la oligarquía cafetalera del siglo XIX, que han ido moviendo sus capitales por distintas industrias de la economía según qué momentos de la historia; o mayor que la riqueza acumulada por la clase profesional que mejor vive con los altos volúmenes de inversión extranjera ingresada en las últimas tres décadas. Carlos Cerdas era una variante más, pero integrante al fin de la elite económica de Costa Rica.

Por eso era difícil digerir la escena de verlo esposado y rumbo a la cárcel.

Carlos Cerdas, con su empresa MECO, es uno de los principales sospechosos de la red de sobornos que por muchos años ha cubierto el sector de las concesiones de obras viales públicas, de acuerdo con una investigación policial desarrollada desde 2019. Horas y horas de conversaciones telefónicas escuchadas por los agentes judiciales dieron elementos para que toda Costa Rica tuviera en sus manos informaciones que parecen antagónicas: (a) el empresario manejaba a toda la burocracia que requería para controlar el sector y ser, por ejemplo, el principal proveedor del Estado en 2018; y (b) el sistema de control funcionó, al menos al principio, atendiendo las denuncias en instancias judiciales y permitiendo desarrollar investigaciones que derivaron en la detención y en prisión preventiva por nueve meses para él y para otra rica empresaria de la construcción llamada Mélida Solís. Un año después del escándalo, ambos cumplían «casa por cárcel» en sus mansiones, mientras las investigaciones avanzaban o no.

Que se determinen los delitos y los paguen es otro tema, poco probable por los antecedentes del sistema judicial, pero el mensaje con el «caso Cochinilla» (llamado así por la plaga que se pega a las plantas hasta secarlas) parecía ser que los millonarios en Costa Rica tienen límites o al menos obstáculos. Cerdas pagó sin problemas una primera fianza de cinco millones de dólares y luego otro juez ordenó prisión sin derecho a fianza para evitar que el acusado alterara la continuidad de las investigaciones. Tuvo que

compartir celda con personas que pudieron ser sus compañeros de clase en la escuela, pero con las que jamás se habría cruzado en los holgados años recientes, cuando él era ya un magnate que solo se rozaba con los herederos de las burguesías tradicionales o con los nuevos ricos desarrollados alrededor de las inversiones extranjeras que han reconvertido la economía de Costa Rica en este siglo.

El caso policial trajo sorpresa en los círculos empresariales. Cerdas no era el mejor representante de las elites dominantes en Costa Rica, pero se había colado en sus círculos y había ido ganando influencia política. No habla sus idiomas ni tiene lazos genealógicos con ellos, pero sí comparte sus espacios y la multiplicación de los dólares le había acreditado licencia de hombre poderoso. Finalmente aparecía como miembro y donante de una organización llamada Horizonte Positivo que los propietarios más fuertes crearon en 2012 para incidir en la política, ahora reconfigurada, de maneras distintas a las tradicionales de las cámaras empresariales y sectoriales donde abundan los gerentes.

Al mismo tiempo, sin embargo, Cerdas era visto como un advenedizo en las elites y, como tal, un sujeto vulnerable. Sus viajes entre Colombia y Estados Unidos en avión privado, sus amistades y sus espacios de ocio no bastaban. Las operaciones multimillonarias dependían de un solo cliente, el Estado, y eso tampoco está bien visto entre hombres de negocios. En algunos sectores poderosos quedó la sensación de que la caída por vías judiciales era algo fácil de pronosticar, una sorpresa a medias a pesar del andamiaje legal que rodeaba a MECO. «Eso a los Arias no les hubiera pasado», dijo un banquero entrevistado para este artículo, en alusión a la familia de Óscar Arias, dos veces presidente de Costa Rica y representante de los herederos del desarrollo cafetalero del siglo XIX.

Previsible o no, la detonación del caso Cochinilla era una sacudida más fuerte en las cimas del pequeño y tranquilo país centroamericano. Un recordatorio de que existen los impulsos de corrupción, pero también la institucionalidad pública con sus trillos y sus trampas, con ejércitos de bufetes privados que un día inciden en la construcción de las leyes y al día siguiente trabajan para sortearlas, con sus sesgos que hacen que las cárceles se llenen de gente pobre y que numerosos casos grandes se diluyan antes de llegar a sentencia. Pero el Poder Judicial de Costa Rica conserva una fuerza suficiente para llegar de repente y destapar una red corrupta de muchos años. De poco le sirvió a MECO tener entre sus principales abogados al esposo de la fiscal general, Emilia Navas, quien semanas después dejó su cargo ante cuestionamientos de la Corte Suprema por el manejo de este caso.

La detonación del caso Cochinilla era una sacudida más fuerte en las cimas del pequeño y tranquilo país centroamericano

Nuevas y viejas elites

Las investigaciones siguen su curso, pero el expediente Cochinilla frenó las operaciones de MECO y puso cuesta arriba la promesa del gobierno de Carlos Alvarado de entregar en su despedida, en 2022, un país distinto en términos de infraestructura pública, al tiempo que dejó un sabor agri dulce en los grupos de mayor poder económico. Por un lado, ser multimillonario no es una condición que exima a alguien de ir a la cárcel, y por otro hay una institucionalidad que funciona y eso repercute en la estabilidad política que, a su vez, es indispensable (aunque no suficiente) para atraer inversiones extranjeras y para la solvencia del clima de negocios. Es parte del Estado que ha alimentado las cuentas de un sector, que ha repartido la riqueza de manera menos ingrata que en otros países de América Latina y que, al mismo tiempo, es visto como una carga o un estorbo para el segmento que tiene todos los recursos para comprar en el mercado la seguridad, los servicios de salud y la educación de sus hijos dentro o fuera del país.

El momento tampoco es neutro. El remezón del caso Cochinilla llegó ocho meses antes de unas elecciones nacionales que se presentaban como las más inciertas en la historia, con una inédita fragmentación partidaria producto de la erosión de las dos agrupaciones que se repartieron el poder durante la segunda mitad del siglo xx, e incluso del entonces partido gobernante, el Partido Acción Ciudadana (PAC), que sufría de una alta impopularidad. La reconfiguración partidaria se aceleró en las últimas dos décadas sin un rumbo claro, y las elites se han quedado sin instrumentos certeros para ejercer influencia a la vieja usanza, describe el politólogo y sociólogo Constantino Urcuyo, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-diputado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

A Cerdas se lo identificaba más cercano a algunos dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN), bandera protagonista de los tiempos del

Empezó entonces el arribo fuerte de transnacionales que aprovecharon el capital educativo costarricense para producir bajo modelos ventajosos

bipartidismo desde la Revolución de 1948, un movimiento armado que abrió las puertas del poder a nuevas clases más allá de los círculos dominantes de principios del siglo xx mediante el impulso al protagonismo del Estado en la economía. Elevó así a una nueva capa económica de la mano de diversas industrias, en el sector secundario, por lo menos hasta la década de 1980, antes de la llegada de los años de crisis y de los nuevos modelos financieros que empujaron a Costa Rica a abrirse al comercio exterior y a la inversión extranjera. Empezó entonces el arribo fuerte

de transnacionales que aprovecharon el capital educativo costarricense para producir bajo modelos ventajosos y forjar una economía paralela que ahora

tiene un crecimiento de dos dígitos, incluso en tiempos de pandemia; son las empresas de servicios o de manufactura sofisticada establecidas mayoritariamente en zonas exentas de impuestos y que han dado origen a la nueva generación de adinerados.

Es el grupo que puede tener ingresos por más de 400.000 dólares anuales (frente al promedio de 12.000 per cápita) por ser alto cargo de una transnacional o en honorarios de servicios legales, el pequeño conjunto que no alcanza a representar ni al 5% más rico de la población. No son propietarios, sino apoderados en una suerte de economía de enclave que hace a algunos estudiosos sentirse tentados a compararlos con los jefes de la United Fruit Company, la compañía estadounidense que operaba a sus anchas un siglo atrás.

Uno de los principales rostros políticos lo define así:

Ahora hay una elite profesional muy bien remunerada que vive fuera de la normalidad. Viven en residenciales muy exclusivos, tienen a sus hijos en colegios muy específicos o estudiando afuera. No utilizan los servicios de salud del país y para vacacionar van a Europa en el verano y a esquiar a Colorado en enero, o van a su segunda casa en los condominios junto a las de los extranjeros. Quizás son producto de un Estado social, pero hoy más bien lo ven como un estorbo. Y si ven condiciones que amenazan sus privilegios, no tienen problema en irse del país, porque seguro tienen sus ahorros en el extranjero o su casa en EEUU.

A diferencia de Cerdas y otros fuertes empresarios que han construido o engordado su fortuna vendiendo servicios o bienes al Estado, o que se han financiado con el poderoso sistema de banca estatal, este grupo más globalizado tiene poco o nulo interés en la política, una muestra más de la distancia con lo público a grado supremo. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de la UCR, señala que estos grupos ya no aspiran a educarse en Europa o a hablar francés, como décadas atrás, sino que persiguen vivir como los millonarios famosos de EEUU. Están desdibujados en términos culturales y no ven problema en concentrar poder en exceso o en destruir la base institucional y afectar al sistema político. Al fin y al cabo, entre los retratos de beneméritos o benefactores no están sus abuelos.

En las galerías históricas tampoco están los ancestros de Cerdas y otros empresarios que también se han enriquecido alimentando el aparato público, que consume en volúmenes proporcionales a los de los países ricos. Estos, sin embargo, deben saber transar con quien gobierna sin importar qué bandera traiga, como demostró el dueño de MECO al impulsar con éxito

sus negocios, mientras pudo, a través de gobiernos de tres partidos políticos distintos y de ayuntamientos de cualquier color.

Lo suyo está lejos de ser exclusivo. Lo muestra también la empresa Purdy Motor, concesionaria en Costa Rica de los vehículos marca Toyota, que en este país abundan en todas las instituciones públicas, aunque logró colocarse también en México y Texas en años recientes y aspiraba a vender 70.000 unidades nuevas antes de la pandemia. El nombre de Javier Quirós, presidente corporativo e hijo del fundador de la compañía, ha sido uno de los nombres más frecuentes en los registros de financiamiento de campañas electorales, junto con otros nombres que han sabido manejarse con bajo perfil.

Quirós, sin embargo, es solo un ejemplo de los adinerados que supieron aprovechar la herencia y una relación vigorosa con el Estado además de realizar operaciones exitosas en la oferta privada, y que se encuentran apegados al entorno local y, por tanto, con interés en participar en las tareas de influencia, a veces incluso de manera directa. Forma parte de los asociados a Horizonte Positivo, la organización que hasta 2018 era presidida por un rico empresario llamado André Garnier, quien tomó un cargo en el gobierno como enlace con el sector privado, merced a una relación de confianza especial con el presidente Alvarado. Este hombre pequeño y callado, de muy poca presencia pública, ponía en pausa el manejo de sus negocios en el sector de zonas francas (donde están instaladas las compañías más dinámicas) y en el turismo, para ocupar funciones que solo permitieron conectar a la administración con una parte del empresariado. Las cámaras empresariales estaban entre las voces críticas del gobierno de Alvarado, por sus intentos de elevar la recaudación de impuestos para estabilizar las finanzas, aunque en la realidad las propuestas de progresividad fiscal fueron limitadas.

De formas sutiles pero profundas, como dice un ex-presidente, Horizonte Positivo tuvo entrada directa a las discusiones de gobierno cuando las asociaciones patronales mostraban más recelo con las políticas del presidente Alvarado en el manejo de la crisis fiscal y de las contingencias de la pandemia. El grupo firmó alianzas formales con la administración pero también se constituyó en una fuerza de apoyo informal para el gobierno, duramente criticado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), en el marco de conflictos internos derivados de la fragmentación de poder y del debilitamiento de liderazgos, que también alcanzan a la clase empresarial.

Formas como la asociación Horizonte Positivo han sido esfuerzos por encontrar nuevos caminos hacia el seno del Estado, pese al alto riesgo de hacer apuestas electorales por la creciente volatilidad partidaria. «Esto ocurre porque la clase empresarial se quedó sin los canales que tenía. Perdieron la hegemonía y la capacidad de dirigir en un sentido u otro. Se diversificaron

y tienen intereses dispersos o en algunos casos hasta contradictorios. Por supuesto que tienen poder de influencia aún, pero es más limitado y complicado», describía en 2021 el profesor Urcuyo.

«Horizonte Positivo ha sido un dulce salvavidas para el gobierno de Alvarado», decía entonces un abogado y estudioso de los movimientos de poder. «Ha sido el patrón de un presidente que se ha comportado como gerente», ilustraba un reconocido dirigente del movimiento sindical, desde donde se achaca al mandatario haber impulsado soluciones fiscales con medidas que eximen de esfuerzo a la clase empresarial y que lo cargan sobre las espaldas de las clases profesionales del sector público o privado y los trabajadores de estratos medios.

Un gran desacomodo político

En agosto de 2021, a seis meses de las elecciones, la lista de posibles candidatos presidenciales para los comicios de 2022 llegaba a 20 y pocos analistas se atreven a descartar nombres de antemano. Las elecciones de 2018 habían llevado a segunda ronda a un candidato presidencial que venía de ser el único diputado de su partido en la Asamblea Legislativa ante otros 56 legisladores. La discusión electoral, salpicada de sermón religioso, elevó al predicador evangélico Fabricio Alvarado mientras los empresarios, sorprendidos, contemplaban su contienda contra Carlos Alvarado, el representante del PAC, la fuerza política que irrumpió 20 años atrás al romper el bipartidismo y que había llegado al poder en 2014 con Luis Guillermo Solís en un gobierno que acabaría siendo muy impopular.

En 2018, el PLN (de raíces socialdemócratas) y el PUSC (conservador) quedaron ambos, por primera vez, fuera de una segunda ronda presidencial, solo dos décadas después de una época en la que ni siquiera se abrían esos balotajes porque alguno de los dos seguro triunfaba en primera vuelta. De poco sirvieron a esas agrupaciones tradicionales las candidaturas del millonario empresario agrícola e inmobiliario Antonio Álvarez Desanti y del abogado Rodolfo Piza Rocafort, nombres que les eran familiares a las elites económicas. No, el electorado ahora toma decisiones misteriosas y el apoyo de los adinerados a uno u otro ya no garantiza nada.

La zozobra venía desde cuatro años atrás, en 2014, cuando Luis Guillermo Solís se hizo con la Presidencia del país y puso el clavo final al bipartidismo. El candidato de centroizquierda del PAC salió beneficiado de

En agosto de 2021, a seis meses de las elecciones, la lista de posibles candidatos presidenciales para los comicios de 2022 llegaba a 20

los movimientos para frenar al izquierdista José María Villalta por parte de poderosos empresarios, quienes crearon un frente de acción contra la candidatura que comparaban con el chavismo en Venezuela o el castrismo en Cuba. El PUSC estaba en ruinas por los resabios de escándalos de corrupción y el PLN llevaba como candidato al alcalde de San José, Johnny Araya, pero sin el apoyo de algunas fuerzas tradicionales y poderosas, como el mismo ex-presidente Óscar Arias. Ganó entonces el «mal menor», como le decían empresarios de ese grupo llamado Grupo Alianza Costa Rica, creado al calor de la campaña para impulsar acciones en empresas que permitieran descarrilar a Villalta, aunque al comenzar la nueva administración empezaron a notar que no conocían a los nuevos gobernantes. Y para el gobierno eso también era un problema, reconoce Solís.

Lo cuenta ahora como ex-presidente y profesor invitado en la Florida International University:

Hubo que construir canales sobre la marcha. Nos dimos a la tarea de entender quiénes eran los interlocutores del sector privado. Quiénes eran los propietarios de los medios de producción, quiénes los gerentes de las corporaciones transnacionales que son cada vez más relevantes, quiénes los sectores tradicionales como el agro, los exportadores, los especuladores del sector financiero... Porque cada uno quería operar sobre el gobierno con racionalidades diferentes y demandas distintas, a veces contradictorias. La UCCAEP era una sombrilla, es cierto, no se había quebrado todavía, pero habría sido un gran error pensar que era la única voz de los grupos económicos.

Después sí se quebraron, observa Solís.

Su gobierno llevaba el emblema del «cambio» y eso no agradaba del todo a las elites. ¿Cambio para qué? ¿Cambio hacia dónde? La vicepresidenta Ana Helena Chacón, procedente del PUSC, servía como enlace con los empresarios, pero la incertidumbre era el pan de cada día, más aún cuando Solís hablaba sin tapujos de la necesidad de fortalecer el rol del sector público y recuperar el Estado Social de Derecho de los años 70, un Estado benefactor y potente. En su despacho destacaba la foto de José Figueres Ferrer, el líder de la Revolución de 1948 que gobernó después tres veces y que impulsó la incursión de intelectuales, profesionales y burócratas en procura de límites a la clase dominante de primera mitad del siglo xx.

El hijo de ese Figueres, el también ex-presidente José María Figueres (1994-1998), llegaría en 2022 a competir en las elecciones intentando tomar la bandera del modelo diseñado por su padre, aunque ahora con un PLN desgastado y sin el apoyo de sectores empresariales que sí lo acompañaban en

años anteriores. La incertidumbre del proceso electoral hacía una excepción con él, al colocarlo como una de las opciones seguras para la segunda ronda que parecía inevitable. La sorpresa fue el contendor, un *outsider* llamado Rodrigo Chaves de discurso populista y de mano dura, que prometía acabar con la política tradicional.

El balotaje fue un duelo entre el añoso y cuestionado PLN contra el nuevo experimento de Chaves, con su partido cero kilómetro, de ideología indeterminada y con el respaldo de una famosa periodista recordada por sus editoriales contra la clase política y contra «los poderosos».

«Aquí ricos no hay», decía en campaña el candidato Chaves, economista de discurso «antisistema» a pesar de sus 25 años como burócrata del Banco Mundial. Lo cierto es que sí había, aunque su propuesta llevaba base popular y atacaba a «los grupos que aquí siempre se han beneficiado», sin llegar a precisar nombres. Fue una fórmula exitosa que le dio el triunfo en la segunda ronda de abril de 2022, en un resultado que él definió como «una revolución pacífica», aunque pronto empezó a formar gobierno y designó como ministros a varios nombres provenientes de las cámaras patronales.

«Hay una luna de miel», dijo en voz baja una de sus dirigentes después de un anuncio del presidente Chaves sobre un contrato de un puerto en el Pacífico, como pedían las organizaciones empresariales. En sus primeros 50 días de gobierno recibió numerosos mensajes de apoyo desde las patronales que tiempo atrás respaldaban al PLN y que ahora parecen haber comprendido que Chaves, carente de una base propia, las necesita a ellas tanto como ellas a él. Ellas también están en su proceso de reconstitución después de dos gobiernos actuando como opositoras.

Aún pronto para sacar conclusiones con el terreno movedizo, al entrar a la segunda mitad de 2022 parecía claro que el recambio provocaba un nuevo acomodo del poder económico con el poder político, ya no con los presidentes «elegidos en el Club Unión», como decía el caudillo Figueres en referencia al club de negocios fundado en San José en 1925 junto al Banco Central.

El historiador David Díaz aclara que esa afirmación no era del todo cierta. Explica que desde el siglo XIX hubo parámetros que limitaban en parte la acción de las oligarquías y hacían de las elecciones verdaderas competencias entre grupos políticos, con necesidad de cabalgatas y recorridos por los pueblos para ganar su voto. Sí es cierto que la revolución a mitad del siglo XX acabó de abrir las puertas al poder a nuevos estratos sociales con

**La sorpresa fue
un *outsider*
llamado Rodrigo
Chaves de discurso
populista y de mano
dura, que prometía
acabar con la
política tradicional**

**Ese Estado fuerte
también aloja su
propia elite económica,
la de una capa
de funcionarios que
reciben salarios
mensuales superiores
a los 10.000 dólares**

la visión de aplanar los privilegios heredados de las familias cafetaleras. «Se reforzó la visión del Estado y creció con cierto acuerdo con las elites, hasta la década de los 80», explica Díaz, en alusión al momento de crisis en que entran en escena las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la globalización, los minerales para la atracción de inversiones extranjeras y para el surgimiento de la elite local que las maneja.

Ese Estado fuerte también aloja su propia elite económica, la de una capa de funcionarios que reciben salarios mensuales superiores a los 10.000 dólares, en ocasiones el doble del salario del presidente, en instituciones públicas descentralizadas, gracias a los beneficios de los regímenes salariales del sector público forjados entre los gremios y los gobiernos de turno durante décadas. Estos sistemas salariales han llegado a ser un factor de la desigualdad social que creció en Costa Rica en los últimos 15 años, en contra de la tendencia general de América Latina. En proporción, en una muestra de 100 habitantes, los 10 de mayores ingresos reciben 25 veces lo que reciben los 10 de menores recursos, según el Informe Estado de la Nación del año 2019, pero las acciones de los sindicatos estatales han obstaculizado el ajuste hacia la baja de esos beneficios salariales, incluidos los de los funcionarios de sueldos millonarios situados en posiciones con capacidad de influencia sobre las acciones del gobierno central o de la Asamblea Legislativa.

«Hay que andar con cuidado»

Los llaman «el olimpo del sector público» con el mismo encono con el que desde otros flancos llaman «los nuevos ricos» a quienes manejan localmente la representación de las multinacionales y a empresarios como Carlos Cerdas, que han encontrado entre la burocracia el camino (riesgoso) para ascender alimentándose de los contratos con el Estado sin importar la bandera del gobierno. Se suman familias que mantienen control sobre una parte de la banca privada y el sector financiero, además de las inversiones de este siglo de centroamericanos poderosos en el sector comercial que buscan la relativa estabilidad costarricense; pero la categoría «familia rica» suele reservarse para los herederos de las fortunas de antaño. Es decir, las fortunas nacidas en los albores del negocio cafetalero o desarrolladas en el sector industrial durante la segunda mitad del siglo xx, aunque posteriormente hayan migrado a negocios más lucrativos como los financieros, el inmobiliario o el turismo, por el que se conoce a Costa Rica en el mundo.

También hay otros sectores con poder económico que se mueven distinto: las cooperativas financieras y empresarios de origen chino o sus descendientes, con un perfil muy bajo pero fuertes operaciones en comercio y en hoteles de paso, además de grupos que manejan altas sumas en dólares procedentes del narcotráfico internacional y tratan de legitimarlas en distintas actividades, pues hay una tendencia hacia la formación de bandas locales que trabajan de manera directa con los mercados de la droga desde este país ubicado en una posición estratégica en mitad del continente.

Muchos de estos flujos de capitales se mezclan eventualmente y es cada vez más difícil señalar con nombres y apellidos a los miembros de las elites económicas del país, asegura Fernando Naranjo, un veterano empresario, ex-canciller de la República y ex-gerente del estatal Banco Nacional de Costa Rica, la entidad bancaria que domina el mercado local y que suele estar dirigida por nombres conocidos procedentes de grupos de poder económico. «Hace 50 años era fácil saber quiénes eran los ricos, al menos lo que aquí consideramos tales, porque en otros países de Centroamérica las proporciones son muy diferentes y, por tanto, el poder en la política también. La UCCAEP de aquí está muy lejos de tener el dominio que tiene la CACIF [Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras] en Guatemala», comenta. El profesor Díaz suma a las diferencias:

La institucionalidad del Estado no ha dejado a las elites actuar como las mexicanas o guatemaltecas, pero cuando pueden sí lo hacen para no pagar impuestos, modificar legislación laboral (...) En otros países ha sido fácil porque ante una reacción popular se reprimía con el ejército, casi siempre muy ligado a la política y a las familias ricas, pero en Costa Rica hay una democracia institucionalizada desde 1870. Eso contribuía a limitar la ambición de las elites. Hoy, el fenómeno es con elites que, aunque más diversificadas, tienen menos contrapesos o frenos y han logrado transformar algunos instrumentos jurídicos. Por eso se habla de la «centroamericanización», al tratar de forzar la institucionalidad y abrir espacios para elementos autoritarios, aunque no tenemos acá un ejército.

Lo hacen con un poder remanente o renovado, según qué sector, aunque de manera menos coordinada. Desde los años 80 se debilitó el músculo de los grupos tradicionales, ingresaron nuevas inversiones cuyo propietario puede que jamás haya venido a Costa Rica y los canales políticos usuales desaparecieron conforme los partidos perdieron su base social, señala el economista y catedrático universitario Leonardo Garnier, ex-ministro de

Planificación y de Educación en gobiernos del PLN. El Estado, sin embargo, sigue siendo determinante. «Los grupos de elite y en general la derecha necesitan al Estado aunque les molesta el intervencionismo. Solo toleran la socialdemocracia si es la manera de evitar el comunismo. Es claro que las elites, en plural, siempre van a intentar controlar el Estado, aunque aquí a grandes rasgos responde a sectores medios y población en general. Es un pulso permanente».

A veces la institucionalidad se activa y cambia el curso de las pretensiones de las elites. Pasó con el Poder Judicial al levantar el velo, de momento, sobre la corrupción en el multimillonario sector de la construcción, dominado por menos de cuatro empresas, con especial poder de Carlos Cerdas y Mélida Solís. Las repercusiones son fuertes y variadas, y seguro se mira también como una vuelta de rosca más a la tendencia de alteración del poder económico. Podría acelerarse la movilidad de capitales y abrir nuevas oportunidades a otros sectores; saben que los espacios vacíos no existen en la política ni en los negocios, menos en los tiempos revolucionados actuales.

«Hay que andar con más cuidado; se mueve el piso», dijo un joven empresario de la construcción que solía tomar jugosos subcontratos de MECO y que ha preferido el perfil bajo a pesar de su apellido con reconocimiento social. Una luz de advertencia más se ha encendido, aunque traten de disimularla en los círculos donde se mueven las familias de los adinerados, que suelen coincidir en espacios de ocio o educación, porque independientemente del origen de su riqueza piden a su chofer llevar al hijo adolescente para que pase la tarde dentro de los muros del Country Club, en el adinerado cantón Escazú, en el costado oeste de la capital. Tampoco es requisito que los retratos de los antepasados estén en la galería de los ex-directivos del club, eso ha ido cambiando.

Se juntan en los colegios elitistas, sean el tradicional Lincoln o algunas opciones creadas en las últimas décadas para esa capa social, ahora que sus hijos no asisten más a la educación pública. Quizás se crucen en oficinas o comercios cerca de una zona llamada Lindora, donde está la única tienda de vehículos deportivos Maserati, o tal vez lo hagan esquiando en Aspen o en su paseo anual por Europa. Con menos suerte, comparten médicos en el sistema privado, que ha crecido con fuerza en este siglo, o en las páginas de esquelas, cada vez más escasas y exclusivas, de los periódicos impresos. ☐

Honduras: entre la democratización y el poder familiar

Leonardo Aguilar / Jennifer Ávila

Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de la historia de Honduras impulsada por LIBRE, el partido fundado por su esposo, José Manuel «Mel» Zelaya, después del golpe de Estado que lo derrocó en 2009. Castro ha prometido un nuevo futuro para el país luego de 12 años de autocracia del Partido Nacional. Sin embargo, en estos primeros meses de mandato el pasado ha regresado en forma de una amnistía que, para muchos, rima con impunidad.

Hace 12 años que José Manuel «Mel» Zelaya no es presidente de Honduras, pero la Casa Presidencial se ha convertido de nuevo en su despacho. Desde que su esposa y actual presidenta del país, Xiomara Castro, lo nombrara asesor, decenas de personas cruzan a diario las puertas del Palacio José Cecilio del Valle con la esperanza de que Mel escuche sus quejas y demandas o, incluso, que firme una carta de recomendación para obtener trabajo en el gobierno. El viernes

Leonardo Aguilar: es abogado y periodista. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.

Jennifer Ávila: es periodista, artista y documentalista. Es cofundadora y actual directora de la revista digital *Contra Corriente*.

Palabras claves: democracia, golpe de Estado, Xiomara Castro, Manuel Zelaya, Honduras.

Nota: una versión más extensa de este artículo fue publicada en la revista *Contra Corriente*, 27/5/2022, con el título «El retorno del clan Zelaya», <<https://contracorriente.red/2022/05/27/el-retorno-del-clan-zelaya/>>.

18 de marzo pasado, sin embargo, su agenda se centró en la visita de un solo hombre. Hasta bien entrada la noche, con conferencia y comida incluida, recibió con honores –aunque sin la compañía de la presidenta– a Enrique Flores Lanza, su ex-ministro de la Presidencia, que retornaba al país después de una década de exilio en Nicaragua.

El 27 de enero, antes de la juramentación de Xiomara Castro como la primera presidenta constitucional de Honduras, en un acto simbólico, a Mel le fue devuelta la banda presidencial que le habían arrebatado en 2009, cuando fue derrocado mediante un golpe de Estado y acabó subido a un avión vestido con pijamas a punta de fusil. Ahora Libertad y Refundación (LIBRE), el partido que fundó y dirige, además de llevar a su esposa hasta la Presidencia, controla el Congreso. Castro llegó al poder prometiendo un futuro para Honduras alejado de los 12 años de «narco-Estado» y autocracia del Partido Nacional, encarnados en el ex-presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Las medidas tomadas en estos cuatro meses de gobierno, sin embargo, apuntan más a un reciclaje del pasado. Además de la influencia de Mel, varios miembros de la familia Zelaya ocupan importantes puestos en el gobierno. La amnistía aprobada solo una semana después de la investidura de Castro como presidenta ha asegurado las condiciones para que retornen los viejos aliados del clan con cuentas pendientes con la justicia.

Flores Lanza fue acusado el 30 de julio de 2009 –un mes después del golpe– de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude, en un requerimiento fiscal en el que figuraban junto a él el ex-presidente Zelaya (beneficiado por una amnistía tras los Acuerdos de Cartagena que en 2010 le permitieron retornar al país), Jacobo Lagos, en ese entonces ministro jefe del staff presidencial y gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, y Rebeca Santos, la entonces ministra de Finanzas –los casos de estos dos últimos fueron sobreseídos por la justicia hondureña–. Lanza también fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575.000 dólares en aquel momento).

La imagen de un hombre sacando una carretilla llena de dinero del banco el 26 de junio de 2009 quedó grabada en el imaginario de la población. Cinco años después, Flores Lanza confesó que esos 10 millones, que él pidió para la Guardia de Honor presidencial, en realidad fueron utilizados para sufragar la apuesta de la «Cuarta Urna»: Zelaya y los suyos pretendían preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna en las elecciones que se celebrarían seis meses después. De fondo, buscaban una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial.

La consulta fue declarada ilegal por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, satanizada por los medios de comunicación masiva, la Iglesia y el Alto Mando del Ejército, y desembocó en el golpe de Estado.

Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), una organización referente en la lucha por los derechos humanos y que por ley tiene una palabra determinante en el proceso de amnistía, afirma que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron la revisión legal de la propuesta de ley que finalmente fue aprobada. Consultada sobre el involucramiento de Lanza como beneficiario de la amnistía, Oliva asegura que Lanza es un defensor de los derechos humanos, un argumento que el abogado del ex-funcionario presentó al Cofadeh y que la organización extendió en un documento. «Él representaba a grupos campesinos, defendió al periodista que fue amenazado en los 80, a Renato, y no le cobró ni un cinco», dice en alusión a las amenazas sufridas, en aquel entonces, por el presentador de televisión Renato Álvarez.

El otrora hombre fuerte de Zelaya no tiene cargo oficial, pero la influencia del asesor y esposo de la presidenta y varios de sus antiguos funcionarios en el gobierno es abrumadora. Rixi Moncada, quien fuera ministra de Trabajo y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es ahora la ministra de Finanzas; Rebeca Santos, ex-ministra de Finanzas, ahora es la presidenta del Banco Central de Honduras; Edmundo Orellana, ex-ministro de Defensa, ahora es ministro de Transparencia. La lista sigue: Edwin Araque, ex-presidente del Banco Central de Honduras, ahora es presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Enrique Reina, ex-asesor presidencial de Mel, es ahora el canciller.

En su regreso al poder, los Zelaya parecieran querer culminar una tarea inconclusa. En su discurso de cierre de campaña, Xiomara Castro dijo que su mandato sería una continuación del «Poder Ciudadano», el proyecto de su marido interrumpido por el golpe. La ahora presidenta también prometió una Asamblea Constituyente. En sus apariciones públicas, Mel sigue hablando de la «Cuarta Urna» como el pretexto utilizado por militares, empresarios y políticos golpistas para romper un país «pletórico de esperanza». «Hoy vuelve uno de los dirigentes del gobierno Liberal del Poder Ciudadano, coordinador de la Cuarta Urna, que desempeñó un papel fundamental en la transformación de Honduras», dijo el 18 de marzo sobre Flores Lanza, que a diferencia del pasado, cuando oficiaba con el rostro bien afeitado y trajes a la medida, regresó con barba y vestido con una guayabera blanca.

Xiomara Castro dijo que su mandato sería una continuación del «Poder Ciudadano», el proyecto de su marido interrumpido por el golpe

Los Zelaya y los militares

Cuando Castro había cumplido apenas dos semanas en el cargo como la primera mujer en la Presidencia de Honduras, envió a una reunión con el Estado Mayor del Ejército a tres de sus parientes más cercanos. No se reunió ella, la primera mujer comandante general, con las principales cabezas de su Ejército. En su lugar llegaron tres emisarios que comparten el mismo nombre y apellido. A la cabeza oficial de la comitiva iba José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, seguido de José Manuel Zelaya Castro, asesor, y por último, José Manuel «Mel» Zelaya, reconvertido ahora en asesor presidencial.

Que tres «José manueles» aparezcan en un acto oficial del nuevo gobierno pasó de ser una aparente casualidad a ser la norma

Que tres «José manueles» aparezcan en un acto oficial del nuevo gobierno hondureño pasó de ser una aparente casualidad a ser la norma del poder repartido en una familia: Mel es asesor presidencial; su hijo mayor, Héctor Manuel, es secretario privado de su madre la presidenta; Xiomara Hortensia, la segunda hija, es diputada en el Congreso Nacional; el hijo menor, José Manuel, asegura ser asesor *ad honorem*. Del lado de Mel está su hermano, Carlos Zelaya, quien es el secretario del Congreso Nacional, y el hijo de este, José Manuel Zelaya, quien dirige el Ministerio de Defensa. Esto parece nepotismo, pero legalmente no lo es. Estos nombramientos y la participación política de quienes obtuvieron el cargo de diputados están en el marco de la ley hondureña. Y ante las críticas hay una justificación: es importante mantener a la gente de confianza en el círculo de poder más cercano a la Presidencia para evitar otro golpe de Estado.

«Nunca es malo alguien de confianza ahí donde están las armas, y en las Fuerzas Armadas tienen las armas y las estrategias vitales, entonces ahí se necesita alguien de extrema confianza del presidente de la República», justifica Edmundo Orellana, quien era ministro de Defensa cuando Zelaya sufrió el golpe. Públicamente también lo dijo el hermano del ex-presidente, Carlos Zelaya, cuando fue consultado por el nuevo cargo de su hijo: «Pusimos a alguien de confianza en ese puesto porque desde Defensa se fraguan golpes de Estado». El ministro de Defensa es un abogado de 33 años y esta es su primera experiencia como funcionario público. Muchos activistas del partido LIBRE lo reconocen como un cuadro técnico más que político. «Técnico, sobre todo en el área de las comunicaciones», dijo para describirlo Marco Ramiro Lobo, alcalde de Catacamas, el pueblo de los Zelaya.

El recuerdo del golpe es una herida abierta. Para Arístides Mejía, el antecesor de Orellana, el derrocamiento de Zelaya fue «el golpe de los idiotas porque ahí el país se hundió completamente y eso se hubiera podido

solucionar institucionalmente». «Ninguna institución estaba controlada por el presidente. Al contrario del presidente anterior que las controlaba todas, [Zelaya] no controlaba la Corte, no controlaba las Fuerzas Armadas, no controlaba la Fiscalía, no controlaba el Tribunal Electoral, ni el Tribunal de Cuentas ni el Partido. Entonces ¿cuál era el miedo?», dice Mejía. El general Romeo Vásquez Velásquez, el líder militar que ejecutó el golpe, ahora es un militar en retiro. Intentó, sin éxito, convertirse en político. Escribió un libro con su versión de la historia. Sentado en un sillón en la sala de su casa, en las afueras de Tegucigalpa, suelta una risita cuando mira la foto de Mel en la que está junto a su hijo y su sobrino reunido con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. «El primer damo, otros dicen el primer caballero y otros dicen que le quitó la Presidencia a la presidenta, que la utiliza nada más de parapeto. Para mí, hay una regla simple de juego de poder: nunca le haga sombra a su líder o a su amo, nunca le haga sombra a su líder superior».

Doce años después del golpe, los Zelaya todavía temen, o quizá se blindan.

Amnistía o «pacto de impunidad»

Cuando estaba en campaña, Xiomara Castro habló de la necesidad de la amnistía, pero no señaló que beneficiaría a los ex-funcionarios del «Poder Ciudadano». La aprobación de la ley ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) la catalogaron como un «pacto de impunidad»¹. En un comunicado conjunto, señalaron:

Si bien no podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009 tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, esto NO indica que si realizaron actos de corrupción o delitos en contra de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad ya que se estaría generando un precedente que podría ser fundamentado a hechos futuros de 2009, beneficiando de esta forma a quienes hoy son responsables de las cuantiosas cifras que en concepto de corrupción el Estado pierde anualmente.

Para Oliva, las investigaciones judiciales contra los ex-funcionarios de Zelaya no tienen valor porque se extendieron en un Poder Judicial plegado a «la dictadura» después del golpe.

1. «Pronunciamiento ‘Pacto de impunidad’», 3/2/2022, disponible en <www.cna.hn/pronunciamiento-pacto-de-impunidad/>.

Pero las críticas también han venido del entorno de los Zelaya. El ahora ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, criticó el decreto de amnistía y llegó a denunciarlo como un nuevo pacto de impunidad. Ahora cree que es injusto criticarlo porque «la ley vino de la sociedad civil» y porque serán los jueces los últimos responsables de a quién le dan la libertad y a quién no.

«Ese decreto fue elaborado por Cofadeh, ese no fue un decreto elaborado por el gobierno, eso debe de estar bien claro. Pero bien, lo importante es que el decreto ha sido cuestionado no en la parte de los delitos políticos. Todos están de acuerdo de que eso es incuestionable», dice ahora Orellana.

La amnistía también ha favorecido a la familia Zelaya Castro. Cuando este decreto apenas llevaba 10 días de vigencia, Marcelo Chimirri Castro, sobrino de la presidenta, solicitó a un Juzgado de Ejecución la extinción de una causa por corrupción en su contra. Chimirri Castro ocupó entre 2006 y 2007 el cargo de subgerente de la estatal Hondutel y su participación, según la Fiscalía, fue clave en una red de tráfico gris (fraude a través de llamadas internacionales) en la institución que permitió que la estatal perdiera el pastel de las llamadas internacionales y la red celular². El acuerdo, según la investigación, también labró el hundimiento de las finanzas de Hondutel.

El 30 de junio de 2009, dos días después del golpe, Chimirri fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho por beneficiar, a cambio de sobornos, a la empresa estadounidense Latin Node. En 2013, un tribunal lo absolvió; sin embargo, después de que el Ministerio Público interpusiera un recurso de casación, Chimirri fue condenado en 2018 a ocho años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Cumplió cuatro años en la cárcel hasta que este año fue liberado gracias al decreto de amnistía.

El expediente del caso de Chimirri Castro en Honduras cuenta con 17 tomos y alrededor de 7.000 folios. La Fiscalía hondureña, además de sus propias pesquisas, contaba con prueba procesal de lo investigado por el Distrito Sur de Florida y diligencias investigativas en colaboración con la Fiscalía de Guatemala. El expediente rebalsa de pruebas, entre ellas los pagos por 30.000 dólares efectuados por Latin Node a una empresa de Chimirri Castro en Honduras momentos previos al acuerdo con Hondutel. También contiene correos electrónicos que hablan de un pacto entre Hondutel y Latin Node, y en los que se vinculan a otras figuras políticas como a Carlos Eduardo Reina, hijo del entonces ministro de Gobernación y muy cercano al ex-presidente Zelaya. Reina incluso ha sido precandidato a la Presidencia por LIBRE. «Diles que Carlos Eduardo trabaja para nosotros», escribió uno

2. «Espionaje, tráfico gris, abusos, traición» en *La Prensa*, 26/1/2008.

de los funcionarios de Latin Node en un correo electrónico a su enlace en Centroamérica para facilitar el diálogo con Chimirri. Otro de los enlaces, según esos correos, era Carlos Zelaya, el hermano de Mel y actual secretario del Congreso Nacional que aprobó la amnistía. Además, en el extenso expediente se muestra una planificación para hacer campaña política a favor del gobierno del «Poder Ciudadano» con la venta de tarjetas para llamadas internacionales con descuento, a beneficio del gobierno de Mel Zelaya.

El 3 de marzo de 2022 se le aplicó a Chimirri la amnistía amplia, absoluta e incondicional. Las pruebas para liberarlo fueron dos: un extracto del informe de la Comisión de la Verdad después del golpe en el que se menciona que los funcionarios allegados a Zelaya fueron perseguidos políticos, y una fotografía en la que aparece junto con el ex-presidente derrocado para demostrar una relación entre ambos.

«La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente por aquellos que apoyaron el golpe de Estado y siempre se postraron ante el fascismo, mientras masacraban y condenaban a patriotas y luchadores, muchos de los cuales entregaron su vida por tener un lugar digno, una patria libre y democrática», dijo la presidenta en su discurso de los primeros 100 días de gobierno, en una cadena de radio y televisión pregrabada. El discurso íntegro luego fue publicado en *Poder Popular*, el nuevo periódico e instrumento de propaganda de su gobierno.

El 18 de marzo, en la fiesta de bienvenida que le organizó Mel a Flores Lanza, este dijo que la amnistía había sido «criminalizada» y que son 7.000 personas judicializadas por protestar contra el golpe las que se beneficiarán. «La amnistía es una corrección para una justicia que en este país no ha funcionado. Esta amnistía permitirá que por fin se les haga justicia a muchos hombres y mujeres que no han podido defenderse del sicariato judicial», dijo.

Pero los que realmente se han beneficiado, como Flores Lanza, regresan con sed de revancha. En una denuncia colectiva, él y otros ex-funcionarios han demandado al Estado de Honduras por las acciones del golpe. Esta fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2021³. Si avanza, quedará en manos de la CIDH emitir un fallo. «Queremos que nos devuelvan lo que nos robaron, que nos devuelvan la verdad, porque con la mentira criminalizaron la cuarta urna», dice Lanza.

«La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente por aquellos que apoyaron el golpe de Estado», dijo la presidenta

3. Informe Nº 382/21 Petición 100-10 Informe de Admisibilidad José Manuel Zelaya Rosales y otros, Honduras, <www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/hoad100-10es.pdf>.

A Lanza le dieron cinco cartas de libertad y la última que recibió fue el 4 de marzo. En ella se lo absuelve de los delitos de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. En el recibimiento de su amigo, Zelaya recordó como anécdota y en tono de burla que a él también lo querían acusar por actos de corrupción, «hasta por el combustible que gastamos en Casa Presidencial. No vaya a ser que ahora me quieran investigar porque le damos comida a la gente aquí donde los recibimos», dijo.

El regreso a la finca

El 23 de abril Mel Zelaya aterrizó en un helicóptero en la pista El Aguacate, a pocas cuerdas de sus propiedades en la comunidad El Espino, en Catacamas, Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras, con una extensión territorial mayor a la de El Salvador. Este departamento colinda con Gracias a Dios y Colón, departamentos eminentemente rurales y localizados en la ruta del narcotráfico y la ganadería extensiva. Las grandes extensiones de tierra se unen con las montañas y la selva en una zona con poca población y varias áreas protegidas que han sido afectadas por la conflictividad que dejan el narco y el abandono estatal.

El motivo de su viaje fue una negociación sumamente delicada. El gobierno de su esposa, a través del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Medina, había prometido a finales de marzo destruir una carretera ilegal que atravesó la Reserva de Biosfera de Río Plátano (una zona declarada Patrimonio de la Humanidad) y benefició a ganaderos e indígenas al dar acceso para mover productos desde Gracias a Dios a Olancho. En la zona, los lugareños aseguran que la obra también

**En Olancho no
hay nadie mejor
para calmar las
aguas revueltas que
Mel, uno de los
señores del pueblo**

benefició a los narcotraficantes y, de hecho, todavía hoy la llaman la «narcocarretera». Esta se concluyó en 2021, durante el último año de Juan Orlando Hernández en el poder, y provocó un escándalo por la magnitud del desastre ambiental que significaba. Sin embargo, esa carretera se comenzó a construir en 2007, cuando Mel Zelaya era presidente⁴.

En Olancho no hay nadie mejor para calmar las aguas revueltas que Mel, uno de los señores del pueblo, miembro de una familia que es respetada casi como la nobleza. En la aldea El Espino, Zelaya actualmente tiene registrados en el sistema de

4. «Descubren misteriosa carretera en la Biosfera de Río Plátano» en *Proceso Digital*, 28/9/2007.

propiedades varios lotes de terreno en la carretera que va hacia la Universidad Agrícola. En 2016, la pareja le regaló a su yerno, el abogado Juan Carlos Melara, un potrero de 13.454,13 metros cuadrados en la misma zona. Melara es el esposo de su hija mayor, la abogada Zoe Zelaya, la única hija sin cargo en instituciones públicas. Melara fue asistente de Zelaya en tiempos del «Poder Ciudadano», pero Mel lo despidió en 2007 para «evitar» el nepotismo⁵.

Cuando era presidente, Zelaya donó uno de sus terrenos en El Espino a la Teletón y en la Universidad Agrícola construyó un edificio para clases. Más tarde, el ex-presidente Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, construyó uno similar. Se erigen ambas torres como la muestra de los dos caciques terratenientes de Olancho y de sus respectivas tradiciones políticas.

Apenas un mes después de la promesa del ministro de Ambiente, Zelaya llegó a negociar con los ganaderos de la Moskitia. Según el acuerdo firmado, a cambio de detener la destrucción de la carretera, los ganaderos de la zona se comprometieron a detener la ganadería extensiva. Pocos días después, un grupo de líderes miskitos llegaron a Tegucigalpa a exigir al gobierno que los tome en cuenta. «Que no sigan hurgando al pueblo miskito», protestó Orlando Calderón de la organización miskita Masta. «El objetivo de la carretera era atravesar el río y llegar por Warunta (Wampusirpi) donde tienen la mayor parte de fincas narcoganaderas. Ahora es difícil si los militares luego forman parte de los invasores, ellos también se dedican a agarrar un pedazo de terreno y forman parte del grupo, allí no hay control».

«Nos alegramos cuando el ministro dijo que la carretera sería destruida y que se iba a hacer para la protección y que los militares iban a evitar las invasiones, pero luego salió la conferencia de Mel con los ganaderos prometiendo que la carretera no será destruida y que será avalado por los ganaderos para que ellos ingresen a sus zonas de trabajo. Los ganaderos son olanchanos la mayoría, muchos son testaferros de personas que están en altas cúpulas políticas», denuncia Calderón. Y no se equivoca. En la Casa de la Cultura de Juticalpa, la cabecera departamental, hay un hombre, pintado de canas, que asegura conocer muy bien la historia de la ciudad y de la familia Zelaya. Su nombre es Darío Euceda Roque, escritor, ex-compañero de colegio del ex-presidente, y formaba parte del equipo que le hacía sus discursos en Casa Presidencial. Euceda Roque asegura haber descubierto que el abolengo de los Zelaya se remonta hasta los tiempos de la Conquista. «Los primeros Zelayas, los hermanos Santiago, Miguel y Joseph, llegaron a México desde España con el conquistador Hernán Cortés. En México hay una ciudad que se llama Celaya, ellos fundaron esa ciudad, la conquistaron con su espada,

5. «Mel Zelaya despide a su hermano y a su yerno» en *La Prensa*, 28/1/2007.

solo que ahí se escribe con c», asegura. Cuando los Zelaya llegaron al departamento de Olancho, según el escritor, les gustó tanto el Valle de Lepaguare de Juticalpa que se lo pidieron al rey de España. «Fue como un premio a su labor conquistadora y el rey se lo dio a título personal. El Valle de Lepaguare aún es de ellos. En el año 1536 les fue concedido ese título que fue firmado por el rey de España. Soy abogado y esos títulos valen». Los Zelaya de Olancho nunca dejaron de ser influyentes. En el siglo XVIII, Olancho era el área ganadera más grande y extensa de Centroamérica. Según Euceda, siempre un Zelaya ha sido gobernador, alcalde o comandante de armas. «Ahora lo ven en este siglo con dos presidentes: Xiomara que es la esposa y Mel».

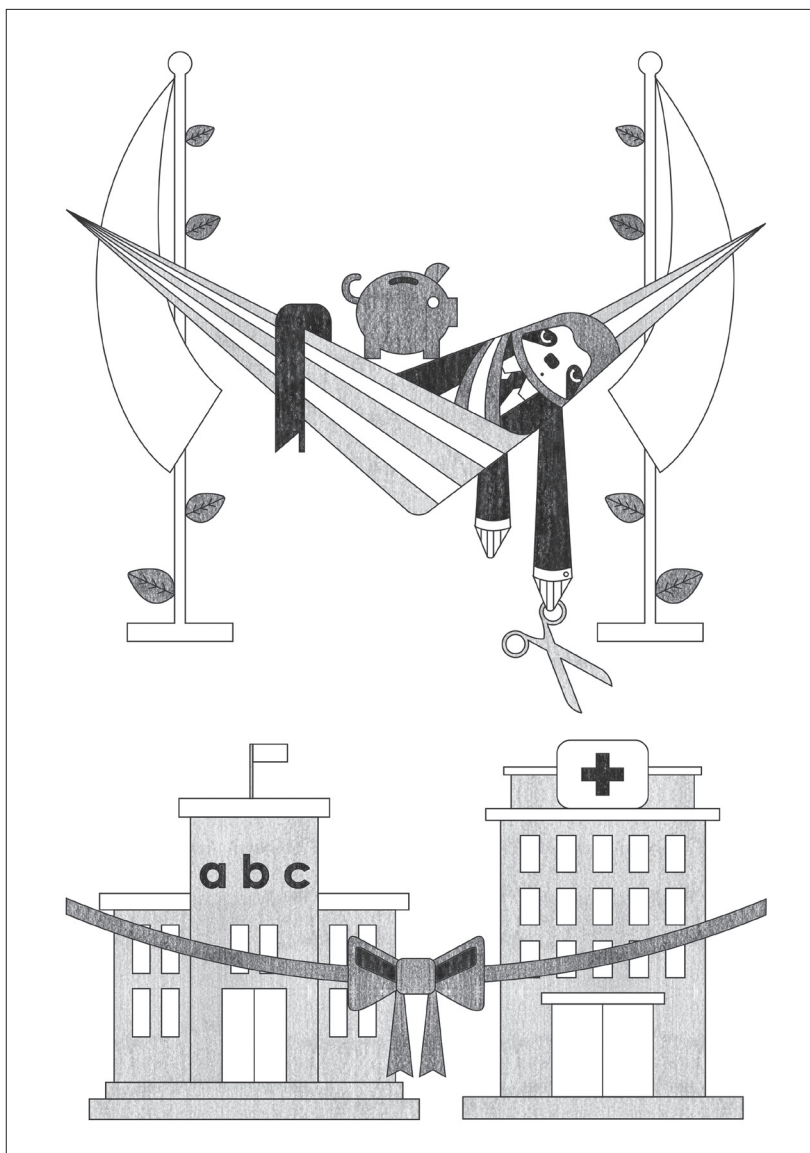
Pero en Olancho no todos aplauden a figuras como Zelaya y Lobo. Sergio Antonio Campos, quien buscó la Alcaldía de Catacamas con un movimiento independiente que él llamó «Espanta ratas», asegura que a los miembros de la familia Zelaya «[l]os han endiosado. Recuerden que antes del golpe de Estado aquí hubo una repartición (*sic*) de dinero con el proyecto de la Cuarta Urna, y creo que esos seguidores que tienen es por el dinero que se les repartieron».

Los que lo tienen todo, generalmente, crean dinastías para preservar lo acumulado. Y en los Zelaya, el éxito político de Mel y la actual irrupción total de su familia en la esfera política se remontan al empujón que alguna vez le dio su padre, el primer José Manuel Zelaya de Catacamas. José Manuel Zelaya padre y Ortensia Rosales procrearon a cuatro hijos varones, el mayor de ellos, el expresidente Mel, seguido de Carlos (actual secretario del Congreso Nacional), Héctor (asesinado de joven) y Marco, quien contrajo matrimonio con una de las hijas del ex-presidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998). Al padre de los Zelaya Rosales, la historia lo perfila como uno de los responsables, junto con un grupo de militares, de «Los Horcones», una de las masacres contra campesinos más recordadas en Honduras. Aunque fue encarcelado a finales de los años 70 por ese hecho, tiempo después fue beneficiado por un indulto.

El vicescanciller de la República, Gerardo Torres, dice que lo de los Horcones «es una cosa con la que ellos han cargado siempre, que el presidente Zelaya en particular ha cargado». No obstante, Torres separa a Mel Zelaya de las acciones de su padre afirmando que en su momento «denunció la base secreta de la Contra nicaragüense en el Aguacate, en Olancho»⁶. Mel aún conserva la propiedad de Los Horcones en Juticalpa y varios lotes en la colonia Castaño de esa misma ciudad, donde él pasó su adolescencia.

Pero los inicios de Mel Zelaya en la política se remontan a los años 80, cuando un dirigente del Partido Liberal «cayó en desgracia» y dejó una plaza vacante. Entonces, Armando Rosales, secretario del Congreso Nacional

6. La Contra fue un grupo armado contra la Revolución Sandinista apoyado por EEUU.



© Nueva Sociedad / Jazmin Villagrán 2022

Jazmin Elena Villagrán Miguel (Guatemala, 1984) es ilustradora y diseñadora gráfica por el Instituto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana. En 2017 publicó el libro infantil *¿Qué está pasando allá arriba?* (Ekaré, Caracas). Sus trabajos se han incluido en el Catálogo Bienal Ilustración Bratislava (2015); Libro Vivo Latinoamérica, Universidad de Palermo (2015); Catálogo Iberoamérica Ilustración, SM (2019); exhibición *The Child Spectator* en la Feria del Libro Infantil de Bolonia (2022). Behance: <https://www.behance.net/jazmin_villagran>.

y pariente cercano de los Zelaya, le hizo una propuesta al padre de Mel. Así lo cuenta Darío Euceda: «Mel, fíjate que hay un espacio político que dejó Benigno. Meté a Melito». El padre de Mel habría respondido «¡Sí, lo meto!». Pero Mel Zelaya necesitaba un espaldarazo para trascender a escala nacional y lo encontró rápidamente en Carlos Orbin Montoya, que era el entonces presidente del Congreso, después de haber sido considerado el ideólogo del movimiento que llevó a la victoria al ex-presidente liberal José Simón Azcona (1986-1990). Mel no olvida aquellas viejas lealtades. En 2006, el favor de antaño fue devuelto a Orbin Montoya cuando se lo designó como representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, luego, como director del Banco Central de Honduras (BCH). Antes del golpe, Orbin Montoya era uno de los coordinadores del proyecto de la «Cuarta Urna». En 2022, a los 76 años, tampoco fue olvidado: Xiomara Castro lo colocó en la gerencia de la estatal Hondutel.

Mel, el astuto

El escritor Darío Euceda afirma que la principal característica de Mel Zelaya en la política es la de ser astuto: «La astucia la aplica bien, olfatea todo», dice.

El escritor Darío Euceda afirma que la principal característica de Mel Zelaya en la política es la de ser astuto

Euceda asegura que vio ese brillo de astucia en el pacto que Zelaya refrendó con un grupo de diputados disidentes de LIBRE luego del zafarrancho que protagonizaron por el control del Congreso Nacional. Mel controla el partido LIBRE, los estatutos lo facultan para, además de ser el representante legal, fungir de coordinador general, presidente de la coordinación nacional e integrante de la comisión política. Todas las decisiones que tome la Coordi-

nación Nacional o la Asamblea Nacional deben pasar por las manos del ex-presidente Zelaya. Desde su inscripción en 2012, LIBRE solo ha tenido un representante legal y un coordinador general. Y lo seguirá siendo al menos hasta 2025. Como los Bukele en El Salvador, los Zelaya también ocupan un espacio central en el partido como fundadores. A Mel lo acompañan la presidenta, su hermano, su sobrino, el ministro de Defensa y otras figuras con cargo en el gobierno. Destacan el ex-alcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunsery (quien también ha sido beneficiado por la amnistía con cuatro cartas de libertad tras acusaciones por corrupción); Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas; el entonces sindicalista y ahora diputado Juan Barahona; el dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional

Agrario Rafael Alegría; el actual presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Edgardo Barahona, y también la congresista Beatriz Valle, actualmente distanciada de Mel Zelaya.

En las últimas elecciones legislativas, Valle y Jorge Cálix, dos líderes indiscutidos del M28, un movimiento impulsado por Mel tras la fundación del partido en 2012 y que forma parte de LIBRE, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Honduras. Pero la crisis por la elección de la junta directiva en el Congreso Nacional hizo que pasaran de ser catalogados como líderes a ser llamados «traidores». Contra lo que podía esperarse, el histórico triunfo de Xiomara Castro y la avalancha de votos de LIBRE en las legislativas no significaron unidad para el partido. Valle considera, ahora, que fueron presas de reacomodos políticos que ya acarreaban relaciones gastadas. Ella, por ejemplo, asegura que su relación con Zelaya se fracturó desde que se postuló como diputada. «Noté que ya casi no me hablaba Mel, me hablaba poco y dije yo, pucha qué raro, pero, igual, imagínese 23 años, ¿qué voy a estar yo desconfiando de Mel?, no estaba pensando nada».

En Honduras, es usual que los líderes del Congreso se conviertan en potables cartas electorales para futuras elecciones presidenciales. O, como mínimo, que obtengan cargos claves de dirección en el Congreso. Cálix y Valle, con sus triunfos, apuntaban hacia ese camino, pero emergieron viejas rencillas y pactos preestablecidos. Y así, mientras Cálix reclamaba el trono del Congreso con apoyo de Valle y otros diputados, la presidenta electa exigía otra ruta, y el respeto de un pacto que ella había hecho con el Partido Salvador de Honduras, que la apoyó en su candidatura. En ese acuerdo, la Presidencia estaba sellada para el diputado Luis Redondo, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y así quedó, al final arreglado por un pacto que firmó Mel Zelaya junto con Jorge Cálix en Casa Presidencial, sin presencia de la presidenta.

Más de 100 días después del cisma en LIBRE, los Zelaya solo se han fortalecido. Carlos Zelaya resultó nombrado secretario del Congreso Nacional, un puesto clave en el ámbito operativo del hemiciclo y, en la práctica, un presidente del Legislativo en funciones. Como jefe de bancada de LIBRE fue nombrado Rafael Sarmiento, quien es familiar directo de la presidenta.

En Honduras el tiempo corre demasiado rápido. En Catacamas, y en los pasillos del Congreso y de la Casa Presidencial, ya hay quienes lanzan cábalas para tratar de identificar cuál será el próximo movimiento de los Zelaya, y si este incluye potenciar a algún miembro del clan para que sea el futuro relevo de Xiomara. El actual director de Relaciones Públicas de Casa de Gobierno, Dassaev Aguilar, publicó el pasado 9 de mayo

una foto de Héctor Zelaya, el hijo-secretario privado de Xiomara⁷. Aguilar dijo que se encontraba «con el próximo presidente de Honduras». Ante los cuestionamientos, intentó escabullirse afirmando que él no estaba diciendo que eso sería en el próximo proceso electoral. Lo que sí es un hecho es que los Zelaya han acumulado poder y no quieren que se repita lo ocurrido en junio de 2009.

Berta Oliva, del Cofadeh, dice que no quiere ni repetir las palabras golpe de Estado, porque no quiere que la historia se repita, pero insiste en que las estructuras que dieron el golpe están intactas. «¿Quiénes son los que quitan y ponen presidentes? ¿Quiénes dan golpes de Estado en todo el mundo? Estados Unidos», se responde. Argumenta:

Lo que los poderes fácticos quieren demostrar ahora es que el gobierno de Xiomara es débil. Quisieron debilitarlo con las críticas a la amnistía y al inicio con lo del Congreso. Con el tema de que es Zelaya el que tiene el control y el que ejerce el poder, si él es el del poder y levanta al país ¿cuál es el problema? Cuando se instaló la dictadura, este hombre [Juan Orlando Hernández] tenía a su hermano en el Congreso, tenía a su hermana de ministra, a su hermano de asesor en seguridad, tenía a toda la familia en el gobierno, y antes eso no era visto como problema.

Doce años después de haber asestado el golpe de Estado, sentado en su silla, minúsculo en la enormidad de su casa, el general Romeo Vásquez analiza la Honduras que ahora es dirigida por aquellos que le provocaron un miedo tal que prefirió romper las normas constitucionales para frenar la incorporación del país a un «régimen como el de Venezuela». «Por esa situación que se dio en el 2009 es que ellos regresaron y se les regaló un partido. Deberían estar alegres», dice.

Vásquez opina que la presidenta puede tener una historia diferente. «Ella entró porque fue el pueblo que le dio el voto en una acción bonita, democrática y transparente». Aunque no está conforme con los primeros pasos, cree que hay que dar espacio a un gobierno que recién comienza. ▣

7. Rony Martínez: «Con el próximo presidente...», tuit, 10/5/2022, disponible en <<https://twitter.com/ronymartinezhn/status/1523855693790564352>>.

Reconfiguraciones políticas en Costa Rica

Del bipartidismo a la fragmentación

María José Cascante Matamoros /
Jesús Guzmán Castillo

El triunfo del economista Rodrigo Chaves en las elecciones presidenciales costarricenses de 2022 es el resultado de un largo proceso de atomización del sistema de partidos, crecimiento de la abstención y emergencia de nuevos tipos de liderazgos por fuera de las fuerzas tradicionales. Pese a las denuncias por acoso sexual, este ex-funcionario del Banco Mundial logró ganar las elecciones con un programa «antipolítico» que captó parte de las frustraciones de la ciudadanía.

Introducción

Los resultados electorales de Costa Rica en 2022 fueron sorprendentes en virtud de la historia de estabilidad democrática y bipartidismo que caracterizó al país durante las décadas de 1980 y 1990. No obstante, desde 1998 el sistema político y sus actores han venido transformándose de manera paulatina. Entre los cambios más importantes, se puede observar el crecimiento de la abstención, el surgimiento

María José Cascante Matamoros: es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Es profesora catedrática e investigadora en la Universidad de Costa Rica, institución en la que actualmente se desempeña como vicerrectora de Vida Estudiantil.

Jesús Guzmán Castillo: es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como profesor e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la misma casa de estudios.

Palabras claves: bipartidismo, sistema de partidos, Rodrigo Chaves, Costa Rica.

**La reciente
elección presidencial
parece alinearse
con otros liderazgos
conservadores
que se observan
en el continente**

de nuevos partidos políticos (algunos con importantes resultados electorales) y el paso de una competencia bipartidista a una pluralista¹. Adicionalmente, la reciente elección presidencial parece

alinearse con otros liderazgos conservadores que se observan en el continente y en parte del mundo: el nuevo presidente Rodrigo Chaves se postuló por un partido nuevo, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y su campaña estuvo marcada por las denuncias y sanciones por acoso sexual contra el candidato en el pasado reciente. El nuevo mandatario combina una clara tendencia conservadora en lo social con una liberal en lo económico, las cuales,

sumadas a su estilo confrontativo, recordaron a presidentes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele.

Los procesos electorales se han ido convirtiendo cada vez más en momentos de tensión, con una mayor cantidad de partidos políticos inscriptos y un recambio cada vez más rápido de liderazgos y de partidos. En este contexto, las características de las propias candidaturas se ven también modificadas debido a las nuevas condiciones políticas, culturales y sociales del país y de la región. Los datos de las encuestas han permitido cartografiar el aumento del malestar con la política y la fluidez de los apoyos a los partidos en las diferentes campañas electorales.

Este escenario nos deja muchas preguntas y nos convoca como científicos políticos a entender el fenómeno –con la dificultad de explicarlo mientras se desarrolla– y a actualizar investigaciones anteriores que han monitoreado los cambios del caso costarricense², así como aquellas que han alertado sobre las fuertes posibilidades de que se elija a un líder

1. M.J. Cascante: «Costa Rica. Los cambios en el sistema de partidos costarricense: viejos y nuevos actores en la competencia electoral» en Flavia Freidenberg (ed.): *Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015. México, América Central y República Dominicana*, INE / UNAM, Ciudad de México, 2016.

2. Ciska Raventos Vorst, Facio Fournier, Vinicio Marco, Diego Fernández Montero y Ronald Alfaro-Redondo: *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad*, Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) / Universidad de Costa Rica (UCR), San José, 2011; Jorge Rovira Mas: «¿Se debilita el bipartidismo?» en J. Rovira: *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, UCR, San José, 2001; J. Rovira Mas: «El sistema de partidos en devenir» en J. Rovira Mas: *Desafíos políticos de la Costa Rica actual*, UCR, San José, 2007; Mitchell A. Seligson: «¿Problemas en el paraíso? La erosión en el apoyo al sistema político y centroamericanización de Costa Rica 1978-1999» en J. Rovira Mas: *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, cit.; Fernando Sánchez: «Cambio en la dinámica electoral en Costa Rica: un caso de desalineamiento» en *América Latina Hoy* Nº 35, 2003; F. Sánchez: *Partidos políticos, elecciones y lealtades partidarias en Costa Rica*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007; M.J. Cascante: «Costa Rica. Los cambios en el sistema de partidos costarricense», cit.

populista³. Estas investigaciones han generado un acervo de información importante sobre el cambio en el sistema de partidos y sus consecuencias para la democracia. La realidad actual en la que se desenvuelve la democracia costarricense no es la misma que la de la época del bipartidismo: hay numerosos partidos políticos (nuevos y tradicionales), con posiciones ideológicas polarizadas y una baja participación ciudadana (aumento del abstencionismo), que además es heterogénea a lo largo del territorio.

Asimismo, es importante tener en cuenta las crecientes desigualdades socioeconómicas del país y las claras diferencias que existen entre el Valle Central y las zonas costeras y fronterizas, que afectan las percepciones ciudadanas sobre la democracia, la participación electoral y el ejercicio político⁴. Tener esto en cuenta es clave para las secciones que siguen.

Los partidos y el sistema político

Uno de los cambios más importantes en la competencia electoral costarricense —en la que solo los partidos pueden representar a la ciudadanía en puestos de elección popular— se vincula con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Movimiento Libertario (ML), pues la emergencia de estas fuerzas políticas constituye el principio de quiebre del bipartidismo tradicional entre el Partido Liberación Nacional (PLN) —una agrupación originalmente socialdemócrata que fue volviéndose de centro— y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que evolucionó hacia tendencias liberal-conservadoras. El PAC y el ML disputan el poder con las formaciones tradicionales y obtienen resultados electorales importantes en los niveles municipal y legislativo, y posteriormente —en el caso del PAC— en el Poder Ejecutivo.

En las elecciones más recientes participan candidaturas que evidencian nuevas rupturas en los actuales partidos, así como ofertas *outsider*, lo que dio lugar a una atomización de la oferta electoral. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no implica que haya aumentado la participación, lo que conlleva un mayor fraccionamiento del sistema de partidos. La mayoría de

3. R. Alfaro-Redondo, M.A. Seligson y Elizabeth Zechmeister: *Cultura política de la democracia en Costa Rica y en las Américas 2014. Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas*, Programa Estado de la Nación, San José, 2015; M.J. Cascante y Mónica Lara Escalante: «Intolerancia y desafección: transformaciones en el sistema de partidos en Costa Rica, 1953-2018» en Sebastián Mantilla (ed.): *Los partidos políticos en América Latina: ideología y estructura de la competencia*, CELAEP / Hanns-Seidel-Stiftung, Quito, 2020.

4. M.J. Cascante, Steffan Gómez Campos y Sharon Camacho: «Perspectivas territoriales de la competencia partidista» en R. Alfaro-Redondo y Felipe Alpízar Rodríguez (eds.): *Elecciones 2018 en Costa Rica: retrato de una democracia amenazada*, PEN, San José, 2020.

estas opciones políticas se concentran en el centro o centroderecha del espectro ideológico, con pocas opciones —con apoyo electoral— ubicadas en la centroizquierda. De estas últimas, el caso más importante es el del Frente Amplio (FA), que en algunos momentos ha obtenido buenos resultados en los niveles municipal y legislativo —en la elección de 2022 consiguió seis escaños—. El resto se divide entre opciones del centro a la derecha, con posiciones más o menos progresistas en el plano cultural.

A pesar de que los partidos nuevos surgidos a partir de 1998 lograron resultados electorales importantes, estos no necesariamente se sostuvieron en el tiempo ni fueron homogéneos en el territorio. El componente organizativo de estos partidos ha sido el principal reto que han enfrentado, lo que desde la teoría clásica de partidos políticos ha sido ampliamente señalado: «el proceso de formación de un partido es, en la mayoría de los casos, un proceso complejo y consistente a menudo en la aglutinación de una pluralidad de grupos políticos, a veces incluso fuertemente heterogéneos»⁵. Otra característica que se observa en las novedades partidistas es que se trata de partidos de «penetración territorial», es decir que surgen y se mantienen en el centro y desde ahí intentan arraigar en el territorio⁶. Reproducen así la dinámica que desde las zonas costeras y fronterizas ha sido tan criticada en el caso de los partidos tradicionales debido a su alejamiento de esas áreas.

A partir de 2014, con el triunfo de Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, como presidente en segunda vuelta electoral⁷, se produce la consolidación del pluralismo limitado. La campaña evidenció una gran volatilidad de la intención de voto y el resultado mostró una alta competitividad electoral. El PAC, que hizo del discurso contra la corrupción uno de sus ejes, se estrenó en el poder con una Asamblea Legislativa altamente fragmentada y sin mayoría, lo que constituía una coyuntura novedosa para Costa Rica.

La campaña electoral 2017-2018 se llevó adelante en medio de una crisis fiscal, que fue causa de una fuerte pérdida de popularidad del partido en el gobierno. Esto se vio reflejado en el reducido respaldo electoral para el nuevo candidato del PAC, Carlos Alvarado, con tan solo 5% según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en diciembre de 2017. La intención de voto a inicios de la campaña favorecía al PLN y al PUSC, con 25,2% y 11,5% respectivamente, y el porcentaje de indecisos superaba el 40%.

5. Angelo Panebianco: *Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos*, Alianza, Madrid, 2009.

6. *Ibíd.*

7. En unas primarias altamente competitivas, Solís logró desbancar al fundador y candidato habitual Ottón Solís.

En este contexto, el 9 de enero, tres semanas antes de las elecciones, se hizo pública la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, con carácter vinculante, exigió al Estado costarricense tomar medidas para reconocer los mismos derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo. Este evento dividió a la opinión pública. De inmediato, las posiciones del electorado y los partidos comenzaron a alinearse alrededor de sus perspectivas respecto al «matrimonio igualitario». Ya en ese momento habían surgido en la campaña otros candidatos de corte populista, que habían contribuido a la polarización de las posiciones políticas de los costarricenses. Sin embargo, el efecto de la opinión consultiva en contra de los derechos de las diversidades sexuales catapultó a Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional (PRN), un partido cristiano y populista⁸. La reacción progresista frente a esta emergencia funcionó como una ventana de oportunidad que fue aprovechada por el candidato del PAC. Ambos «Alvarados» –Fabricio, el evangélico, y Carlos, del PAC– pasaron a la segunda vuelta, donde finalmente se impuso el candidato del PAC, lo que abrió paso a un segundo gobierno de ese partido. Durante la campaña para la segunda ronda, el PAC tuvo que acordar con distintos sectores políticos, entre ellos el PUSC y el FA, para lograr la mayoría. En ese sentido, el triunfo de Carlos Alvarado se debió en parte a esas alianzas, pero en un sentido más amplio, al voto «barrera» contra Fabricio Alvarado, un candidato percibido como socialmente reaccionario⁹.

El segundo mandato del PAC fue muy diferente del primero y se dejaron ver las rupturas internas originadas en las diversas posturas ideológicas dentro del partido (entre sectores de centro que tuvieron mayor fuerza durante el primer gobierno y otros más de centroderecha que se fortalecieron en el gobierno de Alvarado), así como las tensiones dentro de las alianzas electorales plasmadas para lograr el triunfo. Algunas figuras importantes del PUSC y del FA, que habían integrado inicialmente el gabinete, salieron en momentos críticos, debido a las propuestas de reformas fiscales y de reestructuración del Estado social de derecho. El escaso capital político inicial de Alvarado estaba vinculado a las alianzas, pero también al apoyo de los sectores sociales

Las posiciones del electorado y los partidos comenzaron a alinearse alrededor de sus perspectivas respecto al «matrimonio igualitario»

8. Adrián Pignataro e Ilka Treminio: «Reto económico, valores y religión en las elecciones nacionales de Costa Rica 2018» en *Revista de Ciencias Políticas* vol. 39 N° 2, 2019.

9. M.J. Cascante y Priscila Vindas: «Introducción. Elecciones 2018 en Costa Rica» en M.J. Cascante (coord.): *Los límites de la democracia costarricense. Perspectivas feministas de la elección 2018*, UCR / Centro de Investigación y Estudios Políticos, San José, 2019.

que coadyuvaron para su victoria y rechazaron las reformas impulsadas por el gobierno, a lo que se sumaría luego la pandemia de covid-19.

Durante las primarias para la definición de la candidatura para 2021-2022, esa crisis se profundizó y Welmer Ramos surgió como un candidato débil, cercano a los sectores más socialdemócratas del PAC. Sin embargo, ese cambio de rumbo ideológico de la candidatura no fue fácil de transmitir a la ciudadanía ni logró evitar el derrumbe electoral del partido.

Surgimiento y triunfo del PPSD

La elección de 2022 mostró un incremento de nuevos partidos, con 11 que participaron por primera vez en un proceso electoral nacional de un total de 25. Entre ellos se encuentra el PPSD, encabezado por Rodrigo Chaves, quien junto con Pilar Cisneros como candidata a diputada por San José logró un resultado inédito para un partido nuevo y se hizo con la Presidencia de la República.

Chaves se dio a conocer en el país como ministro de Hacienda de Carlos Alvarado en noviembre de 2019, en sustitución de Rocío Aguilar, quien debió renunciar por una sanción interpuesta por la Contraloría General de la República. Antes de iniciar su vida política en Costa Rica, Chaves se había desempeñado como funcionario del Banco Mundial en varios puestos de

dirección, incluido el de director país en Indonesia, una de las sedes más grandes del banco en la región Asia-Pacífico¹⁰.

Chaves estuvo poco más de seis meses en el cargo de ministro de Hacienda, en el que se destacó por una serie de propuestas polémicas, entre ellas la idea de tasar con un «impuesto solidario» los salarios mayores a 500.000 colones costarricenses (alrededor de 700 dólares), y por sus enfrentamientos con mandos medios del ministerio. Finalmente,

luego de alegar diferencias de estilo entre ambos, el presidente lo cesó de su cargo después de que Chaves pidiera el veto de una ley recientemente aprobada en el Parlamento sobre la inaplicación de la regla fiscal en los gobiernos locales de Costa Rica¹¹.

Antes de iniciar su vida política, Chaves se había desempeñado como funcionario del Banco Mundial en varios puestos de dirección

10. Francisco Ruiz León: «Rodrigo Chaves: de ministro desconocido a presidente de Costa Rica» en *El Financiero*, 3/4/2022.

11. María Fernanda Cisneros: «Rodrigo Chaves renuncia como ministro de Hacienda por diferencias con el presidente Carlos Alvarado en el veto a municipalidades» en *El Financiero*, 28/5/2020; Carlos Mora: «¿Quién es Rodrigo Chaves, el nuevo presidente de la república?» en *Crhoy.com*, 8/5/2020.

Una vez apartado de su cargo, Chaves continuó como una figura política dedicada a defender su accionar al frente del Ministerio de Hacienda y a atacar al gobierno de Alvarado por su manejo de las finanzas públicas. A inicios de 2021, se dieron a conocer los esfuerzos de Chaves por encabezar una coalición electoral de oposición, pero esta posibilidad se esfumó a mitad de ese mismo año.

Finalmente, el 7 de julio se oficializó su candidatura presidencial por el PPSD, fundado en 2020 y desconocido hasta ese momento. En su lanzamiento, Chaves afirmó que la campaña debía realizarse «desde liderazgos frescos, honestos, y desde propuestas que realmente atiendan las necesidades de la gente», además de recalcar que tomaba la decisión de presentar su nombre como candidato «porque Costa Rica está en crisis y necesita patriotas para rescatarla (...) Tenemos la sabiduría, valentía y la capacidad para construir un mejor futuro para el país»¹². Estas palabras reflejan la tónica de su discurso durante toda la campaña, en el que resaltan elementos propios de su personalidad, su carácter y su discurso «antipolítico», proyectando la imagen de una persona experta en el área económica, con capacidad para la toma de decisiones fundamentales para el país, pero sin antecedentes políticos que puedan comprometerlo con grupos de interés específicos. Junto con esto, su discurso se centró en la «crisis» costarricense y acusó a los gobiernos de los partidos tradicionales (PLN y PUSC) y a los últimos dos del PAC de ser responsables de ella. De este modo, la campaña de Chaves optó por una retórica de corte populista-autoritario, con un discurso centrado en su persona como alguien capaz de enfrentar los grandes retos del país, culpando de la crisis actual a la «clase política tradicional», e indicando que temas ya resueltos podrían ser abordados vía referendo, o incluso negando sentencias previas de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones¹³. La línea discursiva de Chaves fue asumida también por Cisneros. El papel de la candidata a diputada por San José fue clave en la campaña, pues se logró explotar su imagen para dar a conocer y al mismo tiempo avalar el discurso de Chaves, quien era poco conocido a pesar de su paso por el gabinete del presidente Alvarado. Pese a ser periodista, Cisneros utilizó su capital simbólico para desacreditar a la prensa, tomando una actitud semejante a la del candidato, que hizo rutinarios sus ataques a los medios de comunicación, a los que acusaba

12. Cit. en Wendy Pérez: «Rodrigo Chaves anuncia su candidatura a la presidencia con el Partido Progreso Social Democrático» en *Elmundo.cr*, 7/7/2021.

13. Esteban Arrieta: «Rodrigo Chaves anuncia referendo para quitar las pensiones de lujo» en *Larepública.net*, 4/1/2022; Arianna Villalobos: «Marco jurídico actual impide propuestas de referendos de Rodrigo Chaves y PSD» en *Rádios UCR*, 24/3/2022.

de estar al servicio de los poderes fácticos del país para frenar la victoria del postulante del PPSD. El enfrentamiento con la prensa se inició el 30 de agosto de 2021, cuando el periódico *La Nación* dio a conocer una sanción de 2019 del Banco Mundial contra el entonces funcionario Chaves «por ‘insinuaciones sexuales’ y por un ‘patrón de comportamiento inapropiado no deseado’ entre los años 2008 y 2013», días antes de asumir el Ministerio de Hacienda, tema recalificado por un tribunal interno del Banco Mundial como acoso sexual¹⁴. El PPSD intentó desacreditar esta noticia, asegurando que a Chaves nunca se lo sancionó por acoso sexual y que el mismo banco lo había absuelto, pese a que en el expediente se evidenciaba lo contrario.

Tres fueron los puntos explotados por los contrincantes del PPSD: el paso de Chaves por el gobierno de Alvarado, su personalidad autoritaria y las acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, no calaron entre la población. Un estudio del CIEP determinó que 40% de las personas consultadas consideraba ciertas las acusaciones por acoso sexual contra Chaves, pero 66% señalaba que estas denuncias afectaban poco o nada su intención de voto por el candidato.

La campaña de Chaves se caracterizó, además de por las polémicas con la prensa, por la forma en que el candidato se expresaba en entrevistas y debates, denotando una actitud confrontativa y una personalidad autoritaria. Así, por ejemplo, afirmaba su intención de gobernar vía decreto en áreas que corresponden en exclusividad al Poder Legislativo, o de celebrar referendos para diversos temas para los cuales este mecanismo no está permitido o está limitado por la legislación costarricense –por ejemplo, derechos humanos, impuestos y pensiones–¹⁵.

Desde el anuncio de la candidatura de Chaves en julio de 2021 hasta el mes de febrero de 2022, el PPSD nunca encabezó la intención de voto en las encuestas, pero sí mostró una tendencia al alza en el mes de diciembre, cuando se consolidó en la segunda ronda. Durante la campaña previa al balotaje, el PPSD estuvo a la cabeza de los sondeos durante los casi dos meses de campaña.

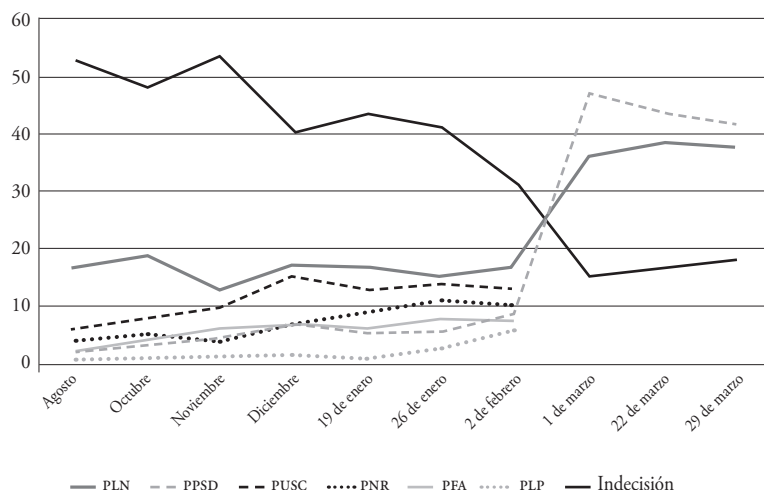
El PPSD quedó en segundo lugar en las presidenciales, lo que le permitió disputar el balotaje contra el PLN, y se ubicó como la segunda fracción de la Cámara de Diputados con un total de diez escaños, la cifra más baja de una fracción oficialista en la Asamblea Legislativa (igual a la obtenida por el PAC en el periodo 2014-2018).

14. Sofía Chinchilla Cerdas y Natasha Cambronero: «Banco Mundial sancionó a Rodrigo Chaves por acoso sexual» en *La Nación*, 30/8/2021.

15. Lucía Molina: «¿Es posible ‘poner a la gente a legislar’ por referendo?» en *Semanario Universidad*, 14/2/2022.

Gráfico 1

**Intención de voto de los principales partidos,
agosto de 2021-marzo de 2022**



Fuente: CIEP.

Los resultados obtenidos por el PPSD se dieron pese a diversos cuestionamientos. Además de la denuncia de acoso sexual contra Chaves, el partido fue acusado de manejar una estructura paralela de financiamiento para gastos propios de la campaña y del partido político, figura prohibida por la legislación costarricense. En este caso, se comprobó la existencia de un fideicomiso privado para recibir donaciones de personas físicas y jurídicas sin pasar por el control de las autoridades electorales, y un segundo caso de manejo de dinero para gastos electorales en una cuenta privada de la asistente personal de Chaves¹⁶. El PPSD también fue cuestionado por la sobreexposición de la candidata a la diputación por San José: la imagen de Pilar Cisneros aparecía en diversos *spots* y vallas publicitarias, sin que fuera candidata, en otras circunscripciones electorales,

16. Fabiola Pomareda García: «Rodrigo Chaves asegura que fideicomiso de \$135.000 existió solo en un periodo previo a la campaña» en *Semanario Universidad*, 22/3/2022; Natasha Cambronero: «Fideicomiso de Rodrigo Chaves alquiló sede en \$5.000 mensuales a sabiendas de que era para partido político» en *La Nación*, 27/3/2022.

lo que generó confusión en el electorado¹⁷. Además, se cuestionó a la agrupación por la carencia de cuadros políticos y técnicos adecuados para los distintos cargos en caso de llegar al Poder Ejecutivo, algo que el mismo Chaves negó, si bien indicó que para la conformación de su gabinete convocaría a personas de distintas fuerzas políticas. Pese al triunfo impulsado por los personalismos de Chaves y Cisneros, quedan dudas sobre la capacidad organizativa del PPSD y su penetración en el territorio. Este aspecto será evaluado en las elecciones municipales: este partido participará por primera vez en comicios locales históricamente dominados por el PLN.

Indicadores del sistema de partidos

Desde 2011 se comenzó a percibir el cambio en el sistema de partidos a través del análisis del abstencionismo que se venía observando desde varios años atrás¹⁸. Posteriormente, junto con el pluralismo limitado, se evidencia una etapa de nueva estabilidad que se mantiene hasta 2018, cuando vuelve a aumentar la abstención. Esa tendencia se mantiene en 2022 con el porcentaje más alto en una primera vuelta observado hasta la fecha (40,29%). El debate sobre la baja participación en la elección se contrapone a la gran cantidad de candidaturas para la Presidencia, muchas de ellas nuevas o producto de transfuguismo desde otros partidos.

Pese a este aumento en el número de partidos políticos, las encuestas muestran un apoyo ciudadano menguante. En noviembre de 2021, a un mes de iniciada la campaña electoral, el promedio de evaluaciones dado a los partidos por el CIEP era de 3,6 (en una escala de 0 a 10), lo que los mantenía en el lugar de las instituciones peor evaluadas en el país. Además, la afiliación partidaria muestra niveles históricamente bajos, con solo 23% de personas que indica simpatizar con una fuerza política.

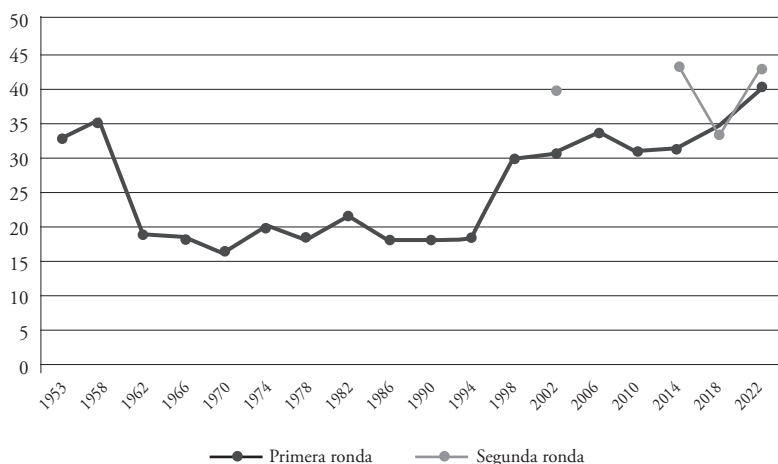
La baja participación electoral no es un dato azaroso. Muestra claramente la creciente apatía política que existe en Costa Rica. Los datos reflejan que,

17. Cisneros es una reconocida periodista que dirigió por muchos años el noticiero de Televisora de Costa Rica, el medio con mayor penetración a escala nacional. Durante su etapa como directora y presentadora de la edición del mediodía, se caracterizó por sus fuertes cuestionamientos a la clase política y por sus enfrentamientos con los gobiernos de Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014). Pese a que en distintas ocasiones dijo que no se involucraría en política electoral, el 30 de agosto de 2021 se anunció que encabezaría la papeleta legislativa del PPSD en la provincia de San José. W. Pérez: «Pilar Cisneros será candidata a diputada con el Partido Progreso Social Democrático» en *Elmundo.cr*, 30/8/2021.

18. Gracias a C. Raventós Vorst et al.: ob. cit.

Gráfico 2

Abstención electoral, 1953-2022 (en porcentaje)



Fuente: elaboración de los autores a partir de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, <www.tse.go.cr/pdf/elecciones/computovotos_febrero_abril_2018.pdf>.

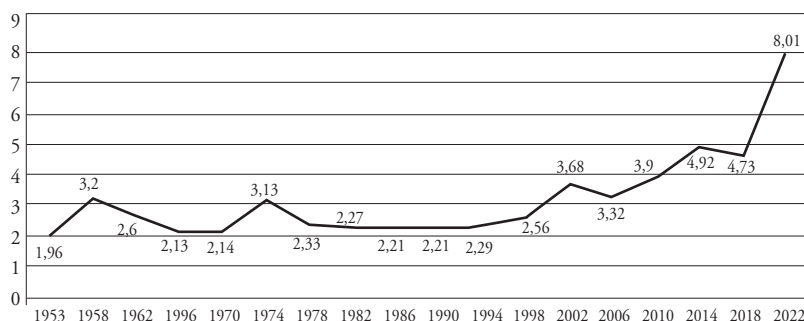
a pesar de la gran cantidad de candidaturas, no hay discursos o propuestas capaces de atraer nuevamente a la ciudadanía a las urnas. Las encuestas postelectorales del CIEP evidencian que quienes se abstienen toman decisiones estratégicas con respecto a su participación, es decir que la apatía no es respecto de la política sino de la oferta de la política electoral, y que el electorado que participa o se abstiene de votar no siempre es el mismo.

Con respecto a la cantidad de partidos políticos o fragmentación del sistema, se utiliza analíticamente un indicador denominado «número efectivo de partidos» que permite conocer, más allá de la cantidad de opciones, el peso electoral de estas, para de ese modo plantear categorías¹⁹. Los datos de 2022 son claramente dispares de la tendencia que se venía observando: a partir de 2002, se registra el cambio del bipartidismo a un pluralismo limitado que se mantiene hasta 2018, mientras que en el último periodo electoral el crecimiento de este indicador es de casi el doble de lo observado anteriormente. Un número efectivo de partidos de ocho es un indicador

19. Markku Laakso y Rein Taagepera: «Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe» en *Comparative Political Studies* vol. 12 Nº 1, 1979.

alto de la cantidad de partidos políticos que participan del proceso electoral y obtienen un resultado electoral importante (aunque no siempre se refleje en escaños en el Parlamento). La actual competencia electoral en Costa Rica es de tipo pluralista extremo²⁰, como consecuencia de la atomización.

Gráfico 3
Número efectivo de partidos, 1953-2022



Fuente: elaboración de los autores a partir de datos del Tribunal Supremo de Elecciones: «Atlas electoral», disponible en <<http://atlaselectoral.tse.go.cr/>>.

En síntesis, los cambios recientes en la competencia electoral muestran un escenario de competencia atomizado, con partidos políticos nuevos y fragmentación del voto, sin propuestas que convencan a la ciudadanía costarricense, y por lo tanto, de baja participación electoral.

Conclusiones

Hasta aquí se ha presentado una aproximación al análisis de la elección 2022 a través de una breve radiografía de los partidos políticos participantes, el sistema de partidos y el contexto electoral. De acuerdo con los datos presentados, se evidencia un nuevo punto de quiebre que no solo se muestra a través del alto número efectivo de partidos y la atomización de la competencia electoral, sino en el resultado en sí mismo.

El contexto electoral dejó a la vista que estos indicadores están acompañados de un resultado que responde a la ola de elección de nuevos liderazgos

20. Giovanni Sartori: *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza, Madrid, 2005, p. 168.

de tipo populista de derecha, que además representan un ataque directo contra los avances en derechos humanos, específicamente de la diversidad y de las mujeres. Además, se observa una consolidación en el país de propuestas económicas de tipo regresivas y fiscalistas, tanto en el nivel ejecutivo como en el legislativo.

Finalmente, vale la pena reflexionar sobre el nuevo aumento en la abstención, la erosión del apoyo a los partidos políticos y el posicionamiento de la retórica confrontativa como forma de campaña. Decíamos al comienzo que el riesgo populista había sido ya señalado en algunas investigaciones; la evidencia muestra que, a pesar del capital democrático costarricense, la coyuntura 2022 permitió que eso sucediera.

Las primeras semanas del actual gobierno reafirman algunas de las preocupaciones señaladas: el presidente Chaves ha intentado imponer posiciones mediante decretos presidenciales que, por ejemplo, eliminaron el uso de mascarillas e intentaron abolir la obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19 en el sector público. Con respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos, el gobierno impulsa una alianza con diversas iglesias para revisar una norma técnica que regula el aborto terapéutico, que después de mucho esfuerzo del movimiento de mujeres y feminista se puso en marcha durante el gobierno anterior. En poco tiempo, hay múltiples señales de que la propuesta de gobierno de Chaves se consolida en la vía de un conservadurismo de derecha. ☐

AMÉRICA LATINA HOY Revista de Ciencias Sociales

Abril de 2022

Salamanca

Vol. 90

ARTÍCULOS: La cohesión legislativa en la cámara más valorada: el caso del Senado de Chile, 1990-2018, **Hernán Campos-Parra y Patricio Navia**. La participación política de mujeres en gobiernos seccionales: las prefectas provinciales en Ecuador 1979-2019, **Santiago Basabe Serrano y Tatiana Quinga**. Opinión pública sobre el Estado y el mercado en América Latina, **Dinorah Azpuru, Elizabeth Carter y Mary Fran Malone**. Las materialidades comunicantes: los no objetos hablantes de la floresta amazónica digital, **Thiago Franco, Massimo Di Felice y Josias Ferreira de Souza**. Determinantes de la inversión familiar en capital humano para los hijos que pueden acceder a la educación superior, **Mateus Hurbano Bomfim Moreno y Rosangela Maria Pontili**. Efecto de la dependencia espacial y la gobernanza sobre la eficacia de las políticas públicas en los municipios brasileños, **Jaqueline Cavalari Sales y Marcos Wagner Da Fonseca**. Análisis de la productividad total de los factores en Colombia (1950-2017), **Alberto Gregorio Castellano Montiel y Andrés Felipe Orozco Suárez**. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Disponibles a texto completo todos los artículos de *América Latina Hoy* en
<www.americalahoy.es>.

América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales es una publicación cuatrimestral del Instituto de Iberoamérica con Ediciones Universidad de Salamanca.

Escribir y tirar arañazos

Entrevista a Camila Sosa Villada

Hinde Pomeraniec

Nació en la provincia de Córdoba, Argentina, en 1982 y no se hace fácil definirla en pocas palabras. Actriz, narradora, ensayista y poeta, estudió Comunicación Social y Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2013, el nombre que había elegido cuando quiso llevar uno de mujer porque no se identificaba con el sexo que le habían adjudicado al nacer fue estampado en su nuevo documento de identidad, que acredita su género femenino. Entonces, contaba esto:

Hace 31 años mis viejos tuvieron un hijo (...) Armaba muñecos, robots, a escondidas me pintaba con los

maquillajes de mi vieja. Me enamoraba en secreto de mis compañeros de banco, de mis profesores. Fui un niño que conoció muchas tristezas de golpe. No alcancé a aprender a mear de parado y ya me había enemistado para siempre con mi papá.

Con su primera novela, *Las malas*¹, se consagró inesperadamente como una de las autoras argentinas más potentes y transgresoras, lo que le dio también éxito en otros países, premios como el Sor Juana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Finestres de Narrativa, y traducciones en varios idiomas.

Hinde Pomeraniec: es periodista y escritora. Es autora de *Katrina, el imperio al desnudo* (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2008); de *Rusos de Putin: Postales de una era de orgullo nacional y poder implacable* ([2009] Ariel, Buenos Aires, 2019); de *Blackie. La dama que hacía hablar al país* (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010); y junto con Raquel San Martín, de *Dónde queda el Primer Mundo* (Aguilar, Buenos Aires, 2016). En 2017 ganó el Premio Konex de Platino como la mejor periodista literaria de la década en Argentina. Desde 2017 es editora del portal de noticias *Infobae*. En 2019 recibió el Premio Hrant Dink al periodismo argentino otorgado por el Consejo Nacional Armenio. Es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. En 2015 fue una de las organizadoras de #NiUnaMenos, la jornada de movilización masiva del 3 de junio en contra de la violencia machista y los femicidios.

Palabras claves: literatura, transcritura, travesti, *Las malas*, Camila Sosa Villada.

1. Tusquets, 2019, Barcelona.

Las malas es un libro inclasificable y atrevido que cuenta la historia de Tía Encarna, una travesti de la zona roja del parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, una suerte de gurú y madre colectiva que cobija en su casa a otras integrantes de la comunidad travesti que van por el mundo con toda su vida encima, una vida «que cabe en una carterita de mala muerte».

Como actriz, en 2009 Camila Sosa Villada estrenó su primer espectáculo unipersonal, *Carnes tolendas, retrato escénico de una travesti*, que sigue representándose con regularidad y con éxito. Además de actuar en teatro, hizo papeles en cine y en televisión.

Suele decir que su primer acto oficial de travestismo fue escribir. Es autora además del ensayo *El viaje inútil. Trans/escritura*², el relato *Tesis sobre una domesticación*³, el libro de poemas *La novia de Sandro*⁴ (nombre del blog que tuvo durante un tiempo) y el libro de relatos *Soy una tonta por quererte*⁵. Además de sus libros, tiene una vida intensa en las redes sociales, donde comunica sus gustos, sus miedos, su ironía y también exhibe sus provocaciones y su volcánica personalidad.

Fue prostituta, vendedora ambulante y empleada doméstica. En la actualidad es una de las escritoras más celebradas y convocadas no solo en su país de nacimiento sino en varias partes del mundo.

Fue la vergüenza de su familia, como dijo, y hoy se reconoce como la madre de sus padres...

Nuestra familia era muy pequeña porque éramos tres personas solamente, mi padre, mi madre y yo, vivíamos en una especie de silencio que era solamente interrumpido por las demandas y las órdenes de mi padre. Él había aprendido el mundo de esa manera y le quedaba cómodo eso, vivíamos una especie de silencio donde no se podía decir nada porque las respuestas eran muy violentas, entonces yo pocas veces tenía posibilidad de decir qué me estaba sucediendo a mí como ser humano. Qué me había pasado a mí siendo niña, siendo adolescente y habiendo asistido a un acontecimiento como este, que yo no pude evitar de ninguna manera. Nunca se me ocurrió ni siquiera que podía haber una alternativa a ser travesti, ¿entendés? Fijate que yo era muy pequeña y tenía 15 años en un pueblo de 5.000 habitantes, donde todo el mundo se conocía y era profundamente homófobo, y yo sabía que mi padre no me lo iba a perdonar nunca y sin embargo lo hice. Entonces, cuando hice mi obra *Carnes tolendas* y pude contarles qué me había sucedido a mí —porque además todo el tiempo yo había escuchado «esto que nos hacés», «esta traición que cometiste», «esto que te estás exponiendo a que te

2. La Uña Rota, Segovia, 2021.

3. Página/12, Buenos Aires, 2019.

4. Tusquets, Buenos Aires, 2020.

5. Tusquets, Barcelona, 2020.

encontremos [muerta] en una zanja», etc.—, de repente tenía una versión diferente, que era la mía...

Su palabra...

Mi relato. Lo que yo había visto y cómo lo estaba contando yo, y para ellos fue encontrarse con ellos mismos también. Mirá, mi padre vio la obra tarde, como tres o cuatro años después.

Ya era conocida como actriz...

Exactamente. Como la obra tenía un desnudo, él no quería verla todavía, un hombre de tantos años, verdad. Entonces la vio en [la provincia de] Catamarca, habíamos salido de gira y la vio ahí, y ¿sabés qué? A mitad de la función él empezó a sangrar por la nariz. Empezó a tener una hemorragia que terminó con su suéter de salir y su camisa de salir... Bañado en sangre. Yo llegué al camarín, entró mi mamá muy nerviosa y me dice: tu papá tuvo una pérdida de sangre por la nariz porque se ha puesto muy nervioso cuando te ha visto. Entonces, después, al rato, él entró, por supuesto lleno de lágrimas, y yo entendí finalmente que ese parto había terminado, que yo había terminado de sufrir y que los había traído al mundo de nuevo, ¿sabés?

¿Qué es lo que más le sorprende —si le sorprende, claro— del éxito que viene teniendo no solo en Argentina sino en cada lugar en el que se publica Las malas y se habla de usted?

Me sorprende cuánto puede molestar, cuánto puede significar para otros que a una persona a la que verdaderamente le han sacado todo desde que es chica hasta sus 37 años —que fue cuando me empezó a ir bien con *Las malas* y me relajé económicamente—, cómo los puede ofender, lo amenazados que se sienten colegas y otros respecto a que a una persona le vaya bien, sabiendo además que que te vaya bien es absolutamente azaroso, que no hay nada para hacer para que un libro tenga o no tenga éxito. Es algo que tiene que ver con la suerte, con los tiempos que nos tocan. Entonces bueno, me sorprende cómo mis colegas están mirando constantemente qué hago, qué dejo de hacer, qué tengo, qué no tengo, qué declaro, qué no declaro, completamente abstraídos en eso. Y como si eso fuera mi culpa, ¿sabés?

También me sorprende haber escuchado a un par de periodistas y a un par de colegas, y me llegan chismecitos también, de la idea de deberle algo a alguien. Como si por el hecho de que me fue bien hay que pensar que le estoy debiendo algo a un editor, a una editorial, a una persona que habló bien de mí. La idea de un descubrimiento también me sorprende muchísimo. Que los porteños piensen que me han «descubierto» determinadas personas y... Como si yo no hubiera hecho nada. Y yo, en verdad, desde 2009 que empecé a trabajar como actriz hasta ahora, lo único que he hecho ha sido trabajar. No he hecho otra cosa, ¿sabés? Trabajar, trabajar, trabajar. Poner en pie las ruinas que habían quedado de mi

vida. Bueno, eso no deja de sorprenderme, cómo el bienestar de alguien puede hacer tanto daño a la rutina de otras personas.

Hizo mucho, de todo para poder convertirse en la escritora que es, en la artista que es. ¿Hay algo que haría diferente? ¿Esta es la Camila con la que soñaba en sus momentos más duros?

No, nada. No cambiaría nada. Ni de lo que hice ni de lo que me hicieron. Ni de lo que me pasó. No cambiaría nada. Además, yo la verdad que cuando crecía no pensaba que estaba alimentando a una artista, ¿sabés? No pensaba «esto es para que vos crezcas como artista». Yo lo hacía porque tenía que comer, tenía que vivir y no quería volver a prostituirme. Y no quería volver a prostituirme no porque creyera que está mal o que es tanto más denigrante, degradante que cualquier otro trabajo. Sí creo que las condiciones en las que yo me prostituía eran bastante desfavorables, pero solamente me interesaba no extinguirme porque me estaba yendo mucho mejor económicamente siendo actriz que siendo prostituta. Y ahora, siendo escritora que siendo actriz. Y me siento a pensar porque me llegan propuestas constantemente, ahora como me han «descubierto» en Buenos Aires, me empiezan a llegar de nuevo propuestas para filmar, para estar en algunas películas, y yo lo único que pienso es en lo cansada que estoy de actuar, en lo que implica ponerse a interpretar un personaje, pero nunca lo hice

pensando que estaba haciendo crecer a una artista sino solo para poder llegar a fin de mes tranquila con el alquiler. Entonces bueno, lo cierto es que toda esa experiencia nutrió a mi actriz y a mi escritora, y por eso no lo cambiaría.

¿Se siente de alguna manera integrada al mundo de los escritores y de los intelectuales? ¿O se piensa como alguien diferente, como alguien que viene a empezar algo nuevo en la literatura?

Ay no, me siento fatal estando en climas así de escritores e intelectuales. Me siento completamente estúpida. Siento que no tengo nada para decir, que no tengo formación. Que mi recorrido como lectora es muy corto, muy placentero, pero corto. En verdad, casi siempre acierto con los libros que leo, entonces siempre ha sido de muchísimo gozo la lectura, de volverme loca leyendo. Pero nunca así, como mis colegas; la manera en que hablan de la literatura, la manera en que hablan de sus libros. No, no me siento parte para nada. Tampoco me siento como alguien diferente, pero bueno, no tengo esa mirada puesta en mí. Solamente estoy escribiendo. Mi relación más estrecha es con Paola Lucantis. Con Paulina Cossi. Bueno, con *la Viola* [Liliana Viola]. Lo fue con Juan Forn. Lo es con Gabriela Halac. Que son mis editores de siempre, digamos. Pero no tengo relación y tampoco me interesa tenerla con el mundo de los escritores en general. Como tampoco me interesó tenerla con los actores ni con las actrices ni con los directores [risas].

Como verás soy muy arisca. Así como soy expresiva, rutilante soy... Se puede decir que, expresiva es la palabra, que me expreso, la gente piensa que soy simpática pero en verdad soy muy tímida, entonces todo tipo de vínculos me cuestan muchísimo. Me cuesta mucho relacionarme con mis colegas, con los jefes de editoriales. Me aburro, me parece fatal, sin embargo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Cuando me invitan de una feria, de un festival, estoy ahí al pie del cañón trabajando, dando notas, hablando con el público, por supuesto, porque ese es mi trabajo una vez que terminé de escribir el libro. Pero no me siento parte de ese universo para nada. Después, cuando vuelvo a mi casa o cuando vuelvo al hotel solo quiero verme con mis amigos, los de siempre, que por suerte son los que están conmigo hace muchísimos años ya. Pienso en mi tóxico [risas] —mi chongo⁶—, pienso en mis padres, y nada más.

¿Usted siente la misma persecución hacia las travestis o piensa que las cosas cambiaron?

Bueno, lo que pasa es que vivimos rodeadas de gente políticamente correcta y no sabemos de dónde vienen los zarpazos, pero los zarpazos vienen igual. Es muy difícil identificar un enemigo

cuando se ha logrado una especie de maqueta del buen comportamiento y de la tolerancia que tiene que ver con el progresismo, me parece, y que no más al salir de Córdoba, de Rosario y de Buenos Aires una se empieza a enfrentar con otro tipo de mundo. Ese es el verdadero afuera, así es la gente genuina. Después bueno, puede haber alguien que te dice sí, somos todos, estamos todos incluidos en este sistema, estamos tratando de hacer lo mejor. Y, sin embargo, cuestiones que son muy básicas del buen vivir están siendo pasadas por alto, son ignoradas. Yo veo a mis amigas, las más viejas, las que tienen 60, las que tienen 70, las que tienen 50 incluso, con su dentadura deteriorada, con su vida deteriorada, sus casas destruidas, y digo bueno, ¿cómo?, si estamos todos hablando de que está todo bien, de que la Ley de Identidad de Género⁷ nos cambió, de que el decreto de cupo laboral travesti nos está haciendo mejor como sociedad⁸. ¿Cómo puede ser que exista esto también? Y eso tiene que ver con que hay cosas que no han cambiado. Y, sobre todo, que no han cambiado por fuera de los pequeños circulitos de mierda en los que nos movemos. Porque son eso, son círculos de porquería que no son de verdad. Que no tiene que ver con los aspectos que una puede crear a su alrededor

6. Amante o pareja [N. del E.]

7. Ley Nº 26.743, sancionada en 2012. La norma se ubicó entre las pioneras en el mundo en reconocer el derecho de las personas a ser inscriptas en su documento nacional de identidad de acuerdo con su identidad de género autopercibida [N. del E.].

8. La ley, de 2020, establece que las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior a 1% del total de los cargos [N. del E.].

en su vida, que es decidir estar cerca de personas que te traten bien y que te traten como la persona que sos, con lo que te merecés, ¿no?

En un momento en Las malas hay otra frase muy fuerte que dice: «a las travestis no nos nombra nadie salvo nosotras».

Sí, también está muy bien esa frase.

¿Le gusta escuchar que lean sus cosas?

Algunas, sí. Yo creo que, durante mucho tiempo, fue tan silenciado todo y sigue siendo tan silenciado que seguimos pidiendo que se nos nombre en los discursos políticos, que se nos nombre así como se dicen varones, mujeres, que también se diga travestis; seguimos pidiendo que reconozcan si nos desean, que reconozcan si nos cogen, que reconozcan que nos persiguen, que nos matan, yo digo, bueno, estamos reclamando verdaderamente que nos digan, que nos nombren, y que dejen de decir también «las travestis», que allí resumen una infinita diversidad de personas que están transitando de una manera tan diferente.

En los relatos de Soy una tonta por quererte, su nuevo libro de cuentos, aparece también, al igual que en Las malas, un universo modelo «surrealismo mágico», digamos, especie de fábula siglo XXI con su universo más familiar.

Bueno, es que es un universo que me interesa explotar y detonar también. Es decir, en el universo de las travestis

y de cómo se vinculan con el mundo me parece que hay mucho material todavía para escribir, para decir, para inventar. Pero, sobre todo, desde las travestis hacia el mundo y no al revés. Eso me parecía bastante interesante. Después, la presencia del paisaje, también. Yo creo que fui muy lastimada por ese monte en el que me crié. Lastimada para bien, digo, con gratitud. Esa herida que te hace un paisaje que es brutal, que es peligroso, y que te recuerda todo el tiempo que todo es naturaleza y que alrededor tuyo la naturaleza no es piadosa. Para eso están, si se quiere, las casas, las amistades, los amantes. Pero el poner un pie fuera de tu casa te expone a muchísimos peligros. Y eso sí me interesa muchísimo hacerlo y sí me interesa mucho ver a las travestis en un paisaje como ese. Muchas veces se me trata con muchísima indulgencia porque soy travesti, es decir me permiten decir cosas que a otra persona no se le permiten, me permiten escribir mal porque, bueno, porque soy travesti.

Le gusta pelear, ¿eh?

Me gusta pelear. Mirá, me gusta pelear porque se supone que la literatura es un terreno de conciliación con el mundo, con las ideas, con los afectos, y nadie habla del terreno de la crueldad que es la cultura también y la escritura, sobre todo. Entonces, bueno, yo estoy aprovechando ese espacio también para tirar arañazos. Digo la crueldad y hoy justo un amigo me decía «bueno, alguien tiene que hablar sobre la

crueldad travesti también, ¿no?». Entonces yo decía sí, yo reconozco que he sido muy cruel con mis padres, con mis amigos, con mis maestros, con el público, con gente que he amado, con mis amantes, con mis novios. Y en algún momento encontré que la herida yo se la tenía que hacer al mundo, ¿entendés? Y que esa herida tenía que tener mi nombre. Y eso hace que pueda dirigirme con crueldad hacia otros lugares, y eso me gusta.

¿Tiene bronca con algún feminismo en este momento o qué es, qué es esa diferencia?

No, bronca no. Sí creo que no me puedo quedar mucho en ningún lado. Eso primero. Luego entiendo que todo se estabiliza, que todo tiende a endurecerse, a cristalizarse y que es preciso hacer traiciones a todo eso, a los amores, a la familia, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de lucha, a nuestras compañeras de lucha. Que en el momento en que, yo digo el capitalismo pero también se dice tan poco cuando se dice capitalismo, cuando se dice neoliberalismo, pero cuando hay algo del mercado que comienza a meterse, y de la política sobre todo, digamos política, que toda política es capitalista, además. No existe, me parece, ningún otro tipo de política en este momento. Entonces, cuando la política se mete en esos movimientos, inmediatamente los enferma. Esta cosa que se dice de «todo es política». Yo no lo creo, no lo

creí y no lo voy a creer nunca eso de que todo es político, de que todo gesto humano es político y que todo gesto de cualquier ser con voluntad de vivir es político. Me parece que es decir una estupidez. Que eso no es tal. Que eso quedó viejo.

¿Y por qué término cambiaría la palabra «político»?

Por la cultura, o por la naturaleza.

¿Por la naturaleza?

Así es. Todo es naturaleza diría yo.

¿Volvemos al monte?

Sí. Yo creo que hay que comenzar a vincularse con los árboles de nuevo. Con los animales. Es una pena muy grande que desaparezcan especies que podrían estar vivas. Bueno, ahora mismo estamos con esos incendios en [la provincia de] Corrientes. Eso no puede pasar. Mirá, Svetlana Alexiévich tiene un libro que se llama *La guerra no tiene rostro de mujer*⁹ y uno de los testimonios que se da en ese libro es de una de las soldados que participó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis en Rusia, que van con su ejército, pasan por un pueblo, siguen de largo, y cuando vuelven al pueblo los nazis ya habían pasado por ahí, habían matado a toda la población y los habían tirado en fosas. Y ella dice algo que a mí nunca se me olvida, dice

9. Debate, Barcelona, 2015.

«habían hecho con esos cuerpos cosas que nunca imaginamos que se podían hacer». Y se conmueve contándolo. «Y lo habían hecho delante del bosque», dice, «muy cerca de donde estaba esa fosa pastaban los caballos y ellos habían hecho sobre esos cuerpos todo delante de la mirada de esos caballos». Y pensar que nosotros somos más inteligentes y que tenemos más derechos que un bosque, o que un monte, o que un humedal, o que una especie que no es humana me parece una desinteligencia muy grande. Si todo el mundo está viviendo gracias a un gato, gracias a un perro que le da ganas de volver a su casa a la noche. ¿Cómo puede ser que pensemos que somos superiores a eso? Y no tiene que ver con el especismo, no tiene que ver con el veganismo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con saber que somos parte de un todo lo que tiene voluntad de vivir.

¿Y quién es Camila Sosa Villada?

Nunca voy a reconocer quién soy, pero puedo sí decirte quién no soy, que es algo muy saludable y lo aprendí a hacer escuchando a Marlene Wayar¹⁰. Yo no soy una persona que golpee niños, no soy una persona que robe, tengo un margen enorme para desplazarme por todas las posibilidades infinitas que tiene la cultura para

existir, y para fugarse también. Me sucede en el amor: yo siento que me están reconociendo y me desenamoro porque no quiero que nadie se enamore de una cosa que se cristaliza. Yo he ido cambiando constantemente, ¿sabés? Por diferentes cosas que han pasado en mi vida...

En un momento de Las malas aparece una frase que dice: «Irse de todos los lugares, eso es ser travesti».

Ahhh, qué bonito es, ¿verdad? Es una frase muy linda.

Otra muy bonita es: «Nuestro cuerpo es nuestra patria», o: «El lenguaje es mío», todas cuestiones que tienen que ver con la afirmación, como definiciones de identidad.

Exactamente, sabiendo que es una de las cosas más mortíferas que existe, la identidad, el ideal del Yo es algo que causa muchísimo dolor en las personas, por eso en algún momento me relajé y dije bueno, estoy siendo de esta manera, posiblemente puedo cambiar...

Hace un tiempo, se definió como transcritora, a propósito de su libro de ensayos El viaje inútil: ahí sintió que estaba sucediendo algo, dice. Era 2017 y ya estaba

10. Psicóloga social y activista travesti argentina, es autora del libro *Travesti: una teoría lo suficientemente buena* (Muchas Nueces, Buenos Aires, 2018). Es coordinadora general de Futuro Transgénico, organización con la que formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, y cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe «Silvia Rivera». Es directora de *El Teje*, el primer periódico travesti de América Latina, desarrollado a partir de un taller realizado en el Centro Cultural Ricardo Rojas [N. del E.].

escribiendo la historia de la Tía Encarna, la protagonista de Las malas.

Ese año también estaba empezando a entrar a mi vida el feminismo, comenzando a entender algunas cosas que me sucedían, interpretándolas como algo social, como algo mucho más grande que no tenía que ver solamente conmigo, sino con algo estructural. Y yo pensé en la transescritura como un modo de hablar de qué sucede en la escritura cuando arriba una travesti, cuando una persona lee a una travesti porque verdaderamente la formación es inusual, es absolutamente inaudita para el resto de la sociedad, el acercamiento que pueda tener una travesti con el lenguaje, con la palabra, con la mentira, con el relato, con la ficción...

¿Incluso en una travesti que, como usted, estudió Comunicación en la universidad?

Sí, totalmente, sí, sí, es más, yo escribí algo así como que había aprendido a hablar como ellos, que es una cosa que a mí me resultaba muy sencilla, decir lo que ellos tienen ganas de escuchar. Cuando digo «ellos» digo todo el mundo que no era travesti, entonces yo sentía que era muy fácil. Había un par de cosas muy sencillas que hacer, que tener en cuenta y es con lo que inmediatamente decían: «ah, mirá, pero qué chica, es travesti pero mirá qué interesante que es, mira qué leída...»

Qué culta.

Qué culta, da gusto, no parece travesti. ☐

PÁGINAS

Junio de 2022

Lima

Nº 266

REFLEXIÓN: Apuntes en torno a la *Praedicate Evangelium*, **Edmundo Alarcón Caro**. La sinodalidad como fruto del conflicto (Hechos 15). Hacia una hermenéutica sinodal de la Palabra de Dios, **Juan Bytton, s.j.** ¿Hacia dónde mirar? Reflexiones sobre nuestra crisis política, **Gonzalo Gamio Gehri**. El Sínodo sobre la sinodalidad. Un proceso de conversión eclesial, **Juan Miguel Espinoza Portocarrero**. Carlos de Foucauld, el hermano universal, **Rocío Valdeavellano**. Ucrania muestra que debemos rechazar la posibilidad de que la guerra pueda ser justa, **Marie Dennis**. TESTIMONIOS: Aguchita: con las manos llenas, **Gustavo Gutiérrez**. Paul Farmer. Partió un gran luchador por la salud global. Recordando a Paul Farmer, **Steve Reifenberg**. Toño, amigo entrañable, **Miguel Cabrera y Flor de María León**. INFORME: Dos graves retrocesos en la educación escolar, **Carmen Lora**. DOCUMENTOS: Escuchar con los oídos del corazón, Mensaje del **papa Francisco**. Responsabilidad, estabilidad y respeto por la gobernabilidad en favor del pueblo peruano, **Conferencia Episcopal Peruana**. Por el derecho a una educación de calidad, **Consorcio Ignaciano de Educación**. Comunicado, **Iglesia Luterana del Perú**.

Edita y distribuye Centro de Estudios y Publicaciones, Belisario Flores 681 – Lince, Lima 14, Perú. Tel.: (511) 4336453 – Fax: (511) 4331078. Correo electrónico: <paginas@revistapaginas.com.pe>. Página web: <www.revistapaginas.com.pe>.

Summaries

Resúmenes en inglés

Iván Olano Duque: Three Moments in the Triumph of the Colombian Left [4792]

The victory of Gustavo Petro and Francia Márquez has begun a new stage in Colombia, whose axis is the construction of peace with social justice. Three moments during the electoral campaign and the celebrations of the results allow us to capture the dimensions of the current political scenario. Beyond the difficulties that the new government will face, a political, ethical and aesthetic change is in the air in the country.

Keywords: Democracy, Left Wing, Francia Márquez, Gustavo Petro, Colombia.

Riccardo Marchi: Portugal and the Radical Right: Another «Exception» that Falls [4793]

The arrival of the first Chega representative to Parliament in 2019 was a step in the consolidation of a right-wing force of a volume that had not existed since the fall of the dictatorship. In the three years that followed, Chega went through a process of organizational, ideological and electoral consolidation, which turned it

into the current third political force in number of representatives in Parliament, with links to other radical forces in the European and international arena.

Keywords: Extreme Right-Wing, Chega, Andrés Ventura, Portugal.

Gilles Bataillon: Central America: Violence and Pseudo-democracies (1987-2022) [4794]

Since the dawn of the 21st century, Central America has been caught up in a series of unprecedented tensions resulting from contradictory socio-political transformations. Peace agreements and democratic transitions are set against homicide rates that place the countries of the region among the most violent in the world, as well as with widespread corruption and processes of de-democratization in a large part of the region.

Keywords: Corruption, Democracy, Peace Agreements, Violence, Central America.

Salvador Martí i Puig: Urgencies in the Central America of the Bicentenary [4795]

Is the region better or worse off today than it was two decades ago in terms of the

health of democracy? Is there anything to celebrate in these times of bicentennials? What are the most urgent challenges facing Central American countries in the coming years? Some of these questions provide an overview of the problems and threats faced by the region in times of political, health, migration and environmental crises, not to mention the crisis of democracy.

Keywords: Authoritarianism, Climate Change, Crisis, Migration, Central America.

**Pedro Caldentey del Pozo:
Central America: End of an Era,
New Consensuses? [4796]**

The erosion of the Central American Integration System (SICA, in Spanish) is part of a broader weakening of regional integration and a multidimensional crisis. The Esquipulas Agreements, which served to advance peace, no longer seem functional in an environment that has changed dramatically. Central American countries need a new set of consensus and principles on which to build their response to a new development scenario.

Keywords: Crises, Integration, Central American Integration System (SICA), Central America.

**Elvira Cuadra Lira: Nicaragua:
From Revolutionary Project
to Authoritarian Dynasty [4797]**

After his electoral defeat in 1990, Daniel Ortega plotted his return to power. To do so, he made pacts with the old politics

and with the «big capital.» He finally achieved his goal in 2007, never to leave again: over the past years, he built a personal power that today is headed by himself and his wife and Vice-President Rosario Murillo. The imprisonment of historic Sandinist leaders was the latest move in an increasingly dictatorial trend.

Keywords: Authoritarianism, Sandinism, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Nicaragua.

**Nelson Rauda Zablah: The Bitcoin
Apostles Who Conquered
El Salvador [4798]**

More than a currency, bitcoin is a religion. It grew out of the ideas of apostles of liberty and activists persecuted by the government. Its users and believers speak of this non-state currency with devotion. How did these «libertarians» evolve into millionaires who use military helicopters to promote a government project in El Salvador? Why did its increasingly authoritarian president promote this risky –and eccentric– initiative? Many of the answers are submitted in this article.

Keywords: Authoritarianism, Bitcoin, Cryptocurrencies, Nayib Bukele, El Salvador.

**Ricardo Sáenz de Tejada:
Guatemala: From a Captive State
to a Pluri-National State? [4799]**

After the people's «spring» of 2015, which led to the imprisonment of leading figures in Guatemalan politics,

and the withdrawal of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG, in Spanish), the regime of impunity was restored. This is aggravated by the authoritarian trend of the current government, with Alejandro Giammattei as President. Despite the difficulties, the social movement, with a significant role played by indigenous peoples, seeks to chart a different course through a pluri-national Constituent Assembly.

Keywords: Authoritarianism, Corruption, International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG), Alejandro Giammattei, Guatemala.

Álvaro Murillo: Altered Elites in Costa Rica [4800]

The economic elites of the stable Central American country are living uncertain times due to economic trends, the erosion of political instruments and a love/hate relationship with the State and its institutional system. The imprisonment of a local construction magnate showed the limits of the rich, in a context of transformation of the local bourgeoisie.

Keywords: Corruption, Elite, State, Central America, Costa Rica.

Leonardo Aguilar / Jennifer Ávila: Honduras: Between Democratization and Family Power [4801]

Xiomara Castro became the first female president in the history of Honduras promoted by LIBRE, the party founded

by her husband, José Manuel «Mel» Zelaya, after the coup d'état that overthrew him in 2009. Castro has promised a new future for the country after 12 years of National Party autocracy. However, in these first months in office, the past has returned in the form of an amnesty that, for many, is impunity in disguise.

Keywords: Coup d'État, Democracy, Xiomara Castro, Manuel Zelaya, Honduras.

María José Cascante Matamoros / Jesús Guzmán Castillo: Political Reconfigurations in Costa Rica: From Bipartisanship to Fragmentation [4802]

The triumph of economist Rodrigo Chaves in the 2022 Costa Rican presidential elections is the result of a long process of atomization of the party system, the growth of abstention and the emergence of new types of leaderships outside the bounds of traditional forces. Despite allegations of sexual harassment, this former World Bank official managed to win the elections with an «anti-political» program that catalyzed part of the frustrations of the citizenry.

Keywords: Bipartisanship, Party System, Rodrigo Chaves, Costa Rica.

Hinde Pomeraniec: Writing and Fending Off: Interview with Camila Sosa Villada [4803]

Keywords: Literature, Trans Writing, Transvestite, Las malas, Camila Sosa Villada.

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail: <hola@waldhuter.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail: <yachaywa@accelerate.com>.

En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros, Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: Laberinto, 251 calle de la Cruz, San Juan, Tel.: (787) 724.8200, e-mail: <info@librerialaberinto.com>.

Ventas y consultas por internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 2.900	\$ 5.800

> Formas de pago

1. **Pago online:** Ingrese en <www.nuso.org/suscribirse/>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito:** Solicite instrucciones a <distribucion@nuso.org>

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de Fundación Foro Nueva Sociedad a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA

COYUNTURA

Natalia A. Volosin. En las cloacas de la política. Politización y cuentapropismo de la inteligencia argentina

Benedicte Bull / Antulio Rosales / Manuel Sutherland. Venezuela: lujo, desigualdades y «capitalismo bodegonero»

TRIBUNA GLOBAL

Pavel Barša. Europa del Este: los sueños extraviados de los liberales del 89

TEMA CENTRAL

Yanina Welp. Sin partidos la democracia no funciona; con estos partidos, tampoco

Nabila Abbas / Yves Sintomer. Tres imaginarios del sorteo en la política. ¿Democracia deliberativa, antipolítica o radical?

Steven Forti. Posverdad, *fake news* y extrema derecha contra la democracia

Cristina Lafont. Las asambleas ciudadanas y la concepción populista de representación

Nuria Alabao. Por una democracia feminista (siempre por hacer)

Santiago Gerchunoff. La crisis de la democracia como melancolía

Alicia Lissidini. Democracia directa y movilización social: lo que nos muestra Uruguay

Patricio Gómez Talavera. América Latina y los gatos de Cambises. Fragmentación política y desafíos para la democracia

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Maristella Svampa / Pablo Stefanoni. Pensar y actuar de manera anfibia

SUMMARIES

PROGRESISMOS LATINOAMERICANOS: SEGUNDO TIEMPO

COYUNTURA

Francisco J. Verdes-Montenegro. La «Europa geopolítica» y América Latina. ¿Una oportunidad para la autonomía estratégica?

TRIBUNA GLOBAL

Zbigniew Marcin Kowalewski. Tres formas históricas del imperialismo ruso

TEMA CENTRAL

José Natanson. La nueva nueva izquierda

Manuel Canelas. América Latina: no todo lo que brilla es un «ciclo»

Juan Pablo Luna. Una promesa llamada Gabriel Boric

Humberto Beck / Patrick Iber. AMLO y sus contradicciones

Marisa Glave. Perú: el profesor en su laberinto

María Esperanza Casullo. El curioso caso de un peronismo no verticalista

Fernando Molina. El mas boliviano ya no baila solo al ritmo de Evo

Cicero Araujo. ¿Una segunda «marea rosa» en Brasil?

Maryhen Jiménez. La democratización en Venezuela pasa también

por la reconstrucción del Estado

Leticia Salomón. Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Sheila Fitzpatrick / Mariano Schuster. Una vida entre los archivos soviéticos

SUMMARIES

www.nuso.org

Julio-Agosto 2022



NUEVA SOCIEDAD | 300

América Central frente a sí misma

COYUNTURA

Iván Olano Duque Tres momentos en el triunfo de la izquierda colombiana

TRIBUNA GLOBAL

Riccardo Marchi Portugal y la derecha radical: otra «excepción» que cae

TEMA CENTRAL

Gilles Bataillon América Central: violencias y pseudodemocracias (1987-2022)

Salvador Martí i Puig Urgencias en la América Central del bicentenario

Pedro Caldentey del Pozo América Central: fin de ciclo, ¿nuevos consensos?

Elvira Cuadra Lina Nicaragua: de proyecto revolucionario a dinastía autoritaria

Nelson Rauda Zablah Los apóstoles del bitcoin que conquistaron El Salvador

Ricardo Sáenz de Tejada Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional?

Álvaro Murillo Elites alteradas en Costa Rica

Leonardo Aguilar / Jennifer Ávila Honduras: entre la democratización y el poder familiar

María José Cascante / Jesús Guzmán Castillo Reconfiguraciones políticas en Costa Rica

ENTREVISTAS | 50 AÑOS

Camila Sosa Villada / Hinde Pomeraniec Escribir y tirar arañazos